



**Asamblea General**

PROVISIONAL

A/40/PV.55  
31 octubre 1985

ESPAÑOL

Cuadragésimo período de sesiones

ASAMBLEA GENERAL

ACTA TAQUIGRAFICA PROVISIONAL DE LA 55a. SESION

Celebrada en la Sede, Nueva York,  
el miércoles 30 de octubre de 1985, a las 15.00 horas

- Presidente: Sr. MORENO SALCEDO (Filipinas)  
(Vicepresidente)
- más tarde: Sr. DE PINIÉS (España)  
(Presidente)
- más tarde: Sra. CASTRO DE BARISH (Costa Rica)  
(Vicepresidenta)
- más tarde: Sr. MOUSHOUTAS (Chipre)  
(Vicepresidente)
- Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica [35]: (continuación)
- a) Informe del Comité Especial contra el Apartheid;
  - b) Informe del Comité ad hoc para la elaboración de una convención internacional contra el apartheid en los deportes;
  - c) Informe del Secretario General
  - d) Informe de la Comisión Política Especial

/...

Este documento contiene la versión taquigráfica de los discursos pronunciados en español y de la interpretación de los demás discursos. El texto definitivo será reproducido en los Documentos Oficiales de la Asamblea General.

Las correcciones deben referirse solamente a los discursos originales y se enviarán firmadas por un miembro de la delegación interesada, e incorporadas en un ejemplar del acta, dentro del plazo de una semana, a la Jefa de la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Departamento de Servicios de Conferencias, 2 United Nations Plaza, oficina DC2-0750.

- Organización de los trabajos
- Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica [35]: (continuación)
  - a) Informe del Comité Especial contra el Apartheid;
  - b) Informe del Comité ad hoc para la elaboración de una convención internacional contra el apartheid en los deportes;
  - c) Informe del Secretario General
  - d) Informe de la Comisión Política Especial

Se abre la sesión a las 15.30 horas.

TEMA 35 DEL PROGRAMA (continuación)

POLITICA DE APARTHEID DEL GOBIERNO DE SUDAFRICA:

- a) INFORME DEL COMITE ESPECIAL CONTRA EL APARTHEID (A/40/22 y Add.1 a 4);
- b) INFORME DEL COMITE AD HOC PARA LA ELABORACION DE UNA CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA EL APARTHEID EN LOS DEPORTES (A/40/36);
- c) INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (A/40/780);
- d) INFORME DE LA COMISION POLITICA ESPECIAL (A/40/805)

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Antes de dar la palabra al primer orador, desearía instar a los representantes a que, de acuerdo con el párrafo 71 del anexo V del reglamento, tomen la palabra según el orden de su inscripción en la lista de oradores, entendiéndose que los que no puedan hacerlo pasarán al final de la lista de ese día, a menos que hayan cambiado el orden de sus intervenciones con otros representantes.

Deseo informar también a los representantes de que, habida cuenta del gran número de oradores inscritos en relación con el tema que se examina, el debate se proseguirá mañana por la mañana. El jueves por la tarde la Asamblea General comenzará a examinar el tema 14 del programa, "Informe del Organismo Internacional de Energía Atómica".

Sr. AZZAROUK (Jamahiriya Arabe Libia) (interpretación del árabe): A pesar del hecho de que las Naciones Unidas han comprendido la malignidad de la política de apartheid, han dado a esa cuestión la mayor prioridad, la han incluido en el programa de la Asamblea General desde 1952 y han realizado prolongadas deliberaciones a partir de ese entonces; a pesar de todas las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas sobre la eliminación del apartheid y del hecho de que la comunidad internacional ha solicitado constantemente que se ponga término a ese crimen, cometido no sólo contra los pueblos de Sudáfrica y de Namibia sino contra toda la humanidad, crimen que representa una vergüenza que sólo puede ser eliminada mediante la liberación de los pueblos de Sudáfrica y de Namibia de esta práctica opresiva; pese a todo esto, el régimen de apartheid persiste en perpetuar su política y privar a los africanos de sus derechos más fundamentales. Todos los días, en abierto desafío a la voluntad internacional, se violan los derechos humanos y se somete a los ciudadanos de Sudáfrica a las formas más brutales de explotación, supresión y opresión. También se los somete a los actos más brutales de encarcelamiento, tortura y asesinato, no por haber cometido algún delito, sino simplemente porque los africanos piden justicia, igualdad y libertad. Al imponer un estado de emergencia, el Gobierno de la Sudáfrica racista ha convertido a ese país en una gran prisión.

Sudáfrica es hoy escenario de grandes levantamientos populares que representan un nuevo capítulo en la lucha épica de los pueblos de Sudáfrica por lograr sus derechos humanos fundamentales. A pesar de los actos salvajes de opresión cometidos por el régimen racista de Pretoria; pese a los asesinatos masivos, los encarcelamientos y las detenciones, a pesar de todas las formas de opresión que afectan a todas las categorías de la población, como sindicalistas, trabajadores, estudiantes, clérigos e incluso niños; pese al hecho de que persigue a los militantes y los acusa de traición sólo porque luchan para eliminar el mal del sistema de apartheid; pese a todos estos actos criminales que comete el régimen racista, se ha fortalecido la decisión del pueblo de Sudáfrica de eliminar el sistema de apartheid y lograr la igualdad de todos los ciudadanos. De ahí el aumento de la lucha armada y la resistencia, pese a los actos criminales de intimidación.

Frente a estos levantamientos, el régimen de Pretoria trata de fortalecer su capacidad nuclear y militar y ha incrementado sus gastos militares para el período 1984-1985 en un 21,4% con relación al período 1983-1984, como se menciona en

detalle en el documento A/40/22. Todo esto puede convertir a Sudáfrica en un punto focal de tirantez persistente y hacer que continúe su agresión contra países vecinos, intimidándolos y perpetuando la política de apartheid en Sudáfrica. El régimen minoritario blanco, en un intento desesperado por detener la lucha heroica del pueblo de Sudáfrica, lucha que aumenta cada día, está recurriendo a todos los medios, como la expulsión masiva de poblaciones a los llamados territorios patrios tribales o bantustanes, que no son más que campamentos de detención masiva para los negros. También prohíbe todas las reuniones de aquellas organizaciones que se oponen a la política de apartheid.

Todos estos actos, cometidos en el marco de la política agresiva de Sudáfrica, y todas sus salvajes medidas terroristas que se aplican en virtud de la política de apartheid, no han de impedir el logro del objetivo por el cual están luchando los pueblos de Sudáfrica mediante sus sacrificios cotidianos, a saber, el establecimiento de una sociedad basada en la libertad y la igualdad, sin discriminación, y la eliminación de la opresión y la dominación del pueblo de Sudáfrica, a fin de liberar a dicho pueblo y restituirle su dignidad humana, y destruir los instrumentos de opresión.

El régimen de apartheid, que representa una agresión constante contra la mayoría de la población de Sudáfrica, no sólo comete actos inhumanos en Sudáfrica y Namibia sino que ha ido más allá, causando daños y provocando la inestabilidad en el Africa meridional en su conjunto. Comete actos de agresión y lleva a cabo ataques militares contra Lesotho, Botswana y Angola, y también realiza actos de sabotaje contra la infraestructura de países vecinos, impidiendo su desarrollo. A pesar de estas aborrecibles políticas y estos actos de agresión del régimen racista de Sudáfrica y no obstante todas las resoluciones de las Naciones Unidas que piden la retención de toda cooperación con ese régimen, varios países occidentales mantienen todavía una estrecha colaboración con el régimen racista y le brindan ayuda material y moral. Todas las formas de asistencia económica, política y militar que se otorgan al régimen racista de Sudáfrica han de alentarle a persistir en su opresión y agresión. El llamamiento de los países imperialistas a adoptar una política de apaciguamiento y aplicar lo que se denomina una política de participación constructiva no ha de servir para nada, pues sólo protegerá al régimen racista y demorará la eliminación inevitable de los males del apartheid.

Las fingidas reformas instituidas por el régimen de apartheid en Sudáfrica de tanto en tanto, como la nueva constitución, no hacen más que fortalecer la política de apartheid y constituyen una maniobra que no puede engañar al pueblo de Sudáfrica ni a la comunidad internacional.

El régimen racista de Sudáfrica todavía recibe apoyo de otro régimen racista, a saber, la entidad sionista que se encuentra en la Palestina ocupada. Esto no es sorprendente, ya que el carácter racista de los dos sistemas los ha unido e impulsado a cooperar en todos los ámbitos. En el documento A/40/22/Add.2 se enumeran las formas de esta cooperación en las esferas nuclear, militar, económica, académica, cultural y deportiva. Ese documento dice lo siguiente:

"La colaboración entre Israel y Sudáfrica no se limita a la contratación de ingenieros y técnicos sino que incluye el intercambio de visitas y conocimientos técnicos en las esferas militar y nuclear, así como la participación de soldados de ambos países en ejercicios y entrenamiento militares. Se informó que Israel alentaba a los judíos de Sudáfrica a que viajaran a Israel y prestaran servicios en la fuerzas armadas durante un mes por año." (A/40/22/Add.2, párr. 20)

La cooperación nuclear entre la entidad sionista racista en la Palestina ocupada y el régimen racista de Sudáfrica amenaza la seguridad de Africa y de la nación árabe, al igual que la paz y la seguridad internacionales.

La política de apartheid es un crimen de lesa humanidad y contra la dignidad humana. La comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos por eliminar esa política. La tragedia de los pueblos de Sudáfrica y de Namibia, bajo el apartheid y la ocupación, exige medidas eficaces de la comunidad internacional para eliminar el apartheid y establecer un sistema democrático que responda a la voluntad de las masas y que asegure la igualdad, la libertad y la justicia, sin discriminación alguna. También exige un apoyo ilimitado a la lucha armada que llevan a cabo los pueblos de Sudáfrica y de Namibia por su dignidad, dentro de una sociedad basada en la igualdad de todos, sin consideraciones de raza, color o creencias.\*

Las Naciones Unidas, en particular el Consejo de Seguridad, deben imponer sanciones obligatorias amplias contra Sudáfrica para inducir a abandonar la política de apartheid y asegurar que se establezca el gobierno de la mayoría y el pueblo de Namibia obtenga su independencia. El terror y la tortura que practica el régimen sudafricano, la perpetuación de la política de apartheid en Sudáfrica en desafío de las resoluciones de las Naciones Unidas y los actos de agresión cometidos contra países vecinos, así como el fortalecimiento de la capacidad militar y nuclear del régimen minoritario hacen imperativo que la comunidad internacional imponga sanciones obligatorias amplias contra ese régimen.

La Jamahiriya Arabe Libia cree que la política de apartheid debe ser eliminada. Por lo tanto, desde la revolución del 1° de septiembre de 1969 ha boicoteado el sistema de apartheid en Sudáfrica, en todas las esferas, y ha impuesto una proscripción amplia en todas las relaciones con ese sistema.

En conclusión, rindo homenaje al Comité Especial contra el Apartheid, bajo la Presidencia del Embajador Joseph Garba, de Nigeria, por los esfuerzos que ha realizado para movilizar a la opinión pública mundial contra la política de apartheid. También rendimos tributo a los esfuerzos realizados por el Comité ad hoc para la elaboración de una convención internacional contra el apartheid en los deportes. Esa convención será otra contribución a la eliminación de los males del apartheid.

---

\* El Presidente ocupa la Presidencia.

Sr. ICAZA GALLARD (Nicaragua): Hace 40 años, después de una cruenta guerra y a un elevadísimo costo para la humanidad, las fuerzas nazifascistas fueron derrotadas.

Hoy, 40 años después, la comunidad internacional sigue siendo testigo del crimen contra la humanidad que esas mismas fuerzas responsables de la última conflagración mundial están perpetrando en Sudáfrica.

Hoy, 36 años después de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el apartheid continúa violentando todas y cada una de sus cláusulas.

En ninguna otra parte del mundo el racismo es abrazado de forma tan desvergonzada y tan brutalmente impuesto como en Sudáfrica. Todos los aspectos de la vida de la sociedad sudafricana son estrictamente regulados de acuerdo a una clasificación racial de la población. Los africanos representan más del 75% de la población y, sin embargo, éstos no tienen derecho a vivir en el 87% del territorio sudafricano, reservado para los blancos. Esos africanos han sufrido y continúan sufriendo hoy todo tipo de discriminación en el trabajo, en la escuela, en los hospitales, en los centros de diversión. Ello es el resultado de una política puesta en práctica de forma deliberada por la minoría blanca de ese país, institucionalizada a través de un complejo conjunto de leyes que se obliga a cumplir a través de una brutal represión. Se equivoca quien vea en el apartheid una simple expresión de intolerancia racial: el racismo es parte integral y la forma de operar de este sistema pero su objetivo último es la dominación política y la explotación económica de la inmensa mayoría de la población sudafricana.

La política de bantustanes donde millones de negros han sido obligados a vivir encarcelados en su propia patria, la represión desmedida, los arrestos masivos y los asesinatos son sólo la punta del iceberg de lo que en realidad es ese aborrecible sistema.

La naturaleza del apartheid y su supervivencia no son casuales. Las políticas racistas han sido y siguen siendo funcionales para el desarrollo de un capitalismo recalcitrante, y es ese capitalismo quien mantiene el apartheid, lo oxigena y lo permite.

El tratamiento subhumano y la cruel explotación del trabajador negro, el obrero esclavizado, las leyes laborales al servicio de la empresa que acarrearán reducción en los costos de producción, constituyen condiciones seductoras para



inmensos emporios económicos occidentales que invierten en Sudáfrica. Esta ventaja, unida a la disposición de Pretoria de servir de gendarme imperialista en Africa austral y el Atlántico Sur han convertido a Sudáfrica en el más valioso aliado del imperialismo, cuyas relaciones son tan cercanas como obvias.

La cruenta represión interna, la política de constante agresión y desestabilización contra los Estados de la línea del frente y la ocupación ilegal de Namibia son el resultado de la política de apartheid del régimen sudafricano, el cual, por su propia naturaleza, necesita del terror para poder sobrevivir.

Está claro que el régimen de Pretoria constituye una permanente amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Es por eso que no podemos aspirar a moderarlo o reformarlo. Nuestra aspiración única e inmutable debe ser la erradicación total y definitiva del apartheid. Sólo entonces habrá paz, seguridad y justicia en esa región del mundo.

Está claro, igualmente, que las políticas inhumanas del apartheid son permitidas por quienes, en claro desafío a los llamados y las resoluciones de las Naciones Unidas, mantienen relaciones comerciales, financieras, militares y diplomáticas con ese régimen.

Es necesario reflexionar con alarma sobre lo rápido que han olvidado las políticas nazis algunos países que fueron víctimas del nazismo y que hoy son el más fuerte pilar donde descansa la sobrevivencia del régimen de apartheid.

Es necesario reconocer que la presión por una efectiva acción internacional contra el apartheid ha crecido en los últimos años. Algunos importantes países occidentales han empezado a tomar acciones unilaterales tendientes a reducir sus relaciones económicas y comerciales con Sudáfrica y han expresado su apoyo a la imposición de sanciones obligatorias en contra de Sudáfrica. Sin embargo, la colaboración a todos los niveles, militar, tecnológico, financiero, comercial y cultural, de parte de los Estados Unidos de América con el régimen de Sudáfrica continúa prácticamente inalterada. Igualmente continúa inalterada la hipócrita y falsa "política del compromiso constructivo".

Ya no es un secreto para nadie que los llamados "compromisos constructivos" junto con los intentos de maquillaje interno sólo sirven para perpetuar ese odioso régimen, y con él, los intereses extranjeros en Sudáfrica y Namibia.

La represión en Sudáfrica ha llegado a un nivel en el que todos los sectores oprimidos se han unido para resistir y combatir la tiranía. La insurrección popular es precisamente consecuencia inevitable de las políticas represivas.

A pesar de la descabellada represión, del asesinato diario de patriotas negros y del virtual estado de sitio en que vive la mayoría de la población sudafricana, la resistencia del pueblo sudafricano crece día a día. Esta intensificación dramática de la lucha de liberación, tanto en Namibia como en la misma Sudáfrica, es tan seria que ha llevado a decir al General de División de las fuerzas armadas sudafricanas, Clark, que ellos ya están viviendo en circunstancias políticas, económicas, ideológicas y militares usualmente asociadas con una guerra generalizada.

Es obvia la creciente determinación del pueblo sudafricano de llegar hasta las últimas consecuencias para lograr su derecho a la libertad, la igualdad, la justicia y la autodeterminación. Ello ha llevado a algunos a criticar la llamada "espiral de la violencia" en Sudáfrica, crítica cuyo único fin es el de ocultar y evitar el señalamiento abierto del principal responsable de esta situación, Sudáfrica, causante de la destrucción de la paz y la estabilidad regionales. Precisamente actitudes como esas son las que alientan a Pretoria a consolidar su poder a través de la intensificación de nuevas formas de represión, a través de la continuación de su ocupación ilegal de Namibia y de sus agresiones contra los países de la línea del frente.

La situación es explosiva y no puede continuar así. Los aliados de Sudáfrica tienen hoy la oportunidad de demostrar su "amor por la democracia y la libertad".

En Sudáfrica y Namibia no existen "paladines de la libertad" como los que bajo órdenes de Washington tratan de derrocar al Gobierno legítimo y revolucionario de Nicaragua.

Mi delegación se pregunta: ¿por qué si los Estados Unidos se toman la libertad de andar por el mundo derrocando "gobiernos totalitarios", no le presta asistencia a los patriotas sudafricanos en su lucha contra la tiranía del apartheid?

Para el Gobierno norteamericano, en el caso de Sudáfrica, es irrelevante la suspensión de libertades, es insignificante la matanza indiscriminada, la tortura y la forzada reubicación de millones de negros en los bantustanes.

Para el Presidente Reagan no existe el apartheid, no existe Namibia, no existe la política de terrorismo de Estado practicada por Sudáfrica contra los Estados de la línea del frente, no existe tampoco Oriente Medio, con la ocupación ilegal de territorios árabes y la violación sistemática de los derechos inalienables del pueblo palestino. Así como tampoco existe América Latina, empeñada hoy, a través del Grupo de Contadora en hallar una salida pacífica y negociada a la grave crisis centroamericana.

Pero nuestros pueblos, el pueblo sudafricano, el pueblo palestino, los pueblos centroamericanos, saben quién es el enemigo común. Los maquillajes ya no funcionan, el apartheid está condenado por la historia y esta misma historia también condenará a los responsables de perpetuar ese odioso régimen.

La comunidad internacional debe ser más beligerante, debe exigir que se respeten las resoluciones de las Naciones Unidas, que se apliquen el embargo y las sanciones en contra de la Sudáfrica racista.

Nicaragua apoya la propuesta de la Organización de la Unidad Africana de llevar a cabo una conferencia mundial sobre sanciones contra Sudáfrica, que debe coincidir con el décimo aniversario de la insurrección de Soweto de junio de 1976.

Es responsabilidad de la comunidad internacional apoyar a los pueblos sudafricano y namibiano en su justa lucha. Mientras el apartheid esté vivo, la humanidad entera estará esclavizada. Igualmente es un reto y una obligación de la comunidad de naciones apoyar en todo lo que sea posible a los movimientos de liberación de Namibia y Sudáfrica.

No podrá haber paz en el Africa meridional mientras los derechos de las grandes mayorías sean impunemente masacrados, no podrá haber paz mientras estén presos héroes como Nelson Mandela y miles de patriotas más, no podrá haber paz mientras exista una Namibia ocupada y usurpada, no podrá haber paz mientras persistan las políticas de agresión y desestabilización en contra de los hermanos países de la línea del frente, no podrá haber paz mientras exista el apartheid.

La heroica lucha del pueblo sudafricano continuará. No podrá ser calmada la ira de un pueblo que ha tomado la decisión de ser libre. Los nicaragüenses

conocemos muy bien esa experiencia y, por eso, nuestro apoyo a la lucha justa de la South West Africa People's Organization (SWAPO) y del African National Congress (ANC), es incondicional y activa, es de hermanos en lucha hasta alcanzar la libertad, la justicia y la paz.

Sr. KEISALO (Finlandia) (interpretación del inglés): El Gobierno de Finlandia se siente muy preocupado ante el rápido deterioro de la situación en Sudáfrica y ante la creciente violencia y el derramamiento de sangre. El estado de emergencia implantado por el Gobierno sudafricano sólo ha servido para intensificar el antagonismo entre el Gobierno y la mayoría del pueblo sudafricano. Las reformas limitadas aplicadas hasta ahora no tienen significado alguno, ya que no modifican los rasgos básicos del sistema. Sólo la abolición del apartheid, junto con el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de todos los sudafricanos, puede constituir la base para una evolución pacífica y democrática de la sociedad sudafricana.

En las Naciones Unidas, Finlandia, en estrecha cooperación con los demás países nórdicos, ha laborado por la erradicación del sistema racista en Sudáfrica y el traspaso del poder en el país a un gobierno elegido libre y democráticamente. Tenemos la convicción de que la mejor manera de hacer presión sobre Sudáfrica estriba en adoptar medidas unánimes por parte de la comunidad internacional.

Hemos recalcado la importancia de las sanciones obligatorias impuestas por el Consejo de Seguridad. Dada la situación actual de Gobierno sudafricano, les quedan muy pocas posibilidades a los países Miembros de las Naciones Unidas. Cuando la persuasión y los llamamientos no sirven para nada, las sanciones constituyen el único medio. En consecuencia, Finlandia ha pedido que el Consejo de Seguridad imponga medidas eficaces, ya que está convencida de que conducirían a los resultados deseados.

Aunque haya cambiado el clima internacional, todavía no han podido adoptarse las sanciones. En el ínterin, Finlandia, junto con los otros países nórdicos, ha decidido adoptar medidas unilaterales a fin de restringir aún más sus relaciones económicas y de otra índole con Sudáfrica. Instamos a los demás países a que adopten medidas similares para aumentar la presión internacional sobre el Gobierno sudafricano. Además, las medidas recomendadas en las resoluciones 558 (1984) y 569 (1985) del Consejo de Seguridad, así como de la resolución 39/72 G de la

Asamblea General, sobre una acción internacional concertada para la eliminación del apartheid debe aplicarse por todos los países y especialmente por los que más comercian con Sudáfrica.

En 1978, los países nórdicos aprobaron un programa conjunto de acción contra el apartheid. Hace menos de dos semanas ese programa fue revisado y ampliado por los Ministros de Relaciones Exteriores nórdicos. Se ha distribuido como documento A/40/754 de las Naciones Unidas. Los países nórdicos trabajarán en las Naciones Unidas porque el Consejo de Seguridad apruebe sanciones, por ejemplo, en materia de inversiones, comercio y transporte, así como para que se cumpla estrictamente la resolución 418 (1977) del Consejo de Seguridad sobre un embargo de armas. Un boicoteo conjunto de los transportes de petróleo es uno de los elementos de esta política.

Al mismo tiempo, los países nórdicos han adoptado un cierto número de medidas unilaterales que aplicarán en el plano nacional. La mayor parte de dichas medidas son de orden económico, incluyendo la prohibición o el desaliento de nuevas inversiones o la concesión de préstamos, así como la plena aplicación de las medidas recomendadas por el Consejo de Seguridad de conformidad con su resolución 569 (1985). Además, los países nórdicos incrementarán su asistencia humanitaria a los refugiados y a los movimientos de liberación junto con las víctimas y los antagonistas del apartheid, así como incrementarán la asistencia a los Estados de la línea del frente y a los países de la Conferencia de Coordinación del Desarrollo del Africa Meridional, cooperando con estos países a fin de reducir su dependencia respecto de Sudáfrica y, de este modo, redoblar su capacidad para resistir la política de desestabilización de ese país. Finlandia considera esta labor como un proceso dinámico en marcha. El grupo de trabajo nórdico continuará considerando y evaluando la posibilidad de nuevas medidas contra Sudáfrica.

Aunque nuestras relaciones con Sudáfrica ya son reducidas, el Gobierno de Finlandia implantará en breve una nueva legislación para aplicar medidas nacionales relativas a las relaciones económicas y comerciales con Sudáfrica. Nuestra asistencia directa e indirecta a los movimientos de liberación y a los pueblos oprimidos de Sudáfrica y Namibia será asimismo incrementada.

El apartheid genera violencia no sólo internamente sino también en el orden externo. El Gobierno de Sudáfrica, a través de su intensificada agresión militar y de sus presiones económicas, ha tratado de desestabilizar a los Estados vecinos en un intento de forzarlos a que caigan dentro del ámbito de su dominación. Estos actos de agresión constituyen un grave obstáculo para la paz y la seguridad internacionales y, por lo tanto, han sido unánimemente condenados por los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El Gobierno sudafricano no ha podido dar una explicación aceptable respecto de tales actos por la sencilla razón de que no existe explicación alguna.

Hace un año nos referimos en nuestra declaración ante la Asamblea General al Obispo Desmond Tutu y a su labor en pro de una solución negociada para el dilema sudafricano. Este año nos ha alentado el hecho de que, a pesar de que la situación en el país es cada vez más grave, él ha seguido insistiendo sin temor en la iniciación del diálogo entre el Gobierno y los auténticos representantes de la

mayoría sudafricana. Nos sentimos estimulados por el hecho de que, aunque nos va faltando tiempo, todavía existe la posibilidad de un cambio pacífico en Sudáfrica. Estamos de acuerdo con él en pedir la abolición inmediata del estado de emergencia, la liberación de todos los prisioneros políticos y el libre retorno de los que están en el exilio, así como, en última instancia, el desmantelamiento del opresivo sistema de apartheid. Con esta finalidad, por las Naciones Unidas, por su Consejo de Seguridad y por cada Estado Miembro en particular, debemos actuar ahora.

Sr. SIKAULU (Zambia) (interpretación del inglés): Permítaseme comenzar encomiando al Comité Especial contra el Apartheid y a su Presidente, el Embajador Garba, de Nigeria, por seguir desempeñando un papel indispensable, activo e importante en la campaña internacional contra el apartheid. El Comité Especial cuenta con el amplio apoyo de Zambia y sus informes a la Asamblea General, que contienen una cantidad ingente de información, son, sin duda alguna, de inmenso valor.

Es muy oportuno que la Asamblea General se ocupe en este período de sesiones de la cuestión del apartheid inmediatamente después del debate general y de la conmemoración del cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas. La prioridad concedida a la consideración de este tema se justifica plenamente en razón de que se está librando rápidamente en Sudáfrica un enfrentamiento de proporciones apocalípticas entre las fuerzas que propugnan el cambio, la mayoría negra oprimida, y el régimen racista de la minoría blanca, que trata desesperadamente de perpetuar el azote del apartheid.

Hace tiempo que el apartheid ha sido declarado por la comunidad internacional como crimen de lesa humanidad. Muchos de nuestros países, al propiciar la erradicación del apartheid, han señalado reiteradamente que ese sistema es intrínsecamente violento y que en sí mismo constituye una amenaza no sólo para la paz y la estabilidad de la región sino también para la paz y la seguridad internacionales. Naturalmente, es así aparte del hecho de que el apartheid fue concebido y se lo practica como instrumento de la minoría blanca para la dominación y explotación de la mayoría negra de Sudáfrica.

¿Quién puede dudar ahora de que el apartheid es violento por su propia naturaleza? Casi a diario la comunidad internacional pudo apreciar el año pasado en las pantallas de la televisión las brutalidades de la policía y de las fuerzas militares sudafricanas, así como tener noticias de ellas por medio de la radio

o de los periódicos y revistas. Esas brutalidades de la policía y de las fuerzas militares sudafricanas se han llevado a cabo y continúan practicándose contra hombres, mujeres y niños inocentes que se atreven a protestar contra el apartheid y todo lo que él representa.

No le ha importado al régimen del apartheid el que la población haya recurrido a medios de protesta no violentos. Bastó con que osaran protestar. Centenares de ellos, de hecho arriba de un millar, fueron matados a sangre fría por el régimen. Muchos otros resultaron mutilados o fueron detenidos y torturados. En realidad el régimen ha impuesto el estado de emergencia en diversas partes de Sudáfrica.

Hace unos pocos días el Obispo Desmond Tutu se dirigió a la Comisión Política Especial. Fiel a su carácter y a su reputación, habló con moderación, razonable y objetivamente respecto de la situación prevaleciente en Sudáfrica. Explicó sus esfuerzos por alentar un proceso de cambio pacífico, apartándose del apartheid y del gobierno de la minoría para instaurar una sociedad justa, democrática y no racial en una Sudáfrica fundada en el gobierno de la mayoría. Tal como él lo expuso ante la Comisión Política Especial, el régimen de Pretoria no sólo ha despreciado sus esfuerzos en ese sentido sino que incluso le negó la cortesía de una reunión con el Sr. P.W. Botha.

El Obispo Tutu es una de las múltiples voces de la razón que se han escuchado a lo largo de toda la historia torturada de Sudáfrica. Allan Boesak, un colega muy próximo al Obispo Tutu, fue pasible de detención por tratar de ser razonable al propugnar el cambio pacífico para Sudáfrica, libre del apartheid. Es innecesario señalar que el African National Congress (ANC) trató literalmente por decenios de trabajar en pro del cambio pacífico en Sudáfrica, y lo único que logró fue que muchos de sus dirigentes, incluido Nelson Mandela, terminaran en la prisión de Robbin Island.



Los acontecimientos que están ocurriendo actualmente en Sudáfrica demuestran claramente que se ha agotado la paciencia de la mayoría oprimida. Ha salido a las calles a demostrar de obra y de palabra que ya no puede tolerar el sistema de apartheid que la ha oprimido, deshumanizado y explotado durante demasiado tiempo. Quiere que se lo erradique ahora mismo y está dispuesta a pagar cualquier precio por su eliminación. Ha sido sometida a tanto sufrimiento y denigración por tanto tiempo a manos del apartheid que para ella la línea entre la vida y la muerte no es más que algo filosófico; ya no existe.

Así es que esa mayoría ya no teme al terrorismo que practica contra ella el régimen. Está marchando hacia la libertad y ni siquiera las formas más viles de represión de la policía y del ejército la detendrán.

Es importante que la comunidad internacional no se confunda por la situación en Sudáfrica. Los que hacen la apología del régimen de Pretoria parecen tratar de convencer al mundo de que el régimen se está apartando lentamente del apartheid. Los supuestos cambios en el sistema de apartheid que anuncia el régimen de Pretoria de vez en cuando son saludados por ellos como algo significativo y merecedor del aliento de la comunidad internacional. Así es que, una y otra vez, se nos advierte que es mejor no arruinarlo todo.

La verdad es que el régimen de Pretoria no ha realizado ningún cambio para alejarse del apartheid. Sigue tan patológicamente comprometido con éste como siempre. Los supuestos cambios que se han introducido tenían por objetivo mejorar el aspecto del apartheid mientras se aseguraba que permaneciera intacto. Las especulaciones del régimen de Pretoria a este respecto fueron, precisamente, engañar y confundir a la comunidad internacional y, dentro de la propia Sudáfrica, dividir al pueblo oprimido. El corazón y el alma del apartheid no han sido afectados en ninguna de las llamadas reformas emprendidas por el régimen. De todos modos, como hemos señalado reiteradamente, el apartheid no se puede reformar: debe ser erradicado totalmente.

No hay duda de que todos nuestros países manifiestan aborrecer el sistema de apartheid practicado por el régimen sudafricano y que todos lo condenamos en las diversas declaraciones que formulamos. En esto estamos todos unidos y, quizás, también acerca de la necesidad de que se acabe con ese sistema maligno. También es cierto que hay opiniones diversas en esta Asamblea en cuanto a la manera mejor y más rápida de contribuir a la erradicación del apartheid. Lo ideal sería que no existiera esa divergencia de opiniones y que todos trabajáramos juntos en pos de un objetivo común.

Pero seamos francos, y digamos que la diferencia de opiniones que existe en esta Asamblea acerca de cómo abordar el problema del apartheid se da esencialmente entre una minoría de dos o tres Estados y la abrumadora mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas. La posición de la mayoría de los Estados Miembros, que además está hallando creciente apoyo público popular en todos los países, y es también, desde luego, la posición del pueblo oprimido de Sudáfrica y de sus movimientos de liberación, tiene la oposición de una minoría de dos o tres Gobiernos representados en esta Asamblea.

Ahora bien, está muy bien hablar de la necesidad de que adoptemos una posición común a fin de darle una advertencia bien firme a Sudáfrica. Naturalmente, eso es deseable y deberíamos hacer todo lo necesario para encontrar un denominador común. Pero, ¿acaso no constituiría un acto de moralina hipócrita que una minoría de dos o tres Estados rechazara continuamente la posición de la mayoría y tratara de convencer a ésta de que abandonara esa posición y, en cambio, se uniera a la posición minoritaria en bien de la unidad? ¿Acaso sólo uniéndonos a la opinión de la minoría estaríamos enviando una firme advertencia a Sudáfrica? ¿No podría ser que es la minoría de los Estados, cuya opinión no es en general compartida, sea quien tenga que reconsiderar su posición?

Sí, el problema del apartheid no es nuevo. Las Naciones Unidas lo ha estado debatiendo durante muchos años. Se ha hecho todo lo posible por argumentar con Sudáfrica sobre la necesidad de poner término al apartheid, por persuadirla y halagarla. Sudáfrica no respondió. Por tanto, no abogamos en pro de las sanciones económicas contra Sudáfrica simplemente por amor a las sanciones. El pueblo oprimido no está en la calle arriesgando su vida por amor a la violencia y al derramamiento de sangre. Los movimientos de liberación de Sudáfrica no recurren a la lucha armada por amor a la guerra, con todas sus consecuencias.

Es importante que tengamos sentido histórico. Hemos alcanzado esta etapa precisamente debido a la intransigencia del régimen de Sudáfrica. Los que se oponen al criterio de la mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas en realidad no están sugiriendo nada nuevo. El Manifiesto de Lusaka de 1969, que es un documento oficial de las Naciones Unidas - por dar sólo un ejemplo - es muy elocuente en su defensa del cambio pacífico en Sudáfrica.

Y por supuesto, no estamos diciendo que queramos escribir la constitución de Sudáfrica. Ello, reconocemos, es responsabilidad del propio pueblo sudafricano. Es por esto que hemos exhortado reiteradamente a las negociaciones entre el régimen minoritario blanco y los dirigentes auténticos del pueblo oprimido.

Al preconizar las sanciones económicas contra Sudáfrica, siempre hemos destacado que, a nuestro juicio, son el único medio pacífico disponible que queda para provocar el cambio dada la intransigencia del régimen de Pretoria. Las sanciones tienen el propósito de contribuir a una solución pronta del problema del apartheid en Sudáfrica y de reducir al mínimo el derramamiento de sangre en ese país.

Los mismos países que se oponen a las sanciones económicas contra Sudáfrica se han apresurado a imponerlas contra otros países, sin consideraciones en cuanto a si serían efectivas o si en realidad afectarían negativamente a personas inocentes para las cuales no estaban destinadas. Y en su oposición contra las sanciones contra Sudáfrica, esos países no están diciendo categóricamente que se oponen a las sanciones por sí mismas y que bajo ninguna circunstancia las aplicarían contra ningún país del mundo. De esta manera, no podemos sino preguntarnos cuáles son sus razones verdaderas para objetarlas.

Naturalmente, no es agradable para ningún país pertenecer a la categoría de aliado, amigo, partidario o defensor de Sudáfrica. Pero la realidad de la situación es que hay países en esta Asamblea que siempre son reticentes a actuar con decisión contra Sudáfrica. El régimen de Pretoria los considera sus amigos y aliados, y algunos de ellos han declarado abiertamente que Sudáfrica es un aliado. Pero lo más importante es que su reticencia a actuar decididamente contra Sudáfrica, sus declaraciones a veces ambivalentes y su recurso al uso del veto en el Consejo de Seguridad para evitar que se tomen medidas contra ella, han tenido como consecuencia alentar a Sudáfrica en su desafío a las Naciones Unidas y en su intransigencia, ya sea con respecto al apartheid, a la independencia de Namibia o a sus actos implacables de agresión y desestabilización contra países africanos independientes de la región.

Quizás sea por esta razón que Sudáfrica se presenta como un bastión en contra del comunismo en el Africa meridional y un custodio de los valores occidentales.

Nunca podrá hacerse demasiado hincapié en que la situación de Sudáfrica es sumamente grave. Es una situación que requiere medidas urgentes y osadas por parte del régimen de Pretoria si se quiere evitar la catástrofe. Como ya lo recalcó mi Presidente, Su Excelencia el Sr. K.D. Kaunda, cuando se dirigió a la Asamblea General el 22 de octubre de 1985, es menester que Sudáfrica haga ahora lo siguiente: primero, declarar sin equívocos que el apartheid es una cuestión liquidada y que el Presidente Botha está dispuesto a reunirse con los dirigentes auténticos del pueblo oprimido para discutir el futuro de Sudáfrica; segundo, levantar el estado de emergencia; tercero, rescindir la proscripción del African National Congress (ANC) y de otros partidos políticos; y, cuarto, poner en libertad a Nelson Mandela y a otros prisioneros políticos.

No es necesario tampoco referirse a la posición colectiva adoptada por los Jefes de Gobierno del Commonwealth en su última reunión en las Bahamas. Esa posición se adoptó después de conversaciones serias, prolongadas y difíciles. Zambia espera que Sudáfrica tenga en cuenta la posición del Commonwealth y que si no lo hace en un período de seis meses, se aplicarán las medidas adicionales previstas por los Jefes de Estado del Commonwealth contra ese país.

La comunidad internacional en su conjunto no puede limitarse a ser mero espectador ante la catástrofe que se desarrolla en Sudáfrica. Debe hacerse cuanto sea posible para que el apartheid se convierta en algo del pasado y para crear en su lugar un sociedad libre y democrática para todo el pueblo de Sudáfrica.

Por último, aunque también muy importante, deseo encomiar en nombre de mi delegación al Comité ad hoc para la elaboración de una convención internacional contra el apartheid en los deportes, presidido por mi amigo Besley Maycock, de Barbados, por haber concluido con éxito su labor. La importancia del proyecto de convención en la embestida contra el apartheid nunca pueda exagerarse. Por lo tanto, Zambia abraza la esperanza y el anhelo de que la Asamblea General lo apruebe por unanimidad y que todos los Estados se apresuren a firmar y ratificar el proyecto de convención.

Haji OMAR (Brunei Darussalam) (interpretación del inglés):

Sr. Presidente: Deseo manifestarle en nombre de mi delegación nuestras más sinceras felicitaciones por su elección para la Presidencia de este cuadragésimo período de sesiones de la Asamblea General. Su fervor y enorme experiencia son bien conocidos en las Naciones Unidas y confiamos en que bajo su capaz dirección a este período de sesiones de la Asamblea General se verá coronado por el éxito. Por su parte, la delegación de Brunei Darussalam no escatimará esfuerzo alguno para cooperar con usted en la realización de sus importantes tareas en los difíciles meses venideros. Deseo expresar también nuestra gratitud, como lo hicieron otros oradores que me precedieron, al Presidente saliente, el Sr. Paul Lusaka, por su invaluable contribución a la labor del trigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General.

Una de las cuestiones que año tras año ha acaparado muchísimo tiempo, tanto en la Asamblea General de las Naciones Unidas como en el Consejo de Seguridad, ha sido la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica. Una vez más, la Asamblea General centrará este año su atención en esa cuestión. En efecto, figura en un lugar preeminente del programa de la Asamblea, lo que indica su importancia y el hecho de que la eliminación de las lamentables políticas de apartheid y discriminación racial practicadas por el Gobierno de Sudáfrica es una cuestión de extrema urgencia.

Los 24 millones de negros de Sudáfrica siguen siendo víctimas del régimen racista, que confiere derechos y privilegios políticos únicamente a la minoría blanca. La mayoría discriminada se ve privada de sus derechos sociales, económicos y políticos, negándosele asimismo la ciudadanía en la tierra de sus antepasados.

La situación actual en Sudáfrica no ofrece perspectivas de rápida solución que propicien la paz y la seguridad en el país y en toda la región. Este pueblo tan sufrido ya no puede soportar más la opresión y la represión. Para ellos se ha terminado la época de los llamamientos verbales y se ha acabado su paciencia. Movida por la desesperación, la mayoría negra ha recurrido a la violencia para luchar por la libertad y la justicia. Para ellos, la violencia parece ser el único medio de hacer que se oigan sus voces y se atiendan sus necesidades.

La deplorable situación que presenciamos hoy en Sudáfrica muestra claramente que la política de apartheid no tiene lugar en este mundo civilizado. Esta constituye la peor forma de segregación humana y, al imponerla con crueldad, el Gobierno de Sudáfrica se encuentra ahora con la peor crisis que haya enfrentado nunca, tanto en el plano interno como en el internacional. El país está sacudido por disturbios raciales que alcanzan las proporciones de una revolución. Manifestaciones, revueltas y boicoteos provocados por el pueblo están a la orden del día. Se responde a estas actividades con detenciones en masa y con la tortura y los asesinatos de hombres, mujeres e incluso niños inocentes. La explosiva situación de Sudáfrica se ve agravada por la declaración de un estado de urgencia impuesto en 36 distritos de la región de Ciudad de El Cabo. El régimen de Pretoria usó esta circunstancia como pretexto para entregarse a detenciones y asesinatos en masa. Sin embargo, tales actividades no lograron amordazar la oposición a las prácticas humillantes del régimen sino que, por el contrario, la violencia prosigue.

Las hostilidades desatadas por el régimen racista no se detienen en sus propias fronteras. Las fuerzas de ocupación sudafricanas en Namibia están utilizando a ese país como base para lanzar ataques armados contra Estados africanos independientes de la región. Angola, por ejemplo, ha sido blanco constante de agresiones durante los últimos 10 años. Entre los países que han sufrido el mismo trato figuran a Mozambique, Lesotho, Botswana y Zimbabwe. A menos que se elimine el flagelo del apartheid, jamás podrá lograrse una paz y una estabilidad duraderas en esa región.

Brunei Darussalam puede tener dimensiones pequeñas y estar alejado de Sudáfrica. Empero, no somos indiferentes ante la crueldad y la hostilidad que impone el régimen sudafricano a su pueblo. Mi país, unilateralmente o de consuno con otras naciones, no vacilará en condenar al régimen racista. Brunei Darussalam rechaza el apartheid en todas sus manifestaciones porque es un crimen de lesa humanidad y una amenaza para la paz y la seguridad mundiales. El apartheid debe ser totalmente desmantelado y nunca debe permitirse que pueda recuperarse.

Jamás deberá defenderse ni permitirse que persista la criminal política de Sudáfrica. A este respecto, mi país encomia los esfuerzos emprendidos por una serie de países desarrollados para imponer sanciones económicas y militares obligatorias a Sudáfrica. Creemos que este esfuerzo internacional concertado hará recobrar la razón a Sudáfrica y la inducirá a empezar a analizar su política y sus prácticas de apartheid y de discriminación racial. Instamos encarecidamente a los demás países a que tomen medidas similares para ejercer presión sobre Sudáfrica a fin de que modifique su política.

Si Sudáfrica es sincera en su deseo de poner fin a la violencia que se ha enseñoreado actualmente en el país, debiera escuchar el llamamiento universal en pro de la negociación entre el Gobierno y los representantes de la mayoría negra. Debe crearse una atmósfera adecuada para la iniciación de ese proceso, incluyendo la liberación inmediata e incondicional de Nelson Mandela y de todos los presos políticos negros.

Por último, pedimos una vez más al Gobierno de Sudáfrica que ponga fin a la opresión de su pueblo. El recurso a la violencia no resolverá el problema; la violencia tiene que terminar; debe permitirse al pueblo que ejerza su derecho inalienable a la libre determinación y al establecimiento de un Gobierno justo, que promueva la coexistencia pacífica entre los sudafricanos.

Sr. GBEHO (Ghana) (interpretación del inglés): Una vez más se pide a la Asamblea General que considere la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica y, aunque, muy a pesar nuestro, tenemos que reconocer que el apartheid sigue existiendo, hay que reconocer también que se han producido acontecimientos muy importantes en la situación sudafricana desde que la Asamblea General adoptara sus resoluciones sobre el tema, el año pasado. Esos acontecimientos han sido ampliamente difundidos y prácticamente todo el mundo está unido en su rechazo al sistema de apartheid. Sólo diferimos en el modo de eliminarlo. No me propongo, por lo tanto, repetir todos los argumentos esgrimidos contra un sistema juzgado ya por la comunidad internacional como un crimen de lesa humanidad y contra la conciencia humana. Mi delegación opina que en este debate debemos centrar la atención en lo que debe hacerse con carácter inmediato para conseguir la eliminación del racismo, la discriminación racial y el apartheid en Sudáfrica.

Desde que la Asamblea General consideró el asunto por última vez, Sudáfrica ha estado en fermentación; los negros explotados y humillados se han alzado ahora contra la opresión y el régimen racista sabe sin duda alguna que su pueblo rechaza en forma total el apartheid y conoce su deseo de una sociedad libre, no racial y democrática. La reacción criminal del régimen racista, por otra parte, es bien conocida, aunque ha sorprendido al mundo por su brutalidad. Más de 800 negros sudafricanos han muerto en las calles y miles han resultado heridos. A fin de hacer frente a esa ola de manifestaciones contra el apartheid, el régimen de Botha se ha visto obligado en los dos últimos meses a anunciar algunas reformas apresuradas con la esperanza de poder así tranquilizar a los negros sudafricanos y a la comunidad internacional.

Esas pseudo reformas merecen algún comentario, sobre todo porque algunos amigos de Sudáfrica, especialmente en Europa occidental, están tratando de servirse de ellas para apoyar al régimen de Botha. Creemos que las reformas hasta ahora anunciadas no van lo suficientemente lejos y, en todo caso, no son más que una remodelación del apartheid para hacerlo más aceptable ante los ojos de la comunidad internacional. No se elimina en absoluto el dominio de la minoría blanca, la discriminación racial, la ciudadanía selectiva ni la explotación de los negros. ¿Acaso muestran de alguna manera la buena voluntad del régimen racista? De hecho, mi delegación duda seriamente de la posibilidad de que el actual régimen sudafricano elimine el apartheid. La situación exige cambios fundamentales y no una simple reforma superficial como la que se ha hecho.

Debe entenderse que la rápida evolución de la situación en Sudáfrica, especialmente en los últimos meses, se ha debido, en primer lugar y sobre todo, a las extremas presiones que los negros sudafricanos, así como por la comunidad internacional han ejercido sobre el régimen. Una combinación de ambas presiones ha conseguido el propósito de socavar gravemente la arrogancia y la seguridad del régimen racista y lo está obligando a percatarse de la realidad. Sería trágico, por tanto, si ahora mitigáramos la presión internacional en estos momentos cruciales. No estamos en contra de las negociaciones para solucionar el conflicto que se ha desatado ahora, pero debe tratarse de negociaciones para poner fin al apartheid y no para ganar tiempo. Los jóvenes negros sudafricanos no estarán de acuerdo con ninguna solución que les ofrezca menos y no podemos persuadirlos de que



sean simplemente medio libres. Por consiguiente, es imprescindible que la comunidad internacional siga aislando a Sudáfrica, aplique sanciones contra ella, se niegue a efectuar inversiones en su economía, se niegue a concederle créditos y otras formas de préstamos y, en general, adopte medidas que obliguen a Botha y a su régimen a abandonar el sistema de apartheid.

Las medidas que he mencionado equivalen a sanciones y, por lo tanto, exigen aclaraciones adicionales debido al actual debate sobre sanciones como medio de producir el cambio. No hay duda alguna de que las sanciones constituyen un castigo pero son también legítimas de conformidad con la Carta y el derecho internacional. Además, las sanciones son consideradas por quienes las propugnamos como el último medio pacífico para resolver la situación violenta y amenazadora que impera en Sudáfrica. Si no nos servimos de las sanciones, nosotros, como entidad mundial, estaremos reconociendo y admitiendo la injusticia, el racismo y la violencia que entraña el apartheid.

Hemos escuchado otros argumentos por parte de quienes se sienten reacios a aplicar las sanciones contra el régimen racista. Por ejemplo, se ha dicho que las sanciones perjudicarían a los sudafricanos negros y a los países vecinos de Sudáfrica, en lugar de destruir a la Sudáfrica blanca. Estas razones no son muy ingeniosas, como se ha dicho muchas veces desde esta tribuna. La gran mayoría de los negros sudafricanos en la actualidad tienen un nivel de vida que no puede reducirse más, independientemente de lo que ocurra a la economía de su país. Por lo tanto, las sanciones sólo los afectarán de manera insignificante. Lo cierto es que, en el caso de que se aplicaran las sanciones, sería la minoría blanca privilegiada la que experimentaría un gran descenso en su nivel de vida. Pero inclusive en ese caso, se confía en que las sanciones equivalgan a una sacudida rápida, aunque violenta, que destruya al apartheid y haga volver al país una vez más a la paz, la justicia y la prosperidad. Es preciso subrayar que estas sanciones no se conciben como algo permanente; deben ser eliminadas lo antes posible; el único propósito de las mismas es acelerar el desmoronamiento del apartheid.

En lo que se refiere al argumento de que las sanciones perjudicarían a los países vecinos, mi delegación desea aclarar que esta es una amarga píldora que los países vecinos han decidido tragarse en el plano subregional. Tras serias deliberaciones, han dicho en forma categórica, a través de la Conferencia de Cooperación para el Desarrollo Sudafricano (SADCC) que prefieren sufrir el daño que puedan ocasionarles las sanciones durante un tiempo relativamente limitado antes que vivir perpetuamente bajo la sombra y la explotación del apartheid. Es también un hecho económico que esos Estados vecinos podían tener mejores relaciones económicas que hasta ahora con una Sudáfrica libre y democrática. Por lo tanto, que nadie hable en nombre de un grupo de países que ha dicho ya en forma elocuentísima que está en favor de las sanciones.

Un importantísimo país occidental ha adquirido notoriedad por oponerse a la imposición de sanciones diciendo que las mismas no tendrían efecto alguno. Aparte del hecho de que ese país recientemente ha aplicado sanciones contra un Estado Miembro de las Naciones Unidas, la lógica nos obligaría a preguntarle: si en realidad cree que las sanciones son ineficaces, ¿qué daño puede ocasionar el aplicarlas? La verdadera razón de esa posición aislada no es difícil de averiguar, pero hacemos un nuevo llamamiento a ese país a fin de que se una a la gran mayoría de la comunidad internacional para que se impongan sanciones amplias y obligatorias al único país del mundo que ha legitimado el racismo y emplea la violencia estatal y el terrorismo para imponerlo.

También tenemos ante nosotros el proyecto de convención internacional contra el apartheid en los deportes, documento cuya preparación requirió largo tiempo debido a las intensas consultas que implicaba. En conjunto, es aceptable para mi delegación. Sin embargo, se han planteado algunas cuestiones a propósito de su artículo 10, al que se denomina "principio de la tercera parte". Reconocemos la preocupación de los países que han formulado comentarios al respecto. Sin embargo, encarecemos que esa convención sea considerada como parte de las muchas medidas internacionales que pueden tomarse para garantizar la rápida eliminación del apartheid. Al respecto, la vida de la convención será muy limitada. Pero, además, pedimos a las delegaciones que comprendan que los inconvenientes que pueda plantear ese artículo, resultan minúsculos en comparación con los futuros sufrimientos que el apartheid entraña para aproximadamente 27 millones de personas. Si aplicamos en forma colectiva la convención, el apartheid, que está dando ya los últimos

coletazos, sería eliminado rápidamente. Pero si vacilamos o pensamos demasiado en el lujo de nuestros propios deportes, el régimen racista podrá seguir preservando su sistema frente a las débiles protestas internacionales.

Tenemos que marchar codo a codo para dar un golpe final al régimen racista de Sudáfrica. Ello constituiría una gran asistencia a los movimientos de liberación nacional, principalmente responsables de la lucha que se libra contra el apartheid y el colonialismo en Sudáfrica y Namibia. Mi delegación desea expresar su sincero agradecimiento a los países de Europa oriental y a los países nórdicos por la resistencia que siguen prestando a los movimientos nacionales de liberación. Pero quienes conocen bien a esos movimientos saben que se requiere aún más de la comunidad internacional si se quiere que los mismos sobrevivan.

La suerte de las mujeres y de los niños preocupa mucho a Ghana, puesto que se han convertido casi en las víctimas olvidadas del apartheid. Su suerte es vivir en la pobreza, en la enfermedad, la desnutrición y el analfabetismo, en tanto luchan para subsistir en condiciones espartanas. Los niños carecen de toda comodidad y no saben ni siquiera deletrear y, sin embargo, se les pedirá que contribuyan mañana a una nueva era en Sudáfrica y en Namibia. Por lo tanto, mi delegación hace un llamamiento a la comunidad internacional a fin de que ayude con carácter inmediato a los movimientos nacionales de liberación para poder salvar vidas y prepararlos para el retorno a sus respectivos hogares patrios. El Comité Especial ha preparado un informe sobre este tema en el que se proponen proyectos concretos para su adopción por los países, instituciones y organizaciones no gubernamentales. Confiamos en que el informe sobre la situación de las mujeres y de los niños permita determinar los derechos y la asistencia más adecuados a los movimientos nacionales de liberación.

Para terminar, mi delegación desea manifestar que la Asamblea General tiene el derecho y la obligación desde el punto de vista moral de tratar de poner fin rápidamente al apartheid y no debemos eludir esa responsabilidad. La actual situación en Sudáfrica es peligrosa y debe solucionarse sin mayor dilación. Nos ha decepcionado el hecho de que desde que comenzara este período de sesiones hace seis semanas, durante el cual se ha asesinado a negros casi a diario en Sudáfrica, esta Asamblea no haya considerado oportuno actuar urgentemente de un modo u otro para mitigar la violencia y los enfrentamientos en ese país. Sin embargo, existe la necesidad candente de actuar, y de hacerlo de forma decisiva ahora, y pedimos a

todas las delegaciones que se unan y exijan al régimen racista que promulgue una legislación que acabe por entero con todas las leyes sobre el apartheid, que se ponga fin al estado de urgencia y se derogue en particular la ley interna de seguridad, que se conceda la plena ciudadanía a todos los habitantes sin distinción alguna, que se libere a todos los presos políticos de inmediato y sin condiciones, y especialmente a Nelson Mandela, y que se inicien contactos con los dirigentes reconocidos de la mayoría negra.

Hasta que se atiendan estas exigencias, debe mantenerse la presión internacional, agregando este año toda una serie de sanciones obligatorias contra el régimen racista. Al destacar una vez más nuestra creencia en las sanciones globales y obligatorias, no por eso rechazamos el modesto acuerdo colectivo a que se llegó sobre sanciones limitadas en el Commonwealth, en su reunión de las Bahamas. De hecho, lo celebramos como un hecho histórico; pero la Asamblea General no debe quedarse a la zaga de esta iniciativa del Commonwealth. Antes bien, debe basarse en ella para ampliar su alcance y dotarla de atributos obligatorios. Creemos que este es el mejor medio de garantizar la eliminación del apartheid y de crear una sociedad libre, democrática y no racial, arraigada en el principio de una persona, un voto. Confiamos en que esta Asamblea no fallará a los sudafricanos en esta hora crucial.

Sr. MAKEKA (Lesotho) (interpretación del inglés): Sr. Presidente: Aunque el Jefe de Estado de mi país le felicitó a usted por asumir la Presidencia de este cuadragésimo período de sesiones de la Asamblea, permítame hacerme eco de esos sentimientos por ser esta la primera vez que me dirijo a la Asamblea. Como uno de sus Vicepresidentes, me honra mucho servir bajo su dirección, ya que todos conocemos su experiencia y sus dotes diplomáticas. Podemos garantizarle todo nuestro apoyo y estamos dispuestos a ayudarle en todo cuanto podamos en su labor.

Hace un año, desde esta misma tribuna, expresé la indignación de mi país frente a la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica. Nuestra firme posición en contra de ese sistema inhumano es bien conocida y no necesito repetirla aquí.

La semana pasada celebramos el cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas y mi propio Jefe de Estado se dirigió a la Asamblea General. Como muchos otros oradores, nos recordó que era triste admitir que en los últimos 40 años las Naciones Unidas no habían podido erradicar el flagelo del racismo y el apartheid de este planeta. A pesar del hecho de que esta Organización desde su creación, se ha ocupado de la cuestión del apartheid en Sudáfrica y su derivado, la ocupación racista ilegal de Namibia, las murallas del apartheid no se han derrumbado. ¿Cómo podría suceder eso cuando todo lo que hacemos es hablar y hablar año tras año? ¿Cómo podría suceder si una de las principales Potencias viene a esta misma tribuna y no hace referencia alguna a una cuestión que preocupa a toda la comunidad mundial, como es el apartheid?

En los últimos 40 años de existencia de las Naciones Unidas, el pueblo de Sudáfrica ha sido testigo del fortalecimiento y acrecentamiento de la brutalidad y el carácter inhumano del apartheid. Las voces de oposición a la opresión y la esclavitud por los colonos blancos fueron contestadas con proscripciones, arrestos domiciliarios y detenciones. Los abogados de la protesta pacífica, como los Lithulis, fueron sometidos a este tratamiento. Resultó evidente desde el mismo comienzo que las masas oprimidas se enfrentaban a un tipo diferente de ser humano, que veía en el negro nada más que un animal útil solamente como fuente de mano de obra barata. En la década de 1960, los opresores se hicieron aún más depravados, asesinando a sangre fría a más de 60 africanos que protestaban pacíficamente contra las injustas leyes de pasos. Desde ese momento, Sudáfrica fue gobernada por las armas. La oposición al apartheid se resolvió de una manera rápida y depravada. Fue durante este período que se encarceló a los Mandelas y otros dirigentes africanos, mientras que otros debían abandonar su tierra para dedicarse a la resistencia desde el exterior. La maquinaria del apartheid se había hecho tan brutal que resultó evidente que el colono blanco no estaba dispuesto a escuchar la voz de la razón. Los africanos no tuvieron otra alternativa que recurrir al idioma del opresor, es decir la lucha armada, la violencia contra la violencia. De esta

forma, cuando el Africa se regocijaba por la libertad y la independencia recién adquiridas, el colono blanco de Sudáfrica estaba atrasando el reloj hacia la prehistoria.

En la década de 1970, la situación fue empeorando. Una protesta pacífica de jóvenes escolares en Soweto contra la educación inferior que recibían y que estaba destinada a producir sirvientes, los enfrentó al odiado lenguaje de los llamados "amos" africanos y a la brutalidad de las balas, lo que provocó cientos de muertos, en tanto que miles eran obligados a abandonar el país. Los que fueron arrestados no tuvieron mejor suerte, porque al igual que los Bikos fueron asesinados por sus captores incluso antes del juicio o se dejó que las cortes del apartheid los asesinaran. La víctima más reciente fue Moloise, quien fue ahorcado pese a las reiteradas exhortaciones provenientes de todos los rincones de este planeta.

Estamos a mediados de la década de 1980. Gracias a los avances de la tecnología, vemos cotidianamente la brutalidad del apartheid en nuestros propios hogares. Leemos acerca de ella en los periódicos. Incluso aquellos que por muchos años se negaron a escuchar la voz de la razón y ver al apartheid como realmente es, ahora no pueden ocultar su ignorancia hipócrita, a menos que deliberadamente cierran sus ojos y oídos a lo que está sucediendo alrededor de ellos. ¿Quién podría imaginar que seis blancos fueran asesinados diariamente sin que el Occidente, especialmente los Estados Unidos, tomaran medidas inmediatas y eficaces contra los perpetradores? En momentos en que estoy hablando, los africanos son asesinados en Sudáfrica con armas fabricadas y suministradas por algunos Miembros de esta Organización. Desde septiembre de 1984, miles de africanos han perdido sus vidas mientras protestaban contra un sistema que es tan malvado - si no peor - como el nazismo, un sistema que ha sido declarado crimen de lesa humanidad porque es horrendo para todas las personas decentes. Los opresores argumentan que sólo 800 africanos, aproximadamente, han sido muertos, cuando sabemos que el doble de esa cantidad ha caído víctima de las armas del apartheid. Las palabras utilizadas por el Obispo Tutu los otros días, cuando se dirigió a la Comisión Política Especial, todavía suenan en nuestros oídos.

¿Cómo puede regocijarse el pueblo oprimido de Sudáfrica ante el cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas? Para ellos, los últimos 40 años han sido un infierno y el de hoy es otro día de duelo. Nuestro decepcionante fracaso, como

Organización, para estar a la altura de la propia Carta con respecto a la Sudáfrica del apartheid y a Namibia es causa suficiente para que estemos de duelo en este momento. Debemos hacerlo porque permanecemos indefensos a medida que el monstruo del apartheid iba creciendo, devorando con una falta de piedad sin precedentes todo aquello que se le interponía. Y todavía teníamos el poder para hacer algo al respecto.

Las autoridades sudafricanas se han proclamado reformistas. Han ido y siguen yendo a muchas capitales occidentales diciendo que necesitan tiempo, pues no pueden realizar cambios de la noche a la mañana. Una de esas autoridades ha dicho que no está dispuesta a morir en defensa del apartheid. Pero el historial es claro y habla por sí mismo. ¿De qué reformas están hablando? Primero introdujeron el llamado Consejo Presidencial; luego hicieron lo propio con un llamado parlamento tricameral, de carácter racista, que no hizo más que fortalecer la dominación blanca. Abolieron o tienen el propósito de abolir la llamada Inmorality Act y su ley hermana, la Mixed Marriage Act; ahora hablan de la ciudadanía sudafricana incluso para los negros que viven en los llamados bantustanes independientes y de la abolición de la odiada Influx Control Act, con su sistema de leyes de pases. Por lo tanto, están sorprendidos cuando los disturbios y la intranquilidad prosiguen sin cesar; en realidad, se están incrementando. Uno de ellos incluso observó: ¿"Qué más podemos hacer? Merecemos crédito por lo que hemos hecho". Estas palabras fueron dirigidas a las capitales occidentales y no a las verdaderas partes en la controversia, las masas oprimidas de Sudáfrica.

Las autoridades sudafricanas cometen un error pues están hablando a la parte equivocada. Como consecuencia, no saben - o si lo saben pretenden ignorarlo - qué es lo que está en juego en los problemas actuales que enfrentan. Segundo, incluso en este momento tardío, el Presidente sudafricano dice que se ha moderado y que puede hacer las cosas peor si se lo presiona demasiado. Más y más partes del territorio sudafricano se encuentran bajo control militar directo, debido al llamado estado de emergencia que no es otra cosa que un estado de sitio. Sabemos que las llamadas aldeas fueron diseñadas y construidas de tal forma que pueden ser bombardeadas en un día, sin dañar a la "raza blanca elegida de Dios". Los dirigentes eclesiásticos y civiles de los oprimidos, particularmente los del Frente Democrático Unido (FDU), son encarcelados sin cargos; aquellos con respecto a los cuales sí se formulan cargos, son sometidos a juicio por traición. Todas estas medidas no son más que una receta para más derramamiento de sangre y más violencia.

Lesotho se encuentra en el corazón de Sudáfrica y está completamente rodeado por este gigante, que es militar y económicamente poderoso. Debido a nuestra situación geopolítica e historia colonial, dependemos en gran medida de Sudáfrica. Por cierto, he observado que Sudáfrica ha distribuido a los miembros de esta Organización una revista titulada "Sudáfrica, el puntal del Africa meridional". Esta revista demuestra lo dependientes de Sudáfrica que son los países como Lesotho. El mensaje a la Asamblea es claro. Se trata de lo siguiente: si se imponen sanciones económicas obligatorias a Sudáfrica, los países que se enumeran sufrirán. Sudáfrica ha sostenido durante mucho tiempo que las sanciones perjudicarán a los negros más que a los blancos y ahora escuchamos mucho acerca de que las sanciones causarán daños a los Estados negros vecinos como Lesotho. Estos lamentos caen en los oídos propicios de algunos círculos del mundo occidental. En realidad, hemos escuchado que estos sentimientos son orquestados aquí mismo. Una vez más, mediante la ayuda o la asistencia de sus amigos, Sudáfrica evita la cuestión verdadera que deberá enfrentar directamente tarde o temprano.

Sabemos que las sanciones perjudicarán a Lesotho. Sudáfrica ha declarado que si se le imponen sanciones debido al apartheid, las trasladará o literalmente volverá a imponerlas a los países vecinos. El Presidente Botha manifestó claramente que repatriaría a todos los trabajadores extranjeros, a los que a menudo se hace referencia como trabajadores migratorios, si se imponían sanciones. Permítaseme recordar a la Asamblea que Sudáfrica, que está tan preocupada por las sanciones, no ha vacilado en imponerlas sobre nosotros con impunidad. Sudáfrica ha cerrado nuestras fronteras unilateralmente, en detrimento de nuestro bienestar económico; Sudáfrica nos ha impuesto un embargo de armas; Sudáfrica se ha negado a permitir el trasbordo de algunos de nuestros suministros de armas que todavía se encuentran en Maputo, Mozambique. Debemos expresar nuestro agradecimiento a los países occidentales, especialmente los Estados Unidos, que nos ayudaron a lograr que algunas de esas armas atravesaran Sudáfrica en dirección a Lesotho. Nos llevó más de cinco años obtener un conjunto de suministros de petróleo desde Maputo a nuestra ciudad capital, Maseru, debido a que Sudáfrica se negaba a permitir que este petróleo pasara hacia Lesotho. Muchos inversores privados que deseaban invertir en mi país han sido amenazados y aterrorizados por Sudáfrica.



En 1982 la Fuerza de Defensa sudafricana atacó la capital, Maseru, matando a 42 personas, 12 de las cuales eran ciudadanos de nuestro país, mientras que las demás eran refugiados y visitantes sudafricanos. A lo largo de los años, especialmente desde 1980, mi país ha sido sometido a incursiones armadas desde el territorio de Sudáfrica, provocado muertes y destrucción de propiedades. Hace dos semanas la ciudad capital, Maseru, situada en la frontera con Sudáfrica, fue atacada con fuego de morteros desde el territorio sudafricano. El 22 de octubre de 1985 seis mujeres y un hombre fueron asesinados mientras dormían en una aldea situada en la frontera con Sudáfrica, y los atacantes huyeron a ese país, como es habitual. Ayer las autoridades sudafricanas nos informaron que la Fuerza de Defensa sudafricana realizará ejercicios militares a lo largo de las fronteras de Lesotho. Hemos pedido a Sudáfrica que no continúe con los ejercicios que ha planificado.

Esta lista de actos - que para nosotros no son más que sanciones y presiones - es larga, pero permítaseme mencionar que Sudáfrica no se ha limitado sólo a Lesotho. El mismo trato se le da a los demás países vecinos. En esta Organización hay constancia de ataques armados contra Botswana y Angola, este último en más de tres oportunidades solamente este año. Mozambique ha sufrido la insurgencia armada de RENAMO, fuerza entrenada, armada y financiada por Sudáfrica. Ninguno de nuestros países está a salvo mientras exista el apartheid. Supuestamente se nos desestabiliza y castiga porque albergamos al African National Congress (ANC), pero sólo hemos recibido refugiados de buena fe, la mayoría de los cuales son niños escolares. Cada vez que se desata la furia del apartheid, aumenta el número de refugiados y en su ira ciega Pretoria golpea a izquierda y derecha.

La ironía de esta situación en que nos encontramos como rehenes, es que, pese a todo esto, Sudáfrica y sus aliados esperan que vengamos aquí a pedir que se detengan las sanciones porque ellas nos perjudicarán. Literalmente se nos pide que nos opongamos a las demandas de los sudafricanos para que se desmantele el apartheid y a favor de la libertad y la igualdad. En resumen, se nos pide que defendamos el apartheid.

En Lesotho no hay apartheid. No tenemos nada que ver con él, salvo que recibimos sus golpes. Hemos aclarado a todos que el problema de Sudáfrica no es otro que el apartheid. Hemos dicho a los sudafricanos que si desmantelasen el apartheid nadie hablaría de sanciones. El apartheid es malo y violento intrínsecamente y como tal no se puede reformar. No podemos dictar nuestros deseos a los sudafricanos, pero podemos aconsejar a las actuales autoridades que no deben esperar hasta que los blancos empiecen a morir y toda la región quede envuelta en un infierno de luchas raciales. Las revueltas actuales no pueden confinarse por mucho tiempo a los llamados distritos. Nadie pide a esta Organización que libere a Sudáfrica de sí misma. Se le pide que utilice su influencia, colectiva e individualmente, a fin de persuadir a las autoridades sudafricanas para que acepten lo inevitable y eviten una catástrofe. Sudáfrica debe liberar a Mandela y a otros dirigentes africanos y empezar un diálogo significativo con ellos para establecer el futuro de ese amado país, libre del flagelo del apartheid. Sudáfrica debe aprender de sus comerciantes blancos, así como de sus líderes religiosos y otras personas, que han tenido suficiente valor como para hablar con los dirigentes del ANC, porque es el único camino a la paz en Sudáfrica y en nuestra región. No hay paños tibios al respecto. Los que profesan apoyo al cambio pacífico en Sudáfrica deben dejar de hablar de derechos de la minoría, porque en el curso de los años jamás dijeron nada sobre los derechos de la mayoría. Deben dejar de evitar la cuestión real, que es el fin del apartheid en todas sus formas ahora y no mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde.

En conclusión, permítaseme rendir homenaje al Comité Especial contra el Apartheid y a su dedicado Presidente, el Embajador Garba, por su informe muy lúcido y su muy buen trabajo. El Gobierno de Lesotho está estudiando el informe del Comité ad hoc sobre la redacción de una convención internacional contra el apartheid en los deportes y en su debido momento anunciará su posición.

## ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El PRESIDENTE: Quisiera llamar la atención de la Asamblea General sobre un tema que estaba previsto para ser presentado mañana. La importancia del tema del apartheid y el número elevado de oradores nos ha hecho retrasar un tanto nuestros debates. Se da la circunstancia de que el Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) debe partir mañana por la tarde para Viena, por asuntos urgentes. En estas circunstancias, desearía preguntar a la Asamblea General si estaría de acuerdo en que mañana por la mañana, a primera hora, se diera al Director del OIEA la oportunidad de que presentara el informe y pudiera regresar a Viena. Si la Asamblea no tiene objeciones, el Director del OIEA haría la presentación de su informe mañana a las 10.30 horas e inmediatamente después reanudaríamos el debate sobre la cuestión del apartheid, tan importante para todos los representantes, como lo han demostrado con sus numerosas intervenciones que están realizando en el día de hoy.

Tiene la palabra el representante de Mozambique.

Sr. DOS SANTOS (Mozambique) (interpretación del inglés): Señor Presidente: He escuchado muy atentamente lo que ha dicho. Lamentablemente, como no ha entrado en detalle sobre las razones por las cuales deberíamos interrumpir este debate, y puesto que sólo nos ha informado que el Director tiene que regresar a Viena mañana por la tarde, y como no estamos al tanto de las razones por las que deberíamos hacerlo, mi delegación encuentra muy difícil aceptar la sugerencia. Consideramos que esta cuestión es muy importante. En este mismo momento está muriendo gente en Sudáfrica. En ese país todos los días mueren por lo menos seis personas. Nos resulta muy difícil aceptar que se interrumpa este debate en este momento.

El PRESIDENTE: Por ello he preguntado a la Asamblea si tenía inconveniente en que mañana diéramos la palabra, a las 10.30 horas, al Director General del OIEA, a fin de que presentara su informe, cosa que no llevaría más de 15 ó 20 minutos, para reanudar inmediatamente después el debate sobre la cuestión del apartheid.

Sr. DOS SANTOS (Mozambique) (interpretación del inglés): No quiero demorar este debate. Puesto que el señor Presidente ha dicho que sólo va tomar unos 15 minutos, podemos aceptarlo.

El PRESIDENTE: Doy las gracias al representante de Mozambique por su colaboración.

TEMA 35 DEL PROGRAMA (continuación)

POLITICA DE APARTHEID DEL GOBIERNO DE SUDAFRICA:

- a) INFORME DEL COMITE ESPECIAL CONTRA EL APARTHEID (A/40/22 y Add.1 a 4);
- b) INFORME DEL COMITE AD HOC PARA LA ELABORACION DE UNA CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA EL APARTHEID EN LOS DEPORTES (A/40/36);
- c) INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (A/40/780)
- d) INFORME DE LA COMISION POLITICA ESPECIAL (A/40/805)

Sr. RAMASY (Madagascar) (interpretación del francés): Durante el año transcurrido se ha superado una nueva etapa en la movilización nacional y en la lucha del pueblo oprimido de Sudáfrica y de todos los adversarios del apartheid, decididos más que nunca a eliminar el sistema odioso del apartheid y a crear una sociedad unida y no racial en Sudáfrica.

La política de apartheid del Gobierno de Pretoria sigue siendo motivo de preocupación para el conjunto de la comunidad, y el Presidente del Comité Especial contra el Apartheid, el General de División Garba, el 28 de octubre de este año expuso en detalle la evolución de la situación desde el examen de la cuestión en el último período de sesiones de la Asamblea General.

Sin embargo, nos parece importante destacar los siguientes elementos: el año transcurrido se ha caracterizado por el recrudecimiento de la represión por parte de las fuerzas policiales del régimen de Pretoria; la multiplicación de los arrestos masivos y arbitrarios seguidos de detenciones ilimitadas que terminaban en asesinatos; el despliegue del ejército en el interior y alrededor de las localidades; la opresión y la tortura; la política de bantustanización acompañada de desplazamientos forzosos y el control de la circulación de la población; la aplicación de una presunta reforma constitucional con la creación de tres cámaras pero descartando la participación de la población negra; la implantación del estado de emergencia que confiere facultades excepcionales a la policía y actos de agresión y desestabilización contra los países africanos vecinos.

Para tratar de justificarse ante la opinión internacional, el régimen de Pretoria ha multiplicado sus maniobras políticas con la aplicación de las presuntas reformas del apartheid, con la abolición de algunas leyes discriminatorias, pero reafirmando al mismo tiempo su apego al apartheid y su negativa a conceder derechos políticos a los negros.

Paralelamente, el año transcurrido se ha caracterizado por la prosecución y la intensificación de la lucha armada de la resistencia al apartheid, la lucha armada clandestina y la resistencia de los trabajadores, los estudiantes, las organizaciones comunitarias y las instituciones religiosas.

Todo lo que se acaba de enumerar nos autoriza a afirmar que el régimen del apartheid no ha logrado quebrar el espíritu de resistencia y la determinación de la población negra de Sudáfrica.

Es así que en el plano internacional, la admiración que inspira la resistencia heroica del pueblo sudafricano y la indignación que suscita la brutalidad del régimen del apartheid han hecho avanzar mucho el movimiento de solidaridad mundial con la lucha de liberación en Sudáfrica.

Por primera vez, el Consejo de Seguridad, en sus resoluciones 566 (1985) y 569 (1985) ha pedido encarecidamente a los Estados Miembros que impongan sanciones económicas precisas contra Sudáfrica.

Los países occidentales han adoptado medidas económicas importantes a fin de aislar el régimen del apartheid y apoyar la lucha legítima del pueblo oprimido.

La Conferencia Regional de Ministros sobre Seguridad, Desarme y Desarrollo en Africa ha establecido en su programa medidas de seguridad a fin de obligar a Sudáfrica a abandonar su política de opresión interna y de apartheid.

El recuerdo de estos hechos nos conduce a insistir en que la responsabilidad de la situación que impera actualmente incumbe enteramente a Sudáfrica y que las presuntas reformas impuestas o preconizadas por el Gobierno de Pretoria no son más que pretextos destinados a perpetuar el apartheid, mientras que nuestro objetivo es eliminarlo en todas sus formas.

Madagascar se felicita de que numerosos países hayan tomado medidas que revisten el carácter de sanciones contra Sudáfrica, pero sigue creyendo que las sanciones no eliminan el apartheid, sino que contribuyen a acelerar su eliminación, y la falta de sanciones obligatorias no debe permitir que algunos países se excusen de tomar medidas similares.

Todos los países deben adoptar a su nivel sanciones contra Sudáfrica.

Permítaseme recordar aquí un pasaje de la audiencia al Obispo Desmond Tutu, el 28 de octubre último, en la Comisión Política Especial en su 15a. sesión, cuando dijo:

"En la etapa actual del apartheid se nos recrea con el lenguaje de una reforma. Por supuesto, el apartheid no puede ser objeto de reformas; debe ser desmantelado." (A/SPC/40/PV.15, pág. 7)

Para concluir, permítaseme decir que un viento sopla actualmente en Sudáfrica y el cambio es inevitable, pues asistimos a una verdadera revolución en la cual participan todas las clases sociales sudafricanas.

Para realizarla, es nuestro deber apoyar todas las medidas preconizadas para poner fin al apartheid. En este sentido, nos asociamos a las recomendaciones propuestas por el Comité Especial contra el Apartheid que figuran en su informe, a saber: reconocer la legitimidad de la lucha del pueblo sudafricano "para la eliminación del apartheid y la creación de una sociedad no racial que garantice a todo el pueblo de Sudáfrica el goce de iguales derechos, sin distinción por motivos de raza, color o religión"; legitimar la lucha que realiza el pueblo sudafricano bajo la dirección de los movimientos de liberación nacional y en particular el African National Congress (ANC) para eliminar el apartheid e instaurar una sociedad democrática en la cual todos los habitantes de Sudáfrica puedan, en condiciones de igualdad, gozar de todos los derechos políticos y de otra índole y participen libremente en la determinación de su destino; rechazar las presuntas reformas del régimen de apartheid, la coparticipación del poder o todo otro arreglo que no implique la eliminación total del apartheid; la liberación de todos los presos políticos y la cesación de la represión; la imposición del embargo de armas y el embargo de petróleo; sanciones económicas obligatorias contra Sudáfrica; boicoteo en los deportes, la cultura y otros sectores; apoyo y asistencia al pueblo oprimido de Sudáfrica y a sus movimientos de liberación nacional.

Para terminar, agradecemos al Comité y en particular a su Presidente, por el trabajo que ha realizado.

Sr. PAPAJORGJI (Albania) (interpretación del inglés): La política racista del régimen del apartheid ha sido motivo de debate en las Naciones Unidas desde 1946. Esta misma Asamblea General ha aprobado muchas decisiones y resoluciones que condenan las políticas crueles del régimen racista de la minoría blanca de Pretoria. Sin embargo, los numerosos hechos, mencionados en los informes presentados a esta Asamblea y, particularmente en los discursos de los Jefes de Estado, Primeros Ministros y representantes de diversos países africanos demuestran que los fascistas de Pretoria continúan con su odiosa política de apartheid utilizando la violencia, el terror, la opresión y la explotación de la población negra. El régimen racista de Pretoria aplica una típica política de discriminación racial, erigida en sistema, que priva a la población negra de los derechos humanos más fundamentales.



Hoy día todos los países y pueblos democráticos y progresistas del mundo siguen con gran indignación la evolución de los acontecimientos en Sudáfrica, donde se está llevando a cabo una verdadera matanza contra la población negra. La voz de la protesta se oye cada vez más fuerte contra el régimen racista de Pretoria, que mata, encarcela y tortura a la población negra inocente, a los auténticos hijos del pueblo de Sudáfrica. Desde hace muchos años el régimen de Pretoria continúa practicando su criminal política de bantustanización con el fin de privar de la nacionalidad a la población africana.

En realidad, la situación en Sudáfrica se caracteriza por el odio acumulado del pueblo azanio, que está decidido a derrocar al inhumano régimen de apartheid. El estado de emergencia declarado en julio de este año en 36 regiones del país, supuestamente por un breve período de tiempo, no sólo no se ha levantado, sino que, por el contrario, se ha extendido más aún a casi toda Sudáfrica. Aunque la opresión y el terror se han intensificado, la situación no se ha normalizado tal como preveía el régimen de Pretoria que persiste obstinadamente en su política, desafiando así a la comunidad internacional.

En esas circunstancias, el pueblo azanio ha comenzado a efectuar protestas masivas, manifestaciones y luchas sangrientas que constituyen un movimiento revolucionario antirracista y antiimperialista de la vasta población negra. Este movimiento ha ganado el apoyo de otros pueblos africanos. Ello es así porque no se trata sólo de la lucha del pueblo azanio sino de la de todos los pueblos africanos en pro de su liberación nacional y social del colonialismo, el neocolonialismo y el racismo. Es la misma lucha emprendida por otros pueblos del mundo que combaten por la libertad, la independencia y el verdadero progreso social.

Los pueblos africanos, al igual que los pueblos de todo el mundo, se oponen y condenan con gran indignación al régimen racista de la minoría blanca, así como a las empresas transnacionales que despojan al pueblo azanio de sus riquezas. Condenan asimismo a las Potencias imperialistas - al imperialismo norteamericano, en particular - que apoyan y asisten al régimen de Pretoria, negándose a aplicar sanciones económicas en contra de él.

Al mismo tiempo, condenan a los sionistas israelíes que colaboran estrechamente con el régimen racista de Pretoria.

Al igual que todos los pueblos y Estados progresistas que están al lado del pueblo azanio amante de la paz, también el pueblo albanés siempre ha apoyado resueltamente a los pueblos y Estados africanos en su lucha por la libertad y la independencia y en contra de la opresión y la humillación, así como en contra del régimen racista y sus amos imperialistas.

El inolvidable dirigente del pueblo albanés, el camarada Enver Hoxha, dijo:

"El pueblo albanés y su Gobierno han visto con agrado y apoyado la justa lucha de los pueblos africanos por erradicar el colonialismo y el racismo del continente de Africa y han apoyado los esfuerzos de los pueblos amantes de la paz de los países africanos por hacer frente a la política y a la actividad agresiva, neocolonialistas y rapaz del imperialismo."

La lucha que libra el pueblo de Sudáfrica contra el detestable régimen de apartheid no es un conflicto entre razas, tal como pretende la propaganda burguesa. Se trata de un conflicto social en el cual se enfrentan entre sí fuerzas sociales antagónicas: por un lado, el pueblo azanio y, por el otro, el racismo, un producto del sistema capitalista.

Por estas razones, el imperialismo norteamericano y otras Potencias imperialistas apelan a la propaganda de reformas que se supone constituyen el único medio de resolver los problemas raciales de Sudáfrica.

La delegación de la República Popular Socialista de Albania siempre ha compartido las opiniones y posiciones expuestas por los representantes del Africa y otros países que denunciaron a las fuerzas políticas del régimen de Botha, a la imposición de la pretendida nueva constitución, a las reformas y otras acciones emprendidas por ese régimen con el fin de perpetuar el sistema de apartheid.

El racismo de Pretoria se expresa asimismo en su política exterior. Mantiene ocupada a Namibia, oprimiendo y explotando al pueblo de ese país y a sus recursos naturales. Lleva a cabo continuos actos de agresión contra los países africanos vecinos, constituyendo así un peligro cada vez mayor para su libertad e independencia.

Sin embargo, este régimen racista no se atrevería a actuar de esa manera si no contara con el apoyo y la asistencia total de los Estados Unidos y de otras Potencias imperialistas.

La delegación albanesa considera necesario destacar que este régimen fascista, tanto en su política interna como en su política externa, se vale también de la situación creada por la rivalidad hegemónica en el continente africano entre las dos superpotencias imperialistas, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Los socialimperialistas soviéticos tratan de aprovechar la difícil y tensa situación prevaleciente en la región del Africa meridional con el fin de extender su influencia imperialista.

Los pueblos azanio y namibiano, así como los pueblos de otros países africanos, nunca se han reconciliado con el racismo y su forma más abominable, el apartheid. La firme oposición y las protestas de la población negra y de los patriotas de Azania y Namibia que luchan por la liberación nacional pone de manifiesto que están decididos a librarse del yugo racista y neocolonialista.

He ahí por qué esa lucha cuenta con el apoyo resuelto de los países y pueblos progresistas de todo el mundo.

La delegación de la República Popular Socialista de Albania reitera una vez más que el pueblo albanés y su Gobierno se oponen y seguirán oponiéndose con firmeza a todo tipo de discriminación racial y nacional. Condenamos categóricamente esta odiosa política de apartheid del régimen racista de Pretoria y estamos convencidos de que la lucha de los pueblos azanio y namibiano se verá coronada por la victoria.\*

Sr. TROYANOVSKY (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

(interpretación del ruso): Hace 40 años se logró una gran victoria contra las fuerzas de la agresión y el racismo y se crearon las Naciones Unidas, en cuya Carta se consagra como uno de sus más importantes objetivos el de organizar la cooperación internacional a fin de fomentar el desarrollo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.

Tras haber destruido el principal bastión del fascismo racista en Europa, los pueblos del mundo tenían motivos para creer en la rápida eliminación del racismo en todo el mundo como manifestación vergonzosa e indigna de la civilización del hombre contemporáneo.

---

\* La Sra. Castro de Barish (Costa Rica), Vicepresidenta, ocupa la Presidencia.

Sin embargo, no fue así. El racismo y la discriminación racial persisten en diversas partes del mundo, envenenando la atmósfera internacional y constituyendo una fuente permanente de peligro para la libertad y la independencia de los pueblos.

La forma más abierta, cínica y descarada de racismo es el sistema de apartheid de Sudáfrica, merced al cual se ha elevado al racismo a la condición de principio constitucional y de política gubernamental de ese país. El apartheid de Sudáfrica significa la burla más flagrante de todos los derechos y libertades de la mayoría de su población; podría decir de la abrumadora mayoría de su población. Se ha transformado al país en una vasta prisión, en el cual millones de negros y africanos de color se ven privados de su libertad. En virtud de la legislación racista, cualquier africano puede ser encarcelado sin juicio, sin investigación previa y sin que se hayan presentado pruebas en contra de él. En la actualidad hay en Sudáfrica más de 200.000 prisioneros y su número aumenta día a día. La supresión de las libertades civiles y políticas de la población autóctona de Sudáfrica permite a los racistas explotar de manera despiadada las riquezas económicas y privar a la mayoría de la población de sus elementales derechos sociales, políticos y económicos.

Todo el sistema social y político de Sudáfrica garantiza una posición privilegiada a la minoría blanca dominante, en tanto que millones de africanos negros viven despojados de sus derechos y en la pobreza. Los millones de africanos de Sudáfrica exigen que se les trate como a seres humanos y quieren poder vivir en su país sin ser víctimas de humillaciones ni de discriminaciones. Exigen que se eliminen las barreras políticas, económicas y sociales que constituyen una afrenta para la dignidad humana y que han sido erigidas por el régimen racista opresor.

En estos últimos tiempos, han surgido movimientos de liberación que no se caracterizan por los actos de algunos individuos, sino por las manifestaciones masivas de decenas de miles de personas. Debe señalarse que hemos entrado a una nueva etapa cualitativa de la lucha de la población autóctona por su libertad. El país está atormentado por una crisis interna muy profunda. Por estos motivos el Comité Especial contra el Apartheid en su informe que figura como documento A/40/22 llegó a la conclusión correcta de que la lucha del pueblo oprimido de Sudáfrica y de cuantos se oponen al apartheid en todo el país ha alcanzado un nivel de movilización a escala nacional. Las autoridades sudafricanas responden a las reivindicaciones legítimas y naturales del pueblo con medidas de represión en masa, disparando contra la población pacífica y mediante un terror sangriento. Destacamentos militares armados y amplios contingentes policiales son lanzados contra los manifestantes indefensos. Estos últimos meses, el régimen de apartheid ha asesinado a más de 700 personas. Dirigentes de organizaciones democráticas son detenidos y acusados de alta traición con acusaciones fraguadas. En lo esencial se trata de una guerra contra la mayoría aplastante de Sudáfrica que se levanta contra el sistema criminal de apartheid.

Los actos de los racistas han suscitado la condena airada de todo el mundo. La política de apartheid ha sido condenada larga y reiteradamente por las Naciones Unidas como crimen de lesa humanidad y una amenaza contra la paz internacional. Durante más de 25 años, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad han exigido que las autoridades de Pretoria pongan término a su política de apartheid y discriminación racial. En fecha tan reciente como julio de este año, el Consejo de Seguridad, por enésima vez, volvió a condenar enérgicamente al sistema de apartheid y los arrestos y asesinatos en masa perpetrados por los racistas, exhortando a la liberación de todos los presos y detenidos políticos y en su resolución 569 (1985) declaró que:

"... solamente la erradicación total del apartheid y la instauración en Sudáfrica de una sociedad libre, unida y democrática sobre la base del sufragio universal pueden conducir a una solución ..."

¿Cómo reaccionaron los racistas a los llamamientos de las Naciones Unidas, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad? El Gobierno de Sudáfrica no sólo dejó de demostrar la mínima inclinación de prestar atención a la voz de las Naciones Unidas, que es la voz de la abrumadora mayoría de los Estados del mundo, sino que incluso intensificó su represión dentro del país y amplió sus actos de agresión contra los países africanos independientes vecinos.

El racismo y la agresión son indivisibles, y ello queda confirmado tanto por la historia pasada como por acontecimientos contemporáneos. El apartheid no es sólo una política inhumana que pisotea los principios básicos de moralidad y humanidad, sino que constituye una amenaza verdadera a la paz de Africa y a la seguridad internacional en su totalidad.

El embarcarse en aventuras militares es un rasgo inseparable del régimen sudafricano. Frente a la resistencia cada vez más firme al sistema de apartheid en la propia Sudáfrica y a la creciente lucha por la liberación del pueblo de Namibia, los gobernantes de Pretoria están buscando una salida a través de la agresión externa. En la última década el Africa meridional se ha transformado en escenario de conflictos armados constantes causados por los actos agresivos del régimen racista.

El aparato militar sudafricano está librando una guerra sin fin contra la República Popular de Angola. En septiembre de este año destacamentos de tropas sudafricanas entraron nuevamente al territorio de Angola y bombardearon puntos del país que se encuentran a más de 2.200 kilómetros de la frontera de Sudáfrica. Una vez más se está librando una guerra colonial en el territorio angoleño. También existen bandas armadas en otros Estados de la línea del frente: Botswana y Lesotho. Se organizan actos de bandolerismo contra Mozambique y se realizan incursiones terroristas y de sabotaje contra el Estado africano más joven: Zimbabwe. La ocupación colonial de Namibia sigue representando una amenaza grave a los países independientes de Africa. Sudáfrica no se ha limitado a instaurar el racismo en Namibia y ha explotado implacablemente a ese país; también está usando el territorio de Namibia como base para su agresión contra Angola y otros Estados de la línea del frente.

Al infligir la violencia y el terror en su propio país, en Namibia y en los territorios ocupados de los Estados africanos independientes, el régimen racista sudafricano está provocando sufrimientos incalculables a millones de personas totalmente inocentes. La misión a Angola, Zambia y la República Unida de Tanzania del Comité Especial contra el Apartheid dio un panorama claro del tremendo sufrimiento y condiciones de vida intolerables de millares de mujeres, niños y ancianos que están viviendo en campamentos de refugiados como resultado de las invasiones y reiterados actos de agresión del régimen racista de Sudáfrica y de su política de opresión en Sudáfrica y Namibia.

La lista de crímenes del régimen de apartheid es tan larga que sólo recitarla llevaría una enorme cantidad de tiempo. En su inútil intento por salvar al régimen de apartheid de su derrumbe final inevitable, Pretoria ha estado emprendiendo maniobras políticas internas con el objeto de debilitar y dividir al movimiento de liberación de Sudáfrica. Sin embargo, las denominadas reformas constitucionales tan cacareadas por las autoridades sudafricanas, así como por los gobiernos y medios de difusión de ciertos países occidentales, han resultado no ser más que otra versión de la misma vieja política de apartheid. La delegación soviética cree que la lucha de los pueblos oprimidos de Sudáfrica y Namibia contra la tiranía racista merece un apoyo total y exige que las Naciones Unidas adopten medidas inmediatas y eficaces de conformidad con la Carta y con las obligaciones que se asumieron solemnemente en virtud de ésta.

El año próximo harán 40 años que las Naciones Unidas comenzaron a examinar el problema del racismo en Sudáfrica. Debemos hacer mención especial del arduo trabajo realizado por el Comité Especial contra el Apartheid, ahora bajo la Presidencia del Representante Permanente de Nigeria ante las Naciones Unidas, Embajador Garba, a fin de movilizar los esfuerzos internacionales en la lucha por la eliminación del apartheid.

Las autoridades sudafricanas no hubieran podido desdeñar la opinión pública mundial con tanta arrogancia si no hubieran confiado en el apoyo real de sus patrocinadores y protectores occidentales, los Estados Unidos en primer lugar. De esta manera están obstaculizando la aplicación de las sanciones totales y eficaces previstas por la Carta de las Naciones Unidas.

Washington recurre a todo tipo de medidas y a su propia versión de sanciones contra los Estados cuya política no le complace, pero es reacio a hacer lo más mínimo contra un régimen racista que es condenado diariamente como antipopular y antihumano.

Además, se formulan argumentos en el sentido de que las sanciones que se impongan a Sudáfrica perjudicarían a sus vecinos y, cuando esos propios países rechazan ese tipo de argumentos, los representantes de las Potencias occidentales afirman que las sanciones redundarían en detrimento de la población de Sudáfrica, en tanto que es precisamente la población autóctona de ese país la que exige que se impongan esas sanciones lo antes posible.

Todo esto reviste una apariencia tal de hipocresía como los reproches que se le hacen a Pretoria por el empleo de "violencia innecesaria" y el consejo que se le da de reformar el apartheid de una manera u otra. No son más que esfuerzos tendientes a encubrir su propia responsabilidad por los crímenes de ese régimen, que ha podido sobrevivir hasta nuestros días gracias al apoyo y a la "participación constructiva" de sus amigos occidentales.

Fiel a su política exterior basada en principios encaminados a la eliminación definitiva y total del colonialismo y el racismo en todas sus formas y manifestaciones, la Unión Soviética condena vigorosamente al régimen racista de Pretoria, que lleva a cabo una política de agresión y de terrorismo estatal en toda la región meridional del continente. La Unión Soviética condena categóricamente las represiones en masa perpetradas por el régimen racista de Sudáfrica y pide que se ponga fin inmediatamente al terror de que hace víctima a la población africana del país. Exige que se libere de las mazmorras en que se encuentran a los valientes adalides africanos de la libertad, Nelson Mandela y miles de prisioneros políticos más.

Es preciso que se garantice la libertad de acción del African National Congress y de todas las organizaciones que deseen formar en Sudáfrica una sociedad democrática y unida. El pueblo soviético expresa su solidaridad con la lucha contra el apartheid, la segregación racial y la discriminación y todas las formas de opresión y explotación de la población africana de Sudáfrica.

La Unión Soviética dio impulso a la adopción por parte de las Naciones Unidas de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y figuró entre los primeros Estados que la ratificaron.



Nuestro país apoya las reivindicaciones de los países africanos y de los demás países no alineados, así como también los llamamientos de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad a fin de que el Consejo apruebe sanciones colectivas obligatorias contra Sudáfrica, de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, e imponga un embargo de petróleo y sus productos derivados.

Las decisiones de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la política de apartheid instaurada por las autoridades de Sudáfrica, tienen por finalidad otorgar una amplia ayuda moral y material al pueblo que lucha contra el colonialismo, el racismo y el apartheid y en pro de su liberación nacional. De conformidad con esas decisiones, la Unión Soviética sigue y seguirá ofreciendo respaldo de todo tipo a los movimientos de liberación nacional del Africa meridional. Esta postura anticolonialista y antirracista de la Unión Soviética ha sido siempre y seguirá siendo firme y sistemática.

La Unión Soviética está convencida de que el año en que se cumple el vigésimo quinto aniversario de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales debe estar caracterizado por medidas decisivas que tiendan a eliminar de una vez por todas al colonialismo, el racismo y el apartheid.

Sr. DJOUDI (Argelia) (interpretación del francés): Una vez más se ha invitado a la Asamblea General a que someta a debate la política racista de apartheid de Sudáfrica. Este sistema inhumano, reconocido como crimen de lesa humanidad, se ha perpetuado en Sudáfrica y sigue engendrando víctimas diariamente y amenazando gravemente la paz y la estabilidad regionales e internacionales.

Más que nunca, sus defensores se aferran a sus privilegios y desprecian altivamente la reprobación que suscita en la opinión pública internacional su política racista.

Su intransigencia se deriva de la incapacidad de la comunidad internacional de adoptar medidas eficaces contra el odioso sistema de apartheid y se nutre del apoyo que no dejan de facilitarles ciertas Potencias.

La mayoría oprimida de Sudáfrica, el pueblo de Namibia y los demás pueblos de la región, en particular de los países de la línea del frente, siguen por su parte pagando un oneroso tributo a la libertad, la dignidad y la estabilidad. La región del Africa meridional sigue siendo escena de tirantez y convulsiones profundas, cuya causa principal es el régimen de apartheid.

La represión desatada contra la mayoría africana en el interior de Sudáfrica va acompañada por el mantenimiento de la ocupación colonial de Namibia y por el recrudecimiento de las agresiones contra los países vecinos de Sudáfrica. En esa parte del mundo, numerosos principios cardinales de la Carta de las Naciones Unidas, sobre los que se basan la solidaridad y la confraternidad humanas, son gravemente burlados por la arrogancia y la avidez de una minoría celosa de sus privilegios. Los principios de la igualdad de derechos, de la libre determinación de los pueblos, y de la no utilización en las relaciones internacionales de la amenaza o del recurso a la fuerza contra la integridad territorial, la independencia y la soberanía política de todo Estado, son violados continuamente por el régimen de apartheid de Sudáfrica. El racismo y la discriminación, la agresión, la intervención, la injerencia, la desestabilización y el colonialismo son las características del régimen de Pretoria.

En el ámbito interno ese régimen se mantiene inflexible y el racismo sigue estando a la orden del día. La mayoría se ve privada de participar en el Gobierno y las matanzas y los asesinatos son las respuestas que se dan a sus reivindicaciones legítimas. Durante los últimos 12 meses, más de mil personas han muerto y decenas de millares más han sido heridas o han resultado detenidas arbitrariamente o encarceladas sin juicio. De ese modo, miles de mujeres, niños, dirigentes sindicalistas, religiosos y trabajadores, han sido encarcelados porque se han atrevido a exigir justicia e igualdad.

Las muertes en cautiverio y la tortura de los detenidos son hechos cotidianos en Sudáfrica y se multiplican las desapariciones y las prohibiciones. La prensa, que ya está muy controlada, se ha visto sometida además a una censura mucho más rígida que en el pasado.

No transcurre un solo día sin que la comunidad internacional tenga noticias del asesinato a sangre fría por la policía sudafricana de opositores pacíficos al apartheid. Tampoco transcurre un día sin que combatientes de la libertad, estudiantes, sindicalistas o jefes religiosos sean víctimas de algún acto represivo importante.

La política de bantustanización, de traslados forzosos de poblaciones y de control de la circulación de las personas, en virtud de inhumanas leyes de "pases", y, por desgracia, muy célebres, siguen perpetuando la opresión de la población africana y aumentando su pobreza y su desamparo.

Las matanzas de Crossroads, en febrero de este año, siguen vivas en nuestra memoria y simbolizan no sólo la oposición firme de las poblaciones de las ciudades africanas frente a la política de bantustanización, y de traslado forzoso, sino también la determinación de los habitantes de esas ciudades y de la mayoría negra en su conjunto de poner fin a esa política, soportando, de ser necesario, los mayores sacrificios.

Esta determinación, ilustrada por la resistencia heroica opuesta a las fuerzas de la policía y el ejército de Sudáfrica, pese a los poderes y la impunidad que les garantiza el estado de emergencia impuesto el 21 de julio último por el régimen racista, muestra a todas luces a quienes aún pudieran dudarlo, que el aborrecible sistema de apartheid está irremediablemente condenado y que por numerosas y profundas que puedan ser las reformas de que pueda ser objeto, debe desaparecer tarde o temprano.

Ni las supuestas reformas constitucionales, cuyo principio básico es la segregación racial, ni el estado de emergencia pueden garantizar estabilidad alguna al régimen de apartheid. La creación de un parlamento tripartito constituye un epifenómeno de la doctrina de separación y ha sido rechazado dentro de Sudáfrica y enérgicamente denunciado y condenado por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la comunidad internacional en su conjunto.

El estado de emergencia, pese a la panoplia de medios de represión que pone a disposición de las fuerzas represivas, no ha devuelto la paz ni ha restablecido lo que el régimen racista denomina con el eufemismo de "orden público". Antes bien, ha favorecido la extensión de la revuelta al conjunto del país, ha suscitado la repulsa internacional y ha provocado la condena por la mayoría de los gobiernos del mundo. Constituye también una medida inspirada en el miedo que muestra el desconcierto en que se debate el régimen sudafricano así como la incapacidad de éste para apreciar con serenidad los cambios radicales que se producen actualmente en ese país.

El discurso del racista Botha, pronunciado el 15 de agosto último, es el mejor ejemplo posible de la voluntad de Pretoria, no sólo de seguir ignorando los llamamientos urgentes de la comunidad internacional en favor de la abolición del sistema del apartheid, sino también y sobre todo, de proseguir y reforzar aún más su política de sumisión y represión de la mayoría africana.

Esperamos que los países que aún creen en la posibilidad de que pueda reformarse el sistema de apartheid hayan comprendido por fin el mensaje de Pretoria.

El apartheid es un crimen de lesa humanidad y no hay otra solución para que retorne la paz y la estabilidad al Africa meridional que destruir totalmente este odioso sistema. Esa es condición sine qua non para la instalación de una sociedad justa, democrática y plurirracial en Sudáfrica. Es, por último, la condición necesaria para que se ponga fin a las invasiones y agresiones sudafricanas contra los países independientes vecinos y cesen los ataques desestabilizadores, directos o perpetrados por mercenarios, contra su soberanía e integridad territorial.

Como lo reclamaron la vigésima primera Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, celebrada en Addis Abeba en junio último, y la Conferencia Ministerial del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en Luanda, hace casi un mes, no puede lograrse la erradicación del apartheid sino mediante el aislamiento total de Sudáfrica y el fortalecimiento de la asistencia a los movimientos de liberación de Sudáfrica y de Namibia y a los países de la línea del frente.

La imposición de sanciones generales y obligatorias sigue siendo el medio pacífico más eficaz para lograrlo.

Por ello, ha llegado el momento de que los países que, por una parte, se oponen a la lucha armada y a los cambios violentos en Sudáfrica y Namibia y que, por la otra, rechazan la imposición de sanciones como medio pacífico para alcanzar los cambios, so pretexto de que los mismos perjudicarían a la mayoría oprimida de Sudáfrica y a los pueblos de Namibia y de los Estados vecinos, armonicen sus actos con los de la comunidad internacional y favorezcan el aislamiento total de Sudáfrica.

Ha llegado también el momento de que esos mismos países dejen de concebir a los pueblos oprimidos de Sudáfrica y a los países de la línea del frente como pretextos para proteger y preservar sus intereses egoístas en Sudáfrica y Namibia.

El Consejo de Seguridad debiera hacer uso, en el plazo más breve posible, de los poderes que le confiere el Capítulo VII de la Carta para cumplir con sus responsabilidades, imponiendo sanciones generales y obligatorias contra Sudáfrica.

Todos los miembros del Consejo de Seguridad, en particular los que aún mantienen relaciones con el régimen de Pretoria, debieran apoyar la adopción de tales sanciones, aportando su concurso al proceso verdadero de cambio que se

desarrolla actualmente en Sudáfrica, evitando así al pueblo sudafricano nuevos sufrimientos y duelos, y favoreciendo el rápido advenimiento de una sociedad justa y democrática en Sudáfrica y de una era de paz, estabilidad y cooperación en el Africa meridional.

Sr. VONGSAY (República Democrática Popular Lao) (interpretación del francés): La comunidad internacional, que acaba de celebrar, el 24 de octubre, el cuadragésimo aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, tiene derecho a esperar que los obstáculos que aún se levantan en el camino de la abolición pura y llana de esa institución odiosa y bárbara que es el apartheid, que a diario practica el régimen racista y minoritario de Pretoria, puedan superarse o quebrarse rápidamente. Es alentador observar que la mayoría creciente de los Jefes de Estado o de Gobierno y demás dirigentes de los países Miembros condenaron enérgicamente, en las alocuciones pronunciadas con motivo del período conmemorativo e histórico de nuestra Organización, a ese crimen contra la conciencia y la dignidad del hombre.

Igualmente, hace algunas semanas, en la Sede de esta Organización, en el curso de la celebración del trigésimo aniversario de la Carta de la Libertad de Sudáfrica, del vigésimo quinto aniversario de las matanzas de Sharpeville y del vigésimo quinto aniversario de la aprobación por la Asamblea General de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, la comunidad internacional tuvo ocasión de insistir nuevamente en el carácter legítimo del combate tenaz que libra actualmente el pueblo oprimido de Sudáfrica, así como en la necesidad y urgencia de intensificar la ayuda multiforme a la justa causa por la que lucha.

A nuestro juicio, cabe rendir homenaje a las Naciones Unidas por los esfuerzos incansables y perseverantes que despliegan en pro de la justa causa del pueblo oprimido de Sudáfrica, el cual libra un combate heroico, bajo la dirección decidida de sus movimientos de liberación. Empero, desgraciadamente, se siguen enfrentando obstáculos aparentemente casi infranqueables que no hacen fácil - preciso es reconocerlo - alcanzar el objetivo. Estos obstáculos son, como todos lo sabemos, el propio régimen de apartheid, con su temible maquinaria de represión, opresión, agresión y desestabilización dirigida contra la población negra mayoritaria, así como contra los países soberanos vecinos, por una parte, y los que en Europa occidental y en otras partes le prestan una ayuda incondicional, por la otra.

El informe del Comité Especial contra el Apartheid del cual la Asamblea General se ocupa actualmente nos proporciona informaciones reveladoras sobre la escalada de la represión ejercida por Pretoria contra la población oprimida de Sudáfrica, sobre la creciente resistencia de la masa oprimida que se opone al régimen, sobre la colaboración multiforme entre el régimen criminal y los Gobiernos de ciertos países occidentales, comprendidos, por supuesto, aquellos que promueven la política de la "participación constructiva" y sobre la solidaridad y la colaboración internacionales existentes con miras a contribuir a la abolición de esta institución inhumana y bárbara que ha sido identificada con el nazismo y el fascismo, cuya derrota celebró la comunidad internacional hace seis meses.

La proclamación el 21 de junio de 1985 del estado de emergencia en 36 distritos administrativos de Sudáfrica fue el punto culminante de la intensificación de la represión ejercida por Pretoria contra la población oprimida y sometida de ese país.

El informe del Comité Especial contra el Apartheid dice:

"En un plazo de seis semanas desde la proclamación de las medidas de emergencia, fueron encarcelados por lo menos 2.500 adversarios del apartheid y resultaron muertos más de 140 a causa de estas medidas draconianas. Entre los presos se contaban líderes religiosos, abogados, profesores, estudiantes, sindicalistas y otros activistas políticos que se resistían al apartheid."

(A/40/22, párr. 130)

Pero, desde entonces, ¿cuántas personas han sido víctimas de esta maquinaria de opresión? Ciertamente, centenares de muertos y heridos, a juzgar por los afligidos espectáculos de la represión policíaca que la televisión norteamericana nos mostró la semana pasada.

Se recordará que la comunidad internacional ha condenado esas medidas arbitrarias, pidiendo que se levantara inmediatamente el estado de sitio, se procediese a la liberación inmediata de los dirigentes negros detenidos o encarcelados y el inicio de conversaciones con los dirigentes auténticos de la población oprimida, y otras medidas. Incluso el Consejo de Seguridad aprobó una resolución en que se condenaba en los términos más enérgicos los hechos a que me he referido. Pero, lamentablemente, Pretoria, una vez más, no ha tenido en cuenta esto, y lo ha hecho con toda impunidad.

Simultáneamente con las detenciones arbitrarias, los procesos políticos o los "procesos por traición", así como con las detenciones políticas, cuyo número ha aumentado considerablemente desde principios de este año, el régimen racista minoritario de Pretoria ha continuado frenéticamente la aplicación de sus políticas de bantustanización, de desplazamientos forzosos de la población y de control de los movimientos africanos mayoritarios, así como la aplicación de sus maniobras políticas más péfidas. Se recordará que entre esas maniobras políticas figuraba la mascarada de la llamada reforma constitucional realizada el año pasado y que la comunidad internacional, incluidos la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, declararon ya nulas y sin valor. Esas maniobras políticas, cuyo objetivo inconfesado era engañar a la opinión pública internacional, atenuar un poco su ira y su indignación, fueron rechazadas por la mayoría aplastante de la población negra oprimida, así como por sus movimientos de liberación.

La duplicidad y la hipocresía innatas de Pretoria han sido desenmascaradas finalmente por sí mismas. Botha, en una declaración formulada ante el Congreso de su Partido, el 15 de agosto, rechazó el principio del sufragio universal y la concesión de los derechos políticos a los negros en un Estado no racial, democrático y unitario, e incluso blandió en forma insolente, la amenaza de sanciones y de represalias mucho más severas contra los adversarios del apartheid. La comunidad internacional quedó profundamente escandalizada. Por esto, el Primer Ministro de Sudáfrica declaró también, el 30 de septiembre de este año, que los negros podrían ejercer pronto el sufragio universal en el interior de lo que él denomina un Estado "unido".

Fue tan perversa la maniobra que el Embajador Joseph Garba, Presidente del Comité Especial contra el Apartheid, llegó a expresarse así, en el discurso que pronunció en esta sala el 28 de octubre de 1985:

(continúa en inglés)

"Este nuevo sistema nebuloso no es otra cosa que un intento de mantener la dominación blanca." (A/40/PV.51, párr. 18)

(continúa en francés)

Este comentario parece sumamente sensato y la comunidad internacional y todos los movimientos de resistencia del apartheid deben tenerla totalmente en cuenta.

Con respecto a los principales obstáculos para la eliminación total de este sistema demoníaco del apartheid, mi Gobierno lamenta que ciertos países occidentales

y la Potencia que defiende la política de la participación constructiva, lejos de renunciar a su actitud como la comunidad internacional los ha invitado constantemente, se obstinan en todo momento en proseguir su política de tolerancia extrema y de asistencia y cooperación multiforme con Pretoria. Este es el obstáculo principal de todo esfuerzo emprendido hasta la fecha por la comunidad internacional para la liquidación de este azote.

Pretoria conoce a fondo los puntos fuertes y los puntos débiles de sus asociados comerciales occidentales, así como de sus aliados militares y nucleares, cuyas enormes empresas transnacionales participan ciegamente en el pillaje de los recursos naturales, materiales y humanos de Sudáfrica y de Namibia. Esto explica por qué Pretoria se ha atrevido a desafiar con toda impunidad las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. La resolución 418 (1977) del Consejo de Seguridad, decretando un embargo obligatorio de armas, ha quedado más o menos como letra muerta en el sentido de que algunos países occidentales y otros que la aprobaron nunca han respetado escrupulosamente el embargo. En su informe, el Comité Especial contra el Apartheid, ha publicado a beneficio nuestro una lista de los países que mantienen vínculos estrechos oficiales o privados de orden comercial, militar e incluso nuclear con el régimen racista ilegal de Sudáfrica.

La comunidad internacional debe tomar en serio las informaciones relativas al ritmo sorprendente en que se desarrolla actualmente la capacidad nuclear de los regímenes fascistas, sionistas y racistas de Pretoria e Israel.

Con respecto al embargo del petróleo, sucede lo mismo que con el embargo de armas. Algunas Potencias occidentales protectoras de Pretoria y detentadoras del derecho de veto siempre han ahorrado a ese régimen diabólico las sanciones globales y obligatorias en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que el Consejo de Seguridad tiene el deber, en casos semejantes, de poner en práctica.

Este es el círculo vicioso en el que nos encontramos y el que tenemos el deber de contribuir a romper, cueste lo que cueste, en interés superior del pueblo oprimido de Sudáfrica, así como del pueblo conquistado y sometido de Namibia.

El Gobierno de Lao observa con satisfacción que desde principios de este año los movimientos de solidaridad con la población negra oprimida de Sudáfrica han ganado en amplitud y en calidad en todas las partes del mundo. Incluso en los Estados Unidos de América la opinión pública ha ejercido fuertes presiones sobre los círculos gubernamentales, parlamentarios, universitarios, bancarios y otros, a fin de que se adopte una serie de sanciones económicas contra Pretoria.



El Gobierno de Lao, como todos los Gobiernos y pueblos amantes de la paz y de la justicia en el mundo, apoyan la Declaración Especial sobre la situación en el Africa meridional, publicada a raíz de la Conferencia Regional sobre Seguridad, Desarme y Desarrollo en Africa, celebrada en agosto de este año en Lomé. Los Gobiernos de los países que, con sus actos, protegen y alientan a Pretoria en su política inhumana, deberían prestar seria atención a la opinión pública tanto nacional como internacional que aboga por la causa justa del pueblo oprimido de ese país.

Como es sabido, Pretoria no se contenta solamente con oprimir y reprimir salvajemente a la población negra mayoritaria, a tal punto que se ha convertido en una comunidad extranjera dentro de su propio país. Además, el régimen racista se arroga el papel de policía regional y contando con el apoyo incondicional de sus protectores occidentales prosigue sin descanso su política y práctica de terrorismo de Estado contra los países soberanos e independientes de la línea del frente del Africa meridional, tales como Angola, Mozambique, Botswana, Lesotho y otros. Más de una vez Pretoria ha cometido sus actos de agresión, desestabilización e intimidación, así como de bloqueo económico, contra esos países. La comunidad internacional apoya la política de sensatez y coexistencia pacífica que desean llevar a cabo de buena fe esos países de la línea del frente con respecto al régimen de Pretoria. Pero, como todos saben, es Pretoria la que, por su dualidad, no ha respetado los compromisos suscritos. Hasta ahora se han adoptado numerosas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad en las que se condena - formalmente, es cierto - a Pretoria por su política hostil y desestabilizadora con respecto a sus vecinos del Africa meridional. A fines de septiembre de este año, en pleno período de sesiones de la Asamblea General en el año de conmemoración, Pretoria perpetró un nuevo acto de agresión contra Angola, cuya parte meridional sigue ocupada por la soldadesca sudafricana. Es notorio que las tropas de Pretoria se dedicaban y se dedican activamente a desestabilizar y derrocar el régimen vigente en Angola y en Mozambique. Para llegar a sus fines siniestros y criminales, no ha vacilado en utilizar todos los medios ilícitos, incluyendo la banda de contrarrevolucionarios de la UNITA, para atentar contra la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Angola. Más de una vez se han proferido condenas verbales contra Sudáfrica. Las Potencias protectoras y que detentan el veto adoptaron, en el mejor de los casos, una actitud de abstención. Pero cuando se trataba de que el Consejo de Seguridad adoptara las sanciones globales y obligatorias en virtud del Capítulo VII de la Carta de la Organización, esas Potencias, o una de ellas según el caso, no dejaron jamás de hacer uso de su veto.

Es así como este flagelo del apartheid ha podido, hasta ahora, esquivar el cadalso de la comunidad internacional y las sanciones derivadas del Capítulo VII de la Carta. Sea como fuere, no hay que desesperar. El Gobierno lao, al reafirmar su condena enérgica del crimen de apartheid, así como de su autor, está firmemente convencido de que la lucha histórica que los pueblos oprimidos y conquistados de Sudáfrica y de Namibia llevan a cabo actualmente, bajo la dirección decidida de sus

movimientos de liberación nacional respectivos, conducirá inevitablemente en el futuro próximo a una victoria gloriosa. Que sepan que el Gobierno y el pueblo lao, este último que sufrió un pasado colonial pesado y doloroso y que conoce el precio de la lucha larga y tenaz que él mismo libró por la reconquista de la independencia nacional y de la libertad, estarán siempre a su lado hasta la victoria final. Que sepan también que el Gobierno y el pueblo lao se han sumado invariablemente a la comunidad internacional y a los pueblos amantes de la paz y la justicia de todo el mundo para exigir la liberación inmediata e incondicional del gran dirigente Nelson Mandela, así como de todos sus compañeros de armas y combatientes por la libertad que todavía languidecen, con dignidad y estoicismo, en las prisiones de los nazis sudafricanos desde hace ya muchos años. Su valor extraordinario y su patriotismo sublime sin igual, que constituyen indudablemente una poderosa fuente de aliento para otros luchadores por la libertad, han de terminar triunfando frente a las fuerzas satánicas del apartheid, y el pequeño grupo blanco fascista que lo practica.

Sr. van der STOEL (Países Bajos) (interpretación del inglés): En su declaración hecha en nombre de los diez Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, además de España y Portugal, el Embajador de Luxemburgo ya observó que durante el año transcurrido la situación en Sudáfrica ha empeorado decididamente. Condenó categóricamente el sistema de apartheid de Sudáfrica y reiteró la convicción de los Doce de que no puede haber solución para la convulsión política en ese país mientras su Gobierno persista en su política racial. Mi país respalda decididamente las opiniones expresadas en esa declaración común.

El apartheid, como forma de segregación racial institucionalizada, es una violación sistemática del principio de la igualdad de derechos de todos los seres humanos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. En los Países Bajos, que tienen un compromiso de larga data con los derechos humanos y las libertades fundamentales, la discriminación racial y la opresión en Sudáfrica han merecido la desaprobación y la indignación de la población. El poder de ese sentimiento popular con respecto a esta cuestión está reflejado claramente en la actitud adoptada por mi Gobierno. El Gobierno de los Países Bajos condena inequívocamente la política de apartheid del Gobierno sudafricano como una afrenta a los valores fundamentales de la dignidad humana, la igualdad y la libertad. Los Países Bajos otorgan la máxima prioridad al rápido desmantelamiento del sistema de apartheid y su sustitución por una sociedad

verdaderamente democrática en la cual todos los sudafricanos, independientemente de la raza o del color de su piel, participen en un pie de igualdad en la vida política y económica del país. Es motivo de profunda preocupación para nosotros que hasta ahora el Gobierno sudafricano haya reaccionado a las presiones del exterior simplemente con gestos limitados. Los trágicos acontecimientos de este año han demostrado claramente que la exclusión de la mayoría negra de la participación en el gobierno de su propio país necesariamente atizará la depravada espiral de opresión y violencia con resultados más y más inaceptables. Por lo tanto, tenemos la firme opinión de que la comunidad internacional no dispone de otra opción que la de ejercer una creciente presión sobre el Gobierno sudafricano para que finalmente emprenda una política de reformas fundamentales, que conduzca a la eliminación total del apartheid, como única alternativa a más represión y derramamiento de sangre.

El Gobierno de los Países Bajos se encuentra preocupado por el enfrentamiento y la violencia crecientes en Sudáfrica, que ya ha causado cientos de muertes y que cotidianamente casi cobra nuevas víctimas. Las autoridades sudafricanas han respondido a esta crisis que se agrava no alejándose del apartheid sino con una demostración de fuerza y ahogando las voces de protesta. En julio se impuso por decreto, un estado de emergencia en 36 distritos administrativos alrededor de Johannesburgo y en el Cabo Oriental, en un esfuerzo por detener la marea creciente de la resistencia contra la intransigencia del Gobierno. Ese decreto permanece en vigencia a pesar del pedido del Consejo de Seguridad de que se lo derogara inmediatamente. Como era previsible, estas medidas draconianas han dado por resultado más arrestos masivos y detenciones y crecientes sufrimientos para la mayoría negra oprimida. En su declaración de 23 de julio, los Diez pidieron a las autoridades sudafricanas que pusieran en libertad a todos los detenidos en virtud de las disposiciones del decreto y abordaran la raíz de los trastornos endémicos de Sudáfrica emprendiendo un diálogo con los auténticos representantes de la comunidad no blanca, entre ellos los que actualmente se encuentran en prisión, con el propósito de lograr una adecuada representación de la comunidad negra a nivel nacional.

Con este fin, los Diez sugirieron una serie de medidas de fomento de la confianza, incluyendo la liberación incondicional y a la brevedad del Sr. Nelson Mandela y el rechazo de la legislación discriminatoria como las leyes de pases y las de áreas de grupos. Desafortunadamente, el Gobierno sudafricano prefirió una vez más desconocer los llamamientos de la comunidad internacional. En cambio, sugirió algunas medidas de menor importancia que sólo arañan la superficie del edificio del apartheid y se retiró tras declaraciones vagas y poco convincentes dirigidas al mundo exterior, al mismo tiempo que intensificó sus esfuerzos internos para aplastar a los opositores de su política de apartheid. Por consiguiente, los Diez, junto con España y Portugal, decidieron el 10 de septiembre la adopción de varias medidas comunes para mantener su presión sobre Sudáfrica.

El Presidente de Sudáfrica, al hablar en la inauguración del Congreso del Partido Nacional, el 15 de agosto, se refirió a la necesidad de realizar reformas y de negociar. Sin embargo, para nuestra grave decepción, no hizo frente al desafío de las circunstancias abriendo una ventana al futuro y a las perspectivas de una solución pacífica para los problemas de Sudáfrica por medio de un diálogo genuino. Hasta ahora la opinión pública mundial ha estado buscando en vano señales de disposición del Gobierno sudafricano de abandonar el apartheid como concepto guía para la organización de la sociedad del país. La nueva constitución de Sudáfrica, que entró en vigor en 1984, concedió una representación parlamentaria limitada a las personas de color del país y a los descendientes de asiáticos, pero ignoró las aspiraciones políticas legítimas de los negros. Debido a que pareció relegar el reconocimiento de la mayoría negra de Sudáfrica a un futuro indefinido, la nueva constitución aumentó la frustración de la población negra y ayudó a encender los estallidos de ira que han arrojado a Sudáfrica a su actual estado de lucha civil y de perturbación.

Se han adoptado algunas medidas de menor importancia, tales como la concesión de derechos de alquiler para los negros en las áreas urbanas. El denominado pequeño apartheid se ha aliviado un poco. Asimismo, los impedimentos legales para los matrimonios y las relaciones sexuales entre blancos y no blancos han sido abolidos. Sin embargo, la política de traslados forzosos, que ha causado grandes penurias a millones de sudafricanos, ha sido suspendida pero no abrogada. Hay indicios de que el Gobierno sudafricano puede abolir las leyes de pases y la de control de entrada y restaurar la ciudadanía sudafricana a los 10 millones de negros que residen en los denominados territorios patrios. Lamentablemente, muchas

de esas propuestas están tan llenas de ambigüedades y reservas que persisten las dudas en cuanto al compromiso del Gobierno sudafricano de realizar reformas fundamentales.

La realidad en Sudáfrica es que la miseria en los territorios patrios tribales superpoblados y pobres en recursos no ha cambiado y que la falange de leyes del apartheid sigue estableciendo los límites dentro de los que están confinadas las vidas de la mayoría no blanca, mientras que el poder político, a nivel nacional, sigue siendo el predio exclusivo de la minoría blanca. Por lo tanto, la conclusión es inevitable: el ritmo de cambio en Sudáfrica está muy retrasado con respecto a las necesidades apremiantes de los negros, especialmente en cuanto la cuestión primordial de su participación política.

Los Países Bajos no se arrogan el derecho de ofrecer un plan a Sudáfrica para su configuración política futura. Sin embargo, creemos que todos los sudafricanos, independientemente de su raza o color, deben tener plenos derechos políticos e igualdad de voz en el proceso de reestructurar su sociedad. A fin de contribuir al objetivo de lograr una transición pacífica hacia una sociedad no racial, los Países Bajos apoyan los esfuerzos para aumentar la presión internacional sobre Sudáfrica, mientras siguen alentando las fuerzas del cambio pacífico en el país. Explicaré esta política de dos vías con mayor profundidad.

El Gobierno de los Países Bajos ha considerado tradicionalmente a las Naciones Unidas como punto central de la acción internacional concertada para poner fin al apartheid. Las sanciones obligatorias impuestas por el Consejo de Seguridad son el instrumento más eficaz y contundente que la Carta pone a nuestra disposición. Los Países Bajos cumplen estrictamente la resolución 418 (1977) del Consejo de Seguridad, por la cual ese órgano dispuso un embargo obligatorio de armas contra Sudáfrica. Durante el período en que mi país fue miembro del Consejo de Seguridad, los Países Bajos iniciaron las consultas tendientes a la adopción de la resolución 558 (1984), que pide a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que prohíban la importación de armas sudafricanas, como complemento necesario de la resolución 418 (1977) del Consejo. A nivel nacional, el Gobierno de los Países Bajos se encuentra en el proceso de presentación de leyes para prohibir la exportación de bienes paramilitares a Sudáfrica y dar una base estatutaria a las disposiciones de la resolución 558 (1984) del Consejo.

Sin embargo, si ha de evitarse una catástrofe es necesario aumentar la presión internacional sobre el Gobierno sudafricano. Por lo tanto, los Países Bajos

se han manifestado en forma consecuente a favor de la adopción de sanciones económicas selectivas en virtud del Capítulo VII de la Carta, en particular una prohibición obligatoria de las inversiones y un embargo de petróleo. En agosto pasado el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 569 (1985) que, entre otras cosas, pide la restricción de nuevas inversiones en Sudáfrica, sobre bases voluntarias. Sin embargo, para que esa medida sea realmente efectiva, debe ser obligatoria o, por lo menos estar apoyada por un número importante de países.

En espera de un acuerdo sobre restricciones a las inversiones, con un adecuado apoyo internacional, mi Gobierno ha tomado medidas destinadas a asegurar el fiel cumplimiento del Código de Conducta para empresas europeas con intereses en Sudáfrica. No hay duda de que las directrices de este Código, incluyendo principios tales como la libertad de asociación, los salarios mínimos garantizados e igual pago por igual trabajo, contribuyen en forma importante a introducir reformas en la esfera de las relaciones laborales en Sudáfrica y, por lo tanto, al logro de la igualdad para la población negra. Para aumentar aún más la efectividad del Código, los Países Bajos tratan de darle más amplitud y reforzar la supervisión de su aplicación. Existe el propósito de que la información sobre el cumplimiento del Código sea obligatoria para las compañías de los Países Bajos que tienen sucursales en Sudáfrica, y las contravenciones a las disposiciones estatutarias darán lugar a sanciones. Asimismo, los Países Bajos han propugnado en forma consecuente el establecimiento de un embargo obligatorio de petróleo contra Sudáfrica. Mientras tanto, mi Gobierno suscribe plenamente la medida convenida con nuestros asociados en la cooperación política europea, para poner término a las exportaciones de petróleo a Sudáfrica. Además, mi Gobierno estimula en forma activa a las compañías de los Países Bajos a reducir sus importaciones de carbón sudafricano.

En una esfera diferente, los Países Bajos expresaron su desaprobación a las políticas sudafricanas dando fin a su acuerdo cultural con ese país y estableciendo requisitos de visa para los sudafricanos. Esta última medida permite a mis autoridades restringir la participación sudafricana en eventos deportivos que se realizan en los Países Bajos.

Sin embargo, la presión solamente no basta. Como miembros responsables de la comunidad internacional, también tenemos el deber de alentar a las fuerzas del cambio pacífico en Sudáfrica, donde quiera y cuando quiera que podamos. Junto con sus asociados del grupo de los Diez, que pronto serán Doce, los Países Bajos han decidido intensificar la adopción de medidas y programas positivos orientados a

eliminar las desigualdades existentes. Por su parte, los Países Bajos ya han aumentado sus contactos y programas para ayudar a los miembros de la comunidad no blanca y a las organizaciones anti-apartheid que se dedican al objetivo de la transformación pacífica del sistema social y político sudafricano. Además, los Países Bajos seguirán proporcionando asistencia humanitaria a los presos políticos y a otras víctimas del apartheid por intermedio del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Sudáfrica, el Fondo Internacional de Defensa y Ayuda, el Consejo Mundial de Iglesias y de otros conductos apropiados.



Una parte muy significativa de la asistencia de los Países Bajos al Africa meridional se dirige a los países de la Conferencia de Coordinación para el Desarrollo del Africa Meridional y los Estados de la línea del frente. Como lo demostró nuevamente la incursión sudafricana en Gaborone, los efectos de las tensiones engendradas por el sistema de Sudáfrica de discriminación racial no se detienen en las fronteras del país sino que exponen a toda la región a la agresión sudafricana y a actos de desestabilización. Con el fin de permitir que esos Estados hagan frente a las nuevas cargas económicas que se derivan de las repercusiones de los problemas de Sudáfrica, los Países Bajos han dedicado una parte sustancial de su programa de cooperación para el desarrollo a asistir a la Conferencia de Coordinación para el Desarrollo del Africa Meridional, los Estados de la línea del frente y otros países del Africa meridional. Como nuestro Gobierno aprecia en alto grado sus relaciones con los Estados de la línea del frente, los Países Bajos desean promover un diálogo político entre estos Estados y los Estados miembros de la Comunidad Europea y tomará las medidas necesarias para iniciar este proceso.

Se entiende en general, sin embargo, que los problemas interrelacionados del Africa meridional sólo pueden alcanzar una solución satisfactoria si se elimina el principal motivo de la lucha y la inseguridad, o sea, el sistema del apartheid de Sudáfrica. Sin la eliminación de esta causa profunda, nuestro común objetivo de lograr la paz, la estabilidad y la prosperidad para todos los pueblos de la región seguirá siendo una quimera. Más que nunca la comunidad internacional se enfrenta con la urgente tarea de impedir que las autoridades sudafricanas suman a su país y a sus vecinos en una desastrosa conflagración general.

Una estructura social erigida sobre la base de la discriminación racial y el prejuicio no puede perdurar. Debe comprenderse que todo lo que se haga para salvar el apartheid está condenado al fracaso y sólo servirá para prolongar los sufrimientos del país. En consecuencia, exhortamos al Gobierno sudafricano a que se ponga a la altura de las exigencias de la situación y que inmediatamente inicie un proceso de reformas fundamentales que conduzcan a la creación de una sociedad multirracial y verdaderamente democrática, que se funde en la igualdad de derechos civiles y políticos para todos sus ciudadanos, cualquiera sea la raza o el color de su piel.

Si la violencia que es intrínseca al sistema del apartheid sigue desenfrenada, corren peligro de ahogarse las voces de la razón y la moderación que surgen de todas partes mientras el país se desliza por la fatídica senda del enfrentamiento.

Sr. MOUSHOUTAS (Chipre) (interpretación del inglés): Si durante el cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas, con orgullo justificado, hemos escuchado referencias a las realizaciones de las Naciones Unidas - como ha ocurrido en materia de descolonización, la elaboración de códigos de conducta internacional, sus operaciones de mantenimiento de la paz -, con igual desaliento y angustia registramos las voces de la comunidad internacional que hacen referencia al sistema abyecto del apartheid en Sudáfrica.

Hay épocas de grandeza en la historia del hombre, pero también hay épocas de regresión, y el apartheid es el epítome de la injusticia y la perpetuación de una de las páginas más tenebrosas de la historia de la humanidad. ;Cuán injusto ha sido el hombre con el hombre! ;Cuán cruel e implacable! La extensión y la profundidad de la respuesta se halla en las informaciones de la prensa de todos los días. Como el apartheid es una negación de los valores humanos, nos recuerda también los fracasos colectivos y la pesada carga que compartimos para rectificar los males que signan el presente y plantean graves peligros para el futuro.

No cabe duda de que, como integrantes del género humano, tenemos un sentimiento de culpabilidad por nuestra incapacidad de actuar y, más aún, por lo que podríamos haber hecho y no hicimos por el pueblo de Sudáfrica. El género humano, al igual que la justicia, es uno e indivisible. Cuando se niegan los derechos humanos y las libertades fundamentales al pueblo de Sudáfrica, todos los pueblos, ya sea cerca de Pretoria o a millares de kilómetros de distancia, se ven privados de su propia libertad, en particular en la era de exploración del espacio y en un mundo cada vez más interdependiente.

No cabe duda de que la resolución de la comunidad internacional de luchar contra este sistema abyecto se ha agudizado en los últimos meses.

Es cierto que el régimen de Sudáfrica puede todavía hacer caso omiso de las condenas, desoír los llamamientos y hasta intensificar su actividad de represión y eliminación de la oposición interna a su odiada política. No cabe duda, a nuestro juicio, sin embargo, de que con el despertar de la conciencia mundial, el comienzo del fin del apartheid está a la vista. Una prueba de ello es que el régimen de Pretoria emplea aún más la represión brutal, la tortura y el asesinato de los adversarios del apartheid, en otras palabras, haciendo lo que hace un bandido desesperado cuando vislumbra el comienzo del fin.

Y como si esto no fuera suficiente, el régimen de Pretoria ha iniciado una campaña de agresión, subversión y desestabilización dirigida contra los países vecinos y, especialmente contra Angola. El desprecio del régimen de Pretoria por la comunidad mundial y el derecho internacional, continúa y queda probado no solamente por los ataques a los Estados de la línea del frente sino también por su constante negativa a aceptar la terminación de su mandato en Namibia y el mantenimiento de su presencia opresiva en el territorio. Al intensificar sus ataques contra los Estados de la línea del frente, Sudáfrica trata de intimidar a esos países para someterlos a arreglos políticos que los neutralicen como recios adversarios del nefando sistema del apartheid. Pero el hecho es que aun cuando quede un largo camino por delante, el comienzo del fin ha empezado, el sufrimiento del pueblo oprimido de Sudáfrica llegará a su fin y su dignidad y sus derechos serán restablecidos en un futuro próximo.

El hecho de que el Consejo de Seguridad no haya podido imponer sanciones generales a Sudáfrica con relación a las cuestiones de Namibia ha permitido al régimen racista proseguir con su brutal represión interna y su agresión armada y desestabilización en lo exterior. Es grave nuestra responsabilidad por haber permitido el fortalecimiento del régimen. Hemos apaciguado a Sudáfrica y, al hacerlo, hemos contribuido al agravamiento de la situación.

Sin embargo, la comunidad internacional aparece ahora más determinada a aislar al régimen de Pretoria no permitiendo nuevas inversiones e incluso retirando las ya existentes. Todas estas medidas, aun cuando distan mucho de las sanciones generales que se necesitan, contribuyen a debilitar y aislar a los promotores del apartheid.

Chipre ha condenado reiteradamente el apartheid y todas las formas de discriminación racial y ha apoyado constantemente las actividades internacionales para aplicar sanciones tal como están previstas en la Carta, con la finalidad de obligar a Sudáfrica a que abandone su política inhumana.

Estamos sinceramente con los que luchan por una sociedad democrática en que todo el pueblo de Sudáfrica, independientemente de la raza, el color o el credo, goce de derechos políticos iguales y plenos.

Por lo tanto expresamos nuestra plena solidaridad y nuestro apoyo al pueblo tan atormentado de Sudáfrica y le aseguramos que continuaremos haciendo todo lo que nos corresponda, individualmente y a través de las Naciones Unidas, para poner pronto fin al sistema inhumano del apartheid.

Sr. WASIUDDIN (Bangladesh) (interpretación del inglés): La política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica vienen figurando en el programa de este agosto órgano desde hace casi tres decenios y medio. Aunque la comunidad internacional ha expresado repetidamente su aversión y su condenación del sistema como un crimen contra la conciencia y la dignidad humana, se mantiene aún esta práctica abominable. La Asamblea General está considerando otra vez el tema y tenemos ante nosotros el informe del Secretario General, que figura en el documento A/40/780. Deseo dejar constancia de nuestro profundo reconocimiento a él por sus incansables y valiosos esfuerzos. Permítaseme asimismo esta oportunidad para encomiar la labor del Comité Especial contra el Apartheid y la del Comité ad hoc para la elaboración de una convención internacional contra el apartheid en los deportes, que aparecen en los documentos A/40/22 y Add.1 a 4 y A/40/36, respectivamente. En este contexto, queremos aplaudir los nobles esfuerzos del Embajador Joseph N. Garba, Presidente del Comité Especial, y de otros estimados miembros de ese Comité como paladines de la justa causa del pueblo de Sudáfrica que sufre bajo el apartheid y la discriminación racial. Expresamos igualmente nuestra satisfacción por el hecho de que el Comité ad hoc haya podido preparar un proyecto de convención contra el apartheid en los deportes luego de prolongadas y extensas consultas.

La posición de Bangladesh sobre el apartheid se basa en nuestro compromiso de apoyar a los pueblos oprimidos de todo el mundo que libran una justa lucha en contra del imperialismo, el colonialismo y el racismo. Se inspira asimismo en nuestra profunda y firme fe en la Carta de las Naciones Unidas, en nuestra firme devoción por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención contra la Discriminación Racial y en nuestra estricta adhesión a la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas que contiene la histórica Declaración sobre la concesión de la independencia a los pueblos que sufren bajo el yugo colonial. Continuando su total compromiso con la erradicación del apartheid, Bangladesh siempre ha prestado pleno apoyo al pueblo oprimido de Sudáfrica en su lucha contra estas odiosas políticas.

En la solemne ocasión del cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas el Presidente de Bangladesh, Su Excelencia Hussain Muhammad Ershad, al participar en el período de sesiones conmemorativo reafirmó esta política al dirigirse a la Asamblea General:

"Se sigue aplicando al pueblo de Sudáfrica la deplorable política de apartheid. La aborrecible situación que impera en Sudáfrica ha sacudido a la conciencia de la humanidad. Al reunirnos aquí en esta ocasión conmemorativa,

¿no podemos afirmar nuestra voluntad conjunta para obligar al régimen racista de Sudáfrica a abandonar para siempre esta odiosa política?" (A/40/PV.41, pág. 51)

La abominable política de apartheid ha tenido graves consecuencias políticas, económicas y sociales para la vasta mayoría de la población de Sudáfrica. Ha negado a los africanos negros los derechos civiles y políticos, incluido el derecho a la representación, y muchos de ellos se han visto desposeídos en virtud de leyes draconianas. Para eliminar su legítima lucha por los derechos inalienables, el régimen de Pretoria se ha armado hasta los dientes. Ha erigido un importante aparato de terrorismo estatal al cual se han visto despiadadamente sometidos decenas de miles de sudafricanos. Desde el punto de vista económico, ha reducido a la población autóctona a la categoría de mano de obra esclava, llevándola así a su continuo empobrecimiento. Para asegurar la perpetuación de esa explotación de la mano de obra se ha encarcelado a los dirigentes sindicales, se despide y expulsa a los huelguistas y se han limitado progresivamente las actividades sindicales.

Desde el punto de vista social, la red despiadada de controles y de discriminación ha condenado a la mayoría de la población sudafricana a una condición miserable en lo que atañe a viviendas, educación, salud, etc. En conjunto, el régimen racista de Pretoria ha tratado de encadenar a los africanos negros en todas las formas posibles, condenándolos de ese modo a un estado de existencia que constituye una grave afrenta para cualquier nivel humanitario.

Mi delegación tiene la firme convicción de que toda solución que no garantice el traspaso del poder a la vasta mayoría de la población de Sudáfrica, de acuerdo con sus opiniones libremente expresadas, ha de ser rechazada. Bangladesh siempre ha estado a favor de una campaña internacional concertada orientada a lograr el completo aislamiento y el boicoteo del régimen racista de Sudáfrica en todas las esferas: diplomática, política, económica, comercial, social, deportiva, cultural, etc. Cabe recordar que Bangladesh asumió en las Naciones Unidas la iniciativa de redactar las resoluciones relativas al embargo de armas contra Sudáfrica. Con el mismo espíritu, estamos plenamente de acuerdo con la opinión según la cual debiera aplicarse contra Sudáfrica sanciones obligatorias, tal como las contempladas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, a fin de poner término a la colaboración existente entre el régimen del apartheid y algunos otros países. Queremos compartir plenamente la inquietud expresada en el informe especial del

Comité Especial que figura en el documento A/40/22/Add.2 ante la continua y creciente alianza diabólica entre Sudáfrica e Israel, respaldando inequívocamente su llamamiento en pro de una acción internacional concertada contra ella.

La prolongada y valiente lucha de los indoblegables africanos negros, que ha culminado los recientes levantamientos en masa de Sudáfrica, señala claramente que los días del apartheid están contados. Sin embargo, el régimen racista no ha dado respuesta positiva al llamamiento de la comunidad mundial. En su lugar, ha recurrido a distintas maniobras para mantener y robustecer su fortificación en el Africa meridional mediante su aparato de terrorismo estatal. Continúa manteniendo su ocupación ilegal de Namibia y se niega a reconocer al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, que es la Autoridad Administradora legal del Territorio hasta la independencia. Por la fuerza de las pérfidas manos del apartheid el régimen racista de Pretoria no sólo ha continuado la supresión de los pueblos de Sudáfrica y Namibia sino que ha extendido asimismo sus actos de agresión a los países vecinos, amenazando de este modo la paz y la seguridad internacionales.

La comunidad internacional ha expresado repetidamente su preocupación y su condenación de los actos de agresión perpetrados por el régimen racista. Se trata de una cuestión que nos inquieta a todos puesto que Sudáfrica no sólo ha estado desarrollando su propia industria de armamentos sino que se ha ocupado activamente de impulsar su propia capacidad nuclear. Bangladesh ha sostenido constantemente que debe acatarse estrictamente la resolución 418 (1977) del Consejo de Seguridad que prohíbe la venta o transferencia de armas a Sudáfrica. Al respecto, mi delegación desea encomiar las acciones emprendidas por el Comité Especial para vigilar estrechamente los acontecimientos en los campos militar, nuclear y económico, así como todo otro tipo de colaboración entre el régimen de Sudáfrica y ciertos países.

Estamos deliberando acerca de las políticas de apartheid utilizadas por el régimen de la minoría racista de Sudáfrica en un momento en que el valeroso e indomable pueblo de Sudáfrica ha elevado su lucha a un nuevo nivel para la erradicación completa de ese sistema. Los actos de terror e intimidación no sólo no pudieron contener su lucha implacable, sino que en realidad incitaron a que se ampliara e intensificara. Ha llegado el momento de que la comunidad internacional traduzca su aborrecimiento y condena por las políticas inhumanas de apartheid en acciones decisivas y firmes. No hay ninguna duda que el pueblo oprimido de Sudáfrica surgirá triunfante de su lucha justa y legítima. Con motivo del cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas, nos corresponde a todos emprender esfuerzos concertados y enérgicos en apoyo al pueblo en lucha de Sudáfrica a fin de eliminar de una vez por todas el sistema de apartheid de la faz de la Tierra.

Sr. MOUMIN (Comoras) (interpretación del inglés): ¿Puede fijarse un precio a la dignidad del ser humano? En lo que se refiere a mi delegación, la dignidad del ser humano no tiene precio. Ningún precio es demasiado alto para que se respete la dignidad del ser humano. Nuestros hermanos oprimidos de Sudáfrica se han dado cuenta de ello y están pagando con su sangre el precio de su dignidad.

Aquellos que hacen la apología del apartheid y toleran los males del sistema inhumano de apartheid argumentan que las condiciones económicas de los negros de Sudáfrica son mucho mejores que en cualquier otro país africano. A ellos quisiéramos dejarles en claro de una vez por todas que la cuestión en juego con el sistema de apartheid no es el bienestar económico, la cuestión es la dignidad humana y política. No consiste en comparar hasta qué punto es mejor el nivel de vida de los africanos segregados de Sudáfrica en comparación con el de los africanos en otras partes. Aquello por lo que la mayoría de ellos están combatiendo es su dignidad humana, y su igualdad humana, cosas a las cuales el malvado sistema de apartheid se opone inexorablemente.

Gracias a Dios, no muchos de los aquí reunidos hemos tenido que sufrir ese sistema oprobioso. Un racismo legalizado. Un sistema que permite a los blancos pensar que son los escogidos por Dios y que todo aquel que no sea blanco debería ser pisoteado.

La paciencia de la mayoría negra de Sudáfrica se ha agotado. Desde 1912, cuando se creó el African National Congress (ANC), hasta 1960 ese pueblo recurrió a las protestas pacíficas y la resistencia pasiva, y la respuesta fue que el Gobierno sudafricano reaccionara con la violencia y el terror y con una intensificación de la opresión racial. En todo ese tiempo la comunidad internacional actuó pasivamente.

Sólo después de 1960 las masas combatientes de Sudáfrica comprendieron que el lenguaje que entendían los opresores era responder a la violencia con más violencia. Por lo tanto, mientras seguían exhortando a un cambio negociado, los movimientos de liberación se organizaron para dar un empujoncito al proceso.

Y con la independencia de muchos Estados africanos, la cuestión del apartheid fue incluida en los programas políticos internacionales, donde permaneció con una presión siempre en aumento en pro de una acción externa contra los racistas de Sudáfrica. Pero hasta hace poco, la respuesta sudafricana ha sido la misma: más represión, más violencia y terror y más desafíos a la exhortación a la paz y a la justicia.

En los últimos años, debido a la presión internacional y a la intensificación de la lucha interna del pueblo, el Gobierno de Sudáfrica inventó nuevas tácticas dilatorias para tratar de embaucar al inocente. Ha permitido, por ejemplo, a todas las razas sentarse en los mismos bancos de los parques, y a veces a comer en los mismos restaurantes. Habla de que habrá más reformas. Sin embargo, lo que no hace ni tiene intención de hacer es aceptar el principio de igualdad humana y entablar negociaciones serias con los verdaderos dirigentes africanos que conduzcan al proceso de abolición del apartheid.

La realidad es que Sudáfrica no está interesada en los medios pacíficos para resolver el problema; no está interesada en la convivencia pacífica de todas las razas de Sudáfrica; está interesada solamente en la defensa del apartheid. Con este objeto adopta una política de terrorismo. Mata indiscriminadamente a sus propios ciudadanos.

La paciencia del más paciente termina por agotarse; lo mismo ocurre con la paciencia del pueblo oprimido de Sudáfrica. Este decidió pagar con su sangre el respeto a su dignidad humana. Demasiado a menudo la resistencia es espontánea, como expresión de la desesperación que sienten aquellos que llegaron simplemente al final de su paciencia con la opresión del apartheid.



La escritura está claramente en la pared. Los pueblos oprimidos de Sudáfrica ya no tienen paciencia ni están dispuestos a sufrir en silencio las indignidades e injusticias de su condición. Ya no están dispuestos a soportar el maltrato de la policía y la denegación de los derechos humanos. La lucha por la libertad y por la destrucción del apartheid en Sudáfrica ha llegado a una etapa crítica y corresponde a la comunidad internacional intensificar su apoyo a los combatientes por la libertad a fin de acelerar la desaparición final del apartheid.

La comunidad internacional debe ayudar al pueblo en lucha de Sudáfrica yendo más allá de una simple condena. Para la defensa de la humanidad debemos oponernos al apartheid mediante medidas activas para aislar a Sudáfrica política, cultural y económicamente. Decidimos esto hace muchos años, y ahora debemos intensificar nuestros esfuerzos.\*

---

\* El Sr. Moushoutas (Chipre), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

Sr. ADOUKI (Congo) (interpretación del francés): Mis breves observaciones se referirán esencialmente al tema titulado "Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica".

En el discurso que pronunció el 2 de octubre pasado en esta misma tribuna, el Ministro de Relaciones Exteriores y de Cooperación del Congo, Camarada Antoine Ndinga Oba, tuvo ocasión de saludar al Presidente y a los miembros de la Mesa elegidos para el cuadragésimo período de sesiones de la Asamblea General.

Sr. Presidente: Reitero los saludos cordiales y el merecido homenaje rendido por mi Gobierno a su sagacidad y habilidades, tan apreciados por todos, y deseo cumplir el deber de subrayar la pertinencia y actualidad de este saludo en la etapa actual de nuestros trabajos.

En cambio, no sucede lo mismo en lo tocante al grave y trágico problema del racismo oficial implacablemente aplicado por la Sudáfrica blanca a la situación colonialista que se deriva de ello, al enfrentamiento que prosigue en Namibia y, en definitiva, a la odiosa política de agresión y desestabilización sistemáticas perpetrada por Pretoria contra la soberanía y la integridad territorial de los países de la línea del frente.

Permítaseme reiterar el horror que experimenta mi país, el Congo, sus dirigentes y también su opinión pública ante el apartheid y la represión policiaca aplicada a hierro y fuego por el Gobierno de la minoría blanca de Sudáfrica. Esta tragedia es la degradación de la especie humana, la degradación profunda de las condiciones de existencia de 25 millones de seres humanos, a los que se niega toda dignidad.

Cabe sorprenderse de que los trastornos y las protestas registrados hoy día en Sudáfrica y en todo el mundo y el movimiento general de condena del sistema de apartheid no hayan sido percibidos claramente por la Potencia racista.

Se debe a que el régimen de apartheid no ha cesado de insistir ante la opinión pública, en particular, de los países del bloque occidental, en que la Sudáfrica dirigida por los blancos es, y sigue siendo, un aliado importante de esos países y que, en consecuencia, el statu quo de Sudáfrica sirve notablemente a sus intereses, a la defensa de Occidente y a la lucha contra el comunismo.

Con objeto de no perjudicar a sus propias economías, los países occidentales debieran, pues, eludir adherirse a las sanciones de la comunidad internacional contra la Sudáfrica racista.

Hay que reconocer que la maniobra de campañas sucesivas no deja de ser hábil. Paradójicamente, seducen ante todo a los mejores informados de la tragedia, a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que se proclaman partidarios de la cruzada general en favor de la defensa de los derechos humanos y de la dignidad humana.

Es significativo que mantengan un silencio tan revelador sobre la eliminación del apartheid y sobre la Sudáfrica racista como foco prioritario de la tirantez internacional, en el contexto de un discurso político con visos de espectáculo pronunciado con motivo de la conmemoración solemne del cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas. Esto no ha escapado a ningún observador.

Antes de continuar mis comentarios, desearía rendir un tributo a la memoria de los miles de personas y mártires caídos, incluso este año, como consecuencia de la estúpida locura asesina de los racistas de Pretoria. Benjamín Moloïse fue ejecutado el 22 de octubre pasado pese a la reprobación universal y se encuentra entre aquellos a cuya memoria rinde homenaje mi delegación.

En este año que celebra el cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas, nos enfrentamos a un dilema: o bien hacemos honor a los objetivos profesados por la Carta y detallados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, o dejamos que se perpetúen en Sudáfrica las huellas de ideologías y prácticas condenadas por la conciencia humana.

Sean cuales fueren los disfraces que se ponen o las sutilezas semánticas que utilizan - desarrollo separado, por ejemplo -, el racismo y el nazismo llevan a un mismo y único postulado, es decir, al odio y al desprecio del hombre por sus semejantes. Y cuando este desprecio desborda los ámbitos del individuo para llegar a las instituciones estatales e inspirar fundamentalmente toda política nacional, interna o externa, la situación es susceptible de quebrantar la paz y la seguridad internacionales.

Empero, en Sudáfrica el peligro parece haberse instalado sólidamente en todas partes, comenzando por la manera como la minoría blanca racista considera a los negros, a los pueblos de color, en base a sus anticuadas convicciones delirantes.

Sencillamente por la medida en que no se identifica con el negro ni con ninguna otra raza, el blanco racista sudafricano, al igual que su émulo nazi, adjudica al que no corresponde a su propia imagen y a sus propios prejuicios todo tipo de delirios alucinatorios semejantes a los fenómenos estudiados por Frantz Fanon, Jacques Lacan y otros importantes intelectuales.

La agresividad imaginaria que atribuyen a los negros justifica a los ojos del racista blanco todo tipo de exacciones. El resultado de ello en la actualidad es la transformación lenta, pero segura, de un pueblo pacífico y generoso, el pueblo sudafricano, en una inmensa fuerza violenta que, sin duda alguna, se sacude el yugo de las leyes inicuas y de la práctica metódicamente afinada del sistema de apartheid.

Las agresiones contra la integridad territorial y soberanía de los Estados vecinos de Sudáfrica es resultado de una política deliberada y constituye la consecuencia natural de la situación interna de arbitraria y estúpida negación a los negros de sus derechos fundamentales y su dignidad humana.

El régimen de Pretoria, movido por la mala fe más abyecta, ha demostrado que no se puede creer en él y se ha descalificado ante los ojos de la opinión internacional al violar los acuerdos concertados en negociaciones libres como las que llevaron a la aprobación de la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad sobre el proceso de independencia de Namibia.

La ayuda y el apoyo masivo de Pretoria a las fuerzas del mal en Angola y Mozambique violan descaradamente los compromisos internacionales reconocidos. El Gobierno de Pretoria no solamente persiste en la ocupación ilegal de Namibia, sino que ha reforzado su presencia militar en el territorio y su administración racista, transformándolo en cabeza de puente para sus ataques premeditados contra la República Popular de Angola.

El terrorismo de Estado y la violación reiterada de la soberanía de Angola, Lesotho, Mozambique y Botswana provocan daños considerables. El régimen racista se niega a reconocerlo y a pagar una reparación a los Estados víctimas. Esa actitud le hará ganar a Sudáfrica la enemistad y la condena unánime de la comunidad internacional.

En este año del cuadragésimo aniversario deberían utilizarse cabalmente las prerrogativas relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que tiene la Organización. Este es un legítimo deseo de los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras de Sudáfrica del flagelo de la guerra.

Nuestra Organización no carece de méritos; su Comité Especial contra el Apartheid despliega grandes esfuerzos para sensibilizar a la opinión pública internacional, por lo cual deseamos felicitar a su Presidente, nuestro colega el Embajador Joseph Garba, de Nigeria.

Mi delegación comparte con muchas otras la opinión conforme a la cual las Naciones Unidas, sobre la base de las disposiciones del Capítulo VII de la Carta, debe imponer al régimen de apartheid sanciones obligatorias a que este país se hace acreedor por su conducta incompatible con las normas y principios defendidos en este recinto.

Sin embargo, sabemos que esa determinación de lograr que se apliquen las disposiciones del Capítulo VII de la Carta depende esencialmente de Gobiernos cuyo número es limitado pero que son extrañamente herméticos a los sentimientos y al mensaje claro expresado por el pueblo de Sudáfrica en lucha.

¿En nombre de qué moral sería sano y legítimo declarar la guerra a Nicaragua y negarse, al mismo tiempo, a toda acción contra el régimen de Pretoria?

El pueblo de Sudáfrica no se ha dejado engañar por los intentos de reformar el apartheid, lo que desea es la erradicación y el desmantelamiento de ese odioso sistema.

Dado que hoy se trata de una lucha en favor del hombre y de su dignidad para ayudarlo a crear una Sudáfrica nueva, la comunidad internacional debe adoptar resueltamente acciones concretas y permanentes. La Convención internacional contra el apartheid en los deportes, por ejemplo, que el Comité ad hoc, al que mi país pertenece, acaba de elaborar, será al respecto, una vez adoptada, un elemento de combate especialmente útil en manos de la juventud internacional. Mi delegación espera que esa Convención cuente con un apoyo masivo.

El otorgamiento de dos premios Nóbel de la Paz en menos de 20 años a eminentes figuras sudafricanas constituye, junto al combate heroico que libra el African National Congress, fuente de inspiración para millones de hombres, mujeres y niños que, en su mayor parte indefensos, muestran cotidianamente que para ellos la libertad no tiene precio. Asimismo, tras 25 años de prisión, Nelson Mandela propone el mismo mensaje.

Por su parte, mi país el 11 de octubre último, celebrando el Día Internacional de Solidaridad con los presos políticos de Sudáfrica, ha lanzado una nueva campaña de prensa. Las peticiones por la liberación inmediata e incondicional de Nelson Mandela y de todos los presos políticos opositores del apartheid deben enviarse al Comité Especial anti-apartheid de la República Popular del Congo, Casilla de Correos 2034, Brazzaville, Congo.

Ya es hora de que el poder racista de Pretoria deje de desarrollar la peor estrategia en el rincón meridional del Africa.

Sra. de BARISH (Costa Rica): El debate alrededor de este tema 35 sobre la Política de Apartheid de Sudáfrica toca un problema de larga data en el programa de la Asamblea General. Posiblemente es uno de los asuntos más debatidos en todos sus aspectos y en diferentes foros de las Naciones Unidas, además de la Asamblea General y el Comité Especial contra el Apartheid, del que Costa Rica tuvo el honor de ser miembro, durante un lapso de siete años en que ejerció la Vicepresidencia y la Presidencia, alternativamente.

Como se ha manifestado en múltiples oportunidades, esta odiosa política estatal codificada y sistematizada fue declarada un "crimen contra la humanidad" por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Para llevar a cabo tal sistematización el régimen de Pretoria ha venido promulgando a través de los años leyes y disposiciones que sirven tal propósito, entre las que se identifican y aplican con mayor énfasis el Group Areas Act, la ley de control de entrada y de circulación, el decreto de educación bantú, el sistema de asentamientos y territorios patrios o bantustanes, cuyo único propósito es el de privar a los sudafricanos negros de todo derecho y de explotar su trabajo inicua y cruelmente, de aplastar con mano férrea la lucha del pueblo oprimido por sus derechos y su libertad.

Para llevar a cabo esta represión el régimen sudafricano del apartheid ha recurrido a declarar el estado de emergencia y emplazar fuerzas armadas en los pueblos sudafricanos de todo el territorio. Cientos de personas han muerto y miles han sufrido heridas graves, entre ellos muchos niños. Miles de dirigentes del pueblo han sido puestos en prisión y la evidencia de torturas a los detenidos, según el informe del Comité Especial, como lo indicó aquí su relator, el Sr. Kumar Mitra, es abrumadora.

Antes de sucederse estos últimos acontecimientos tan graves existía una esperanzadora expectativa acerca de las declaraciones del Presidente Botha sobre lo que se creía iba a ser el anuncio de un cambio real y efectivo de su política, dirigido al reconocimiento de los derechos inalienables de la mayoría negra en Sudáfrica. Tales declaraciones dejaron un sentimiento de frustración y desaliento, no sólo entre los sudafricanos oprimidos, o sea la mayoría negra, sino en toda la comunidad mundial, como se ha escuchado ampliamente en esta sala. El gobernante sudafricano no dejó la menor duda sobre la decisión de su Gobierno de mantener todos los elementos esenciales del régimen de apartheid, su negación a reconocer la igualdad del valor de la persona humana y su negación de los legítimos derechos políticos de la población negra mayoritaria. Se ha negado rotundamente la merecida libertad incondicional al luchador por la libertad Nelson Mandela, a pesar de las instancias provenientes de todos los rincones del mundo, de distinguidas personalidades, así como Jefes de Estado y también de Su Santidad el Papa Juan Pablo II, de profesores, filósofos, escritores, estudiantes. Se ha encarcelado y ejecutado aun a otros prisioneros políticos, entre ellos, al poeta Benjamin Moloise, haciendo caso omiso de las súplicas de todos los sectores de la sociedad para que se diera un acto de clemencia.



Y, a propósito de esta negación total de los derechos humanos fundamentales, es apropiado recordar aquí lo que el Secretario General, en su importante declaración del 24 de octubre pasado dijo ante esta Asamblea:

"Una característica sustancial de la nueva ética generada por las Naciones Unidas es el interés internacional en la promoción de los derechos humanos. Es necesario poner fin a las violaciones de derechos humanos que ocurren en varias sociedades y, especialmente, a la situación singular y aborrecible del apartheid, objeto de la condena universal, en la que el propio Estado organiza la discriminación racial. La situación imperante y la experiencia revelan claramente que cuando se violan los derechos humanos, estalla una resistencia, y si a ésta le responde la violencia, el costo político y económico puede resultar insoportable. Sólo una vigorosa presión de la comunidad internacional podrá ayudar a resolver esta situación, pues demostrará convincentemente cuán importantes son para la comunidad internacional los propósitos enunciados por las Naciones Unidas en el Artículo 1 de la Carta." (A/40/PV.49, pág. 8)

No deberían olvidar los dirigentes sudafricanos del apartheid que siendo Sudáfrica uno de los miembros fundadores y signatarios de la Carta de las Naciones Unidas está jurídica y moralmente obligada a acatar y sostener esos principios que son la razón de ser de la Organización mundial. Por esa razón solamente, además de la presión de la opinión pública mundial y la reacción del pueblo oprimido de la mayoría negra, el Gobierno sudafricano debería, antes de que la situación se torne aún más crítica, emprender una verdadera reforma a su sistema abominable de discriminación racial estatal y eliminar las leyes oprobiosas que le dan asidero legalista. Estas fueron enumeradas en el discurso pronunciado al iniciarse la consideración del tema por el Excmo. Mayor General Joseph N. Garba, Presidente del Comité Especial contra el Apartheid y del Grupo de Estados Africanos de las Naciones Unidas. Ellas son:

"Abolición de la Ley de zonas de grupo, total abolición del sistema de control de entradas y leyes de pases, la finalización de las mudanzas forzadas; libertad de todos los presos políticos, fin del sistema de clasificación racial en el que cada sudafricano sea asignado por el Estado a una de las cuatro categorías raciales; abolición de los bantustanes y del sistema de educación bantú; y, lo que es más importante, un voto por persona, en una sociedad unida democrática y no racial." (A/40/PV.51, pág. 17)

Nosotros agregaríamos "y libre".

Por parte de Costa Rica, cuya devoción al sistema democrático participativo y representativo - donde toda persona debe y puede ejercer sus derechos humanos inalienables, su independencia y su libertad - es la realidad de nuestra vida institucional, expresamos el deseo ferviente de que por fin entre la razón en las mentes y los corazones de los gobernantes de Sudáfrica y se decidan a dar ese paso decisivo y tan importante, pero no tan difícil como se imaginan. Ese paso podrá ser la diferencia entre la injusticia y la violencia que imperan ahora con toda su secuela de muerte y sufrimientos para todos y la cordura, la solución pacífica del problema que desde sus comienzos ha mantenido la atención de las Naciones Unidas, la eliminación para siempre de esa terrible lacra social y vergüenza de la sociedad sudafricana que es el apartheid. Deseamos expresar la viva esperanza de que ello significaría el fin del nefasto apartheid también para Namibia. Ello debería traer, asimismo, la independencia y la libertad a ese sufrido pueblo que sigue bajo la opresión colonial e ilegal de Sudáfrica. Que cese la hostilidad y la violencia contra los Estados vecinos de la línea del frente y venga la paz a esa convulsionada región de Africa. Si eso se pudiera lograr y queremos manifestar nuestra esperanza de que así será, todo lo demás vendría por añadidura, como dice la Biblia.

Sr. JARRETT (Liberia) (interpretación del inglés): Una vez más la Asamblea debate la política de apartheid aplicada por el Gobierno de Sudáfrica, que es una continua fuente de tensión en la zona y una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Bajo este sistema de discriminación racial, 4.500.000 blancos continúan perpetrando sus prácticas represivas contra 23 millones de negros, sin respetar sus derechos humanos básicos. La población indígena está desarraigada y proscripta, habiéndose convertido en ciudadana de regímenes títeres en territorios patrios negros ajenos. Muchos trabajadores negros se ven obligados a vivir separados de sus familias para evitar morir de hambre y porque no pueden vivir libremente en las zonas donde hay trabajo disponible. Las esposas a las que no se permite vivir con sus maridos, empleadas en las llamadas zonas blancas, se ven forzadas a quebrantar la ley o a ser infieles.

La población negra, condenada a la llamada ciudadanía de los bantustanes está privada de su legítima ciudadanía en Sudáfrica y de su derecho a voto en la tierra de su nacimiento. Son deportados como extranjeros del país cuya nacionalidad tienen por derecho de nacimiento; son acosados por la policía sudafricana como "inmigrantes ilegales" y se les niega el derecho a participar en la vida política de su país. Esos negros que están confinados a vivir en lo que se ha designado como zonas blancas continúan sufriendo bajo las diversas formas de leyes raciales y represivas, incluyendo la famosa ley de pases. En respuesta a la enconada resistencia del pueblo sudafricano contra estas injusticias las autoridades del régimen racista lanzaron gran número de soldados para reprimir a manifestantes indefensos y en esa acción fueron muertas o heridas cientos de personas; muchos dirigentes de organizaciones populares y miles de personas inocentes también fueron arrestadas. Las autoridades sudafricanas pensaron que podían extinguir las llamas de la lucha popular mediante la muerte y el encarcelamiento, pero allí donde hubo represión también hubo la condigna resistencia y cuanto mayor es la opresión más dura es la resistencia.

Consideramos que es importante reiterar estos incidentes que son corrientes pero tristes, especialmente porque Sudáfrica ha promovido una vez más reformas artificiales y de naturaleza ficticia, deliberadamente, para despistar a la gente de buena fe que ha denunciado al racismo en su propio ambiente y en otros lugares.

Aprovechamos esta oportunidad para advertir a la comunidad internacional que no se deje engatusar por la andanada de propaganda sudafricana, tal como la que anunció recientemente el Presidente Botha. Debemos estar alertas para no tomar reformas fraudulentas como pasos en la dirección correcta. En los años recientes las autoridades sudafricanas han intensificado sus acostumbradas maniobras de imposturas políticas y de represión militar con el fin de mantener y fortalecer su dominio racista y para embaucar a la opinión pública internacional. Han dado amplia publicidad a su disposición de mejorar las relaciones raciales mediante reformas constitucionales. El objeto de esa maniobra fue continuar detentando todos los puestos importantes en las garras firmes de un puñado de racistas blancos junto a una poca gente de color y asiáticos para mantener las apariencias. Las reformas en Sudáfrica tienen como objetivo principal perpetuar y legitimar el sistema del apartheid.

La política inhumana del régimen de Pretoria se aplica no sólo en Sudáfrica sino que se ha extendido a Namibia, un territorio ocupado ilegalmente por ese régimen. Además, la Pretoria racista se dedica constantemente al terrorismo de Estado con el fin de establecer su hegemonía en el Africa meridional. Con este fin recurre a amenazas, a chantajes y a la utilización de actividades subversivas y terroristas en gran escala. En el curso de este año hemos presenciado corrientemente casos de violaciones de fronteras y actos de agresión cometidos por Sudáfrica contra sus países vecinos: Angola, Botswana y Lesotho.

El apartheid es contrario a los principios morales y políticos que constituyen la base de nuestra sociedad. Su eliminación es la única perspectiva que puede llevar a la paz en el Africa meridional. Ni los arrestos, ni las detenciones arbitrarias, ni la política de aislamiento forzoso, ni la violencia ejercida por quienes deben aplicar la ley y el orden pueden ser una solución. La solución estriba solamente en el establecimiento de una sociedad justa y democrática basada en la igualdad de derechos civiles y políticos y en un igual respeto por la dignidad del ser humano.

La declaración del estado de sitio el 20 de julio de 1985 constituyó una maniobra para permitir que el Gobierno racista minoritario de Pretoria continuara su represión desencadenada. Al conceder poderes extraordinarios al ejército y a la policía, al multiplicar los arrestos arbitrarios y al dar órdenes de hacer fuego a manifestantes pacíficos el indigno régimen de Sudáfrica intensificó su aborrecible política y desafió a la comunidad internacional.

El sistema de apartheid del Sr. Botha no puede ser reformado; en cambio, debe ser erradicado definitivamente. Aquellos que están junto a nosotros en nuestra condena al apartheid y que al mismo tiempo fortalecen su resistencia al pedido de aislar a Sudáfrica sólo llevan a los negros a creer en las palabras del Obispo Desmond Tutu cuando dijo que:

"... parecería que el occidente dijera que los negros son prescindibles y que cuando llegue la hora de la verdad nadie podrá confiar en que cuando los blancos se reúnan digan que la sangre es más gruesa que el agua."

La historia demuestra que, en última instancia, una nación no puede vivir siendo mitad esclava y mitad libre y que las fuerzas de la libertad finalmente triunfarán; y, lo más importante de todo: la naturaleza humana es tal que los seres humanos continuarán luchando por su dignidad y libertad hasta que alcancen la

victoria o perezcan. Sudáfrica es incapaz de matar a todos los oponentes al apartheid, incluyendo a los que viven dentro del propio país. Los acontecimientos que ocurrieron este año en ese país nos recuerdan que todos estamos involucrados en la lucha contra el apartheid y que no es posible ser neutrales: o luchamos contra él o le estaremos dando tácitamente nuestro apoyo. El color de nuestra piel o nuestra nacionalidad son irrelevantes si se requiere escoger a favor o en contra de la eliminación del mal del racismo.

Con estos antecedentes, el Gobierno de Liberia considera que tiene mucha importancia que se aplique rápidamente la resolución de la Asamblea General 37/69 C, de 9 de diciembre de 1982. La resolución, entre otras cosas, reafirma el convencimiento de la Asamblea General de que:

"las sanciones amplias y obligatorias establecidas por el Consejo de Seguridad con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, ... constituyen el medio más adecuado y eficaz que tiene la comunidad internacional para ayudar a la lucha legítima del pueblo oprimido de Sudáfrica ..."

Sin embargo, es de lamentar que las resoluciones y decisiones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General en relación con la cuestión de la política del apartheid, no hayan tenido efecto alguno a causa de la creciente colaboración entre Sudáfrica y algunos Estados occidentales Miembros de la Organización. La asistencia política, militar, tecnológica, económica y financiera que prestan al régimen racista lo ha alentado para continuar desafiando a las Naciones Unidas.

La continuación de las prácticas ilícitas del régimen racista de Sudáfrica y la situación que prevalece en el Africa meridional hacen necesario que las Naciones Unidas reafirmen lo que habían pedido en sus anteriores resoluciones y decisiones pertinentes y busquen los medios y las vías para conseguir que se apliquen. Es responsabilidad de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas hacer todo lo posible para poner fin a la política inhumana del apartheid, que ha sido condenada universalmente como delito de lesa humanidad.

La delegación de Liberia encomia los esfuerzos del Comité Especial contra el Apartheid y respalda firmemente las conclusiones y recomendaciones, así como el programa de acción propuesto que figuran en el informe que presentó a la Asamblea.

El Gobierno de Liberia sigue comprometido, como siempre, a la erradicación total del apartheid y a la creación de una sociedad democrática sobre la base del gobierno de la mayoría en Sudáfrica. Reafirmamos nuestro apoyo a los combatientes por la libertad y al pueblo oprimido de Sudáfrica, que lleva a cabo una lucha justa y valerosa contra el régimen racista de Pretoria.

Sr. KURODA (Japón) (interpretación del inglés): Es ciertamente un hecho deplorable que se siga practicando la discriminación racial en muchos lugares del mundo. Es un problema persistente y muy arraigado, tan antiguo como la historia de

la humanidad. Sin embargo, no tenemos que abandonar nuestra lucha, sino más bien tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para erradicar el racismo allí dondequiera que se practique.

Hoy, el ejemplo más patente de esta práctica perniciosa es, claro está, el apartheid de Sudáfrica, que no es sino un sistema institucionalizado de discriminación racial. Es natural que nuestros esfuerzos para conseguir la igualdad racial se centren principalmente sobre ese país.

En los últimos meses hemos presenciado un grave deterioro de la situación en Sudáfrica. La declaración de un estado de emergencia solamente ha añadido combustible a la violencia ya existente. El pueblo negro se está alzando en una expresión de insatisfacción y frustración derivadas de la presión a que es sometido. Los intentos del Gobierno sudafricano para suprimir por la fuerza la inestabilidad han producido, trágicamente, centenares de bajas. Hemos de darnos cuenta, sin embargo, que los alzamientos no terminarán hasta que se haya abolido el apartheid de una vez por todas. Es, pues, imperativo que el Gobierno de Sudáfrica abandone sus intentos fútiles de apagar el malestar por la fuerza y que tome medidas auténticas para resolver las dificultades en su raíz.

El Gobierno del Japón respeta plenamente las diversas resoluciones sobre el apartheid y desde hace mucho tiempo ha venido tomando todas las medidas apropiadas para convencer al Gobierno de Sudáfrica que debe de poner fin a su política de apartheid. En realidad, las medidas del Japón están entre las más estrictas que han tomado las democracias industrializadas.

Japón no mantiene relaciones diplomáticas con Sudáfrica. No es necesario decir que no reconoce los llamados Estados bantustanes.

Japón no solamente observa estrictamente el embargo de armas contra Sudáfrica tal como fuera impuesto por la resolución 418 (1977) del Consejo de Seguridad, sino que tampoco presta ningún tipo de cooperación militar a ese país.

No existe ninguna cooperación entre Japón y Sudáfrica en materia de desarrollo nuclear, ni aun en la utilización pacífica de la energía nuclear. Como el único país del mundo que ha sufrido devastación por armas nucleares, Japón es especialmente estricto en su observancia de esta política.

En materia económica, Japón prohíbe la inversión directa en Sudáfrica a los nacionales japoneses o sociedades bajo su jurisdicción. Además, ha pedido a los bancos de intercambio exterior japoneses y a sus filiales en el exterior que se abstengan de conceder empréstitos a Sudáfrica.

También se desalientan los contactos culturales, educacionales y deportivos con Sudáfrica. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón no concede visados a los sudafricanos que piden permiso para entrar a nuestro país con la finalidad de intercambios culturales, educacionales o deportivos. El Ministerio hace todo lo posible para asegurarse de que esta política se aplique estrictamente.

Desde hace mucho tiempo Japón ha venido haciendo contribuciones sustanciales a los fondos y programas de las Naciones Unidas que proporcionan un apoyo humanitario y educacional al pueblo oprimido de Sudáfrica y continuará su ayuda humanitaria en el futuro.

El 9 de octubre de 1985, en vista de los recientes acontecimientos en Sudáfrica, el Gobierno del Japón anunció su decisión de tomar medidas adicionales contra Sudáfrica, además de las muy estrictas que ya se hallan en vigor. Estas medidas incluyen: una aplicación más estricta de las leyes y reglamentos existentes para prohibir la exportación de computadoras que puedan ayudar a las actividades de organizaciones tales como las fuerzas armadas y la policía, que son las encargadas de aplicar el apartheid; esfuerzos para instar a todos los interesados a que cooperen deteniendo voluntariamente toda importación de krugerrands y otras monedas de oro provenientes de Sudáfrica; esfuerzos para incrementar la cooperación del Japón en la esfera del desarrollo de los recursos humanos en los Estados del Africa meridional, a fin de contribuir a mejorar la condición de los negros en la región.

Al anunciar estas medidas, el Gobierno del Japón ha renovado su oposición al apartheid en Sudáfrica y ha reiterado su esperanza de que pronto se logre una Sudáfrica sin apartheid.



Acosada por los disturbios constantes y por toda una serie de desórdenes y una represión que ha producido más de 700 muertos el año pasado, la situación en Sudáfrica es crítica. Ante tal situación el Gobierno del Japón cree que el de Sudáfrica debe declarar clara e inequívocamente que tiene la intención de abolir el apartheid y celebrar conversaciones incondicionales con los dirigentes de la comunidad negra sobre medidas específicas para llegar a ese fin. El Japón pide a todos los involucrados en el problema que aúnen sus energías en la búsqueda de una solución no violenta.

El Japón espera sinceramente que el Gobierno de Sudáfrica escuche la voz de la comunidad internacional y tome medidas para asegurar que el sistema de apartheid sea abolido pacíficamente en un futuro cercano.

Finalmente, quiero sumarme a los anteriores oradores que han expresado el agradecimiento sincero de sus Gobiernos, y el mío en este caso, por los esfuerzos que hacen el Comité Especial contra el Apartheid y el Centro contra el Apartheid. El Gobierno del Japón desea asegurar a estos órganos que pueden contar con su plena cooperación en su noble lucha contra el apartheid.

Sr. SARRE (Senegal) (interpretación del francés): Este debate acerca de la política de apartheid del Gobierno sudafricano, demuestra una vez más la profunda preocupación de la comunidad internacional sobre esta cuestión que constituye - necesario es reconocerlo - una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

Como ustedes habrán observado, los distinguidos Reyes, Presidentes y Jefes de Gobierno que han intervenido aquí hace menos de una semana, todos sin excepción expresaron su resentimiento por esta cuestión y renovaron su compromiso de trabajar para conseguir su erradicación. Luchar por la erradicación del apartheid es luchar por el respeto y la promoción de los derechos humanos. Igualmente, es la lucha por el triunfo de una sociedad democrática multirracial en Sudáfrica. Es, finalmente, luchar por que llegue la paz al Africa meridional. En esta lucha siguiendo las formas apropiadas, debemos actuar rápidamente ya que la situación empeora de día en día en Sudáfrica.

El informe del Comité Especial contra el Apartheid publicado bajo la signatura A/40/22, confirma la situación dramática que continúa soportando el valiente pueblo sudafricano ante la aceleración de la represión salvaje de Pretoria.

Frente a la resistencia heroica y resuelta del pueblo de Sudáfrica, el régimen de Pretoria ha decretado, como sabemos, desde el 21 de julio de 1985, el estado

de urgencia, reforzando así su sistema represivo y opresivo contra la mayoría negra de Sudáfrica, cuyo solo delito es reivindicar su derecho elemental a la dignidad, a la libertad y a la vida.

Sin embargo, nos satisface comprobar que la comunidad internacional se ha movilizado contra la escalada de la arbitrariedad en Sudáfrica, del mismo modo que se moviliza para eliminar el apartheid. Igualmente, el Consejo de Seguridad, traduciendo su indignación y su reprobación generales, ha condenado el establecimiento del estado de emergencia y en su resolución 569 (1985) del 26 de julio, instó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que no lo hayan hecho todavía, a que prevean la adopción voluntaria de medidas apropiadas contra Sudáfrica. Al hacerlo, esta misma comunidad internacional ha incrementado cualitativa y cuantitativamente sus presiones para que se apliquen sanciones contra Pretoria.

Hemos de recordar que la única respuesta del régimen de Pretoria ha sido, como siempre, reforzar su intransigencia ciega en el interior y la desestabilización, la agresión y la invasión a los países con los que mantiene relaciones de buena vecindad, en el exterior, en sus relaciones con los países limítrofes, desdeñando el principio sacrosanto de la soberanía y la integridad territorial de los Estados y utilizando como base el Territorio internacional de Namibia. De la misma manera, al instalar en este último Territorio, por intermedio de una pretendida conferencia multipartidaria un denominado Gobierno interino que la comunidad internacional por unanimidad considera como ilegal, nulo y sin valor, el régimen sudafricano demuestra claramente su voluntad de continuar ocupando ilegalmente Namibia pese a las numerosas decisiones y resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

Por todo ello ya no cabe duda de que al decidir permanecer sorda a todos los llamamientos de la comunidad internacional, a todo apercibimiento del Consejo de Seguridad - órgano de las Naciones Unidas encargado principalmente del mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales en el mundo entero, incluidas las Potencias que podrían tener todavía cierta esperanza de que los cambios constitucionales introducidos en el sistema del apartheid pudieran modificarlo -, Pretoria ha decidido desafiar a la totalidad de la comunidad internacional y a la conciencia del mundo, negándose obstinadamente a respetar los derechos fundamentales del hombre y a aplicar la regla de la mayoría.

Esta política testaruda y de desafío a la razón y al derecho que viene después de las sanciones limitadas adoptadas por los Estados Unidos de América, el Canadá,

Francia y los países de la Comunidad Europea así como por el Japón demuestran claramente la necesidad de acelerar los esfuerzos concertados y coherentes de la comunidad internacional con miras a erradicar por entero el sistema del apartheid mediante la aplicación de sanciones económicas globales y obligatorias, que son las únicas capaces de hacer que los paladines del apartheid vuelvan a la razón antes de que la parte meridional del continente africano se convierta en un brasero generalizado. A este respecto, conviene recordar que el Consejo de Seguridad tiene la obligación de asumir plena y enteramente las responsabilidades que le acuerda la Carta de las Naciones Unidas - cuyo cuadragésimo aniversario acabamos justamente de conmemorar con todo fausto -, y de tomar sanciones económicas globales y obligatorias contra Sudáfrica en virtud del Capítulo VII de la Carta, porque ahí se juega la credibilidad y el futuro de las Naciones Unidas que todos consideramos unánimemente como útiles e indispensables.

Dentro de este marco me complace recordar la propuesta formulada desde lo alto de esta tribuna durante las ceremonias conmemorativas del cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas, en nombre de Africa, por Su Excelencia el Sr. Abdou Diouf, Presidente de la República del Senegal y Presidente en ejercicio de la Organización de la Unidad Africana, (OUA), para que se celebre, a más tardar en el mes de junio de 1986, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, una conferencia internacional sobre sanciones contra Sudáfrica.

Este es el momento más oportuno de tomar las decisiones del caso. En este mismo discurso, el Presidente Diouf, dijo:

"Es preciso que extraigamos el sentido de la historia antes de que sea demasiado tarde. La derrota de los detentadores del apartheid es actualmente segura. Falta fijar el plazo. La verdadera cuestión es cómo acortarlo."

(A/40/PV.42, pág. 25)

El pueblo mártir de Sudáfrica ha sufrido demasiado como consecuencia de una lucha que le impone el sistema abominable de apartheid, cuando lo único que pide es vivir en una sociedad multirracial, igualitaria y democrática que garantice la libertad para todos. Si la sabiduría todavía puede prevalecer, es necesario preparar un verdadero clima de concertación que requiere, en primer lugar, la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos sudafricanos, incluyendo a Nelson Mandela, el levantamiento del estado de emergencia, la derogación de la legislación represiva contra las formaciones políticas y sociales anti-apartheid, especialmente, así como la iniciación de negociaciones francas y leales entre las autoridades de Pretoria y los representantes legítimos de los movimientos de liberación y de las fuerzas patrióticas sudafricanas.

Las recomendaciones del Comité Especial contra el Apartheid deben merecer toda nuestra atención y obtener nuestro apoyo en favor de una acción coordinada y concertada en el plano internacional, con miras a erradicar esta vergüenza de nuestro siglo que es el apartheid, mediante un movimiento concreto y enérgico en el marco de las instancias de las Naciones Unidas - y especialmente del Consejo de Seguridad - y por un deber real y concreto de solidaridad de la comunidad internacional con respecto a los combatientes de la SWAPO, el ANC, el PAC y los países de la línea del frente.

Las Naciones Unidas, en las que los gobiernos y pueblos del Africa continúan depositando una esperanza inmensa, tienen el deber de dar una respuesta definitiva a las aspiraciones legítimas de los pueblos africanos y del mundo entero, poniendo fin a los trastornos y desgarramientos sangrientos que sacuden a la población negra sudafricana, lo que haría progresar la causa de los derechos humanos y de la paz en el mundo, objetivos fundamentales de la Carta de San Francisco.

Esta exigencia va dirigida a todos los sectores y a todas las formas de lucha contra el apartheid. Por otra parte, conviene en este marco que nos declaremos satisfechos por la circunstancia de que el Comité Especial haya podido elaborar una convención internacional contra el apartheid en los deportes y producido un instrumento jurídico cuya firma, ratificación y aplicación han de servir sin duda alguna a la noble causa de la lucha contra el apartheid que, como se dijo, es una lucha por los derechos humanos y por la dignidad humana.

Sr. WOOLCOTT (Australia) (interpretación del inglés): La tormenta que se cierne sobre Sudáfrica desde hace muchos años está empezando a desencadenarse y podría provocar una tragedia humana de magnitud impredecible si el Gobierno sudafricano no acepta la necesidad de un cambio rápido y fundamental.

Además del peligro de guerra nuclear y la necesidad urgente de una limitación de armamentos y un desarme eficaces, el centro principal de la preocupación internacional, revelado en las declaraciones formuladas en este cuadragésimo período conmemorativo de sesiones de la Asamblea General, se encuentra en los problemas vinculados al Africa meridional: el apartheid, la constante obstrucción por Sudáfrica de la independencia de Namibia y su política de desestabilización de sus vecinos; pero especialmente el apartheid, que es la raíz de todos estos problemas.

A veces, en su historia, la humanidad ha enfrentado situaciones intrínsecamente malignas, cuya gravedad ha sido tal que todos los gobiernos debieron continuar esforzándose por su erradicación, hasta que esta fue lograda. El apartheid es uno de esos males.

Hace muchos años, una famosa figura de la historia antigua de Sudáfrica, Jan Smuts, escribió: "La vieja Africa ha pasado y las razas blancas deben enfrentar la nueva situación, que ellas mismas han creado". Es triste e irónico a la vez que las advertencias que tantas personas y las Naciones Unidas han formulado constantemente a Sudáfrica, durante muchos años, no hayan sido escuchadas. Si la minoría blanca prefiere intentar mantener indefinidamente su situación política y económica sumamente privilegiada, que está basada en la negación de los derechos fundamentales y se aplica mediante medidas coactivas y a menudo brutales, contra la ira legítima de la mayoría desaventajada y privada de libertad, entonces sólo podrá continuar el derramamiento de sangre en una escala cada vez mayor.

No debe ser reiterativo y caer en una condena ritual del apartheid. Pero el apartheid es la negación de todo aquello a favor de lo cual están las Naciones Unidas. Es una traición a los ideales de los fundadores de las Naciones Unidas y un rechazo de los derechos humanos básicos de la humanidad, tal como están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Desde nuestro último debate sobre este tema del programa en la Asamblea General, en 1984, se han producido cambios importantes tanto dentro de Sudáfrica como en la percepción internacional y en la respuesta de la comunidad internacional ante la situación.

Dentro de Sudáfrica, el Gobierno ha prometido cambios significativos pero ha hecho muy poco. Ha extendido los derechos políticos limitados a nivel nacional a los tres millones y medio de personas de Sudáfrica que están clasificadas como personas de color e indios, pero ha dado lamentablemente poco a la población negra. Ha derogado algunas de las disposiciones más aborrecibles del despreciable apartheid.

¿Pero qué significan estos cambios? Son, en su mayor parte, superficiales e inadecuados. Siguen imperando la desigualdad y la injusticia en una medida que los sudafricanos negros encuentran intolerable. Los opositores al Gobierno siguen siendo detenidos sin cargos. El Gobierno continúa dedicado a la puesta en práctica de la Group Areas Act y otras leyes que mantienen la separación oficial de las razas. La educación estatal sigue estando racialmente segregada. El Gobierno ha asesinado, encarcelado o arrojado al exilio a casi todos los dirigentes negros, no dejando sudafricanos negros dignos de crédito o representativos con los cuales se pueda negociar.

La causa de tales cambios no ha sido una conversión ideológica sino las presiones económicas y políticas. El apartheid es todavía un elemento fundamental de la economía sudafricana, pero la presión que se está imponiendo contra ella ha significado que debe mostrar un rostro menos inhumano.

La drástica caída del valor del rand en septiembre de 1985 y los consiguientes problemas que enfrentó el Gobierno sudafricano para reprogramar sus obligaciones de la deuda externa han indicado a los hombres de empresa de Sudáfrica la necesidad de un cambio. De conformidad con ello, varios importantes hombres de negocios adoptaron la medida audaz, pero demorada, de celebrar negociaciones con los dirigentes del African National Congress en Lusaka.

La negativa del Gobierno sudafricano a apoyar la eliminación del sistema de apartheid hace que los sudafricanos negros se aparten de la búsqueda de un cambio pacífico y se encaminen hacia la violencia. El Gobierno sudafricano habla vagamente de un diálogo en foros significativos y abiertos; pero aparentemente no se permitiría que en el programa figuren las cuestiones que deben debatirse. Los únicos que pueden hablar en nombre de los sudafricanos negros se encuentran en sus tumbas, en la cárcel o han huido.

Casi diariamente se nos presentan estadísticas horrendas de violencia creciente en Sudáfrica, con detalles de los muertos, heridos y detenidos. Por televisión, en nuestras propias casas, hemos visto pruebas de la violencia y el derramamiento de sangre en Sudáfrica. Es una ironía que, debido a la censura dentro de Sudáfrica, tengamos una visión más clara de los acontecimientos que muchas personas que viven dentro de ese país.

El Gobierno australiano ha apoyado siempre los esfuerzos de quienes, provenientes de todas las comunidades dentro de Sudáfrica, trabajan por medios pacíficos para poner fin en forma inmediata e incondicional al apartheid. Hemos aplaudido los esfuerzos de hombres como el Obispo Desmond Tutu, que habló ante la Comisión Política Especial hace dos días. Hemos celebrado los esfuerzos de los miembros del United Democratic Front y de organizaciones tales como Black Sash Movement, que trataron de corregir las injusticias dentro de Sudáfrica y han sufrido frecuentemente, en forma personal, en sus actividades. Hemos pedido al Gobierno sudafricano que libere a Nelson Mandela y que inicie un diálogo con los líderes reconocidos de la comunidad negra de Sudáfrica.

Así como apoyamos a los que trabajan adentro, también estamos comprometidos, mediante la acción internacional, a hacer que el Gobierno sudafricano se dé cuenta de su locura. Como dijo el Ministro de Relaciones Exteriores de Australia, Sr. Hayden, en su declaración ante el Consejo de Seguridad, el 26 de septiembre de 1985:

"No queremos ver a Sudáfrica de rodillas. Queremos que tome conciencia de la realidad." (S/PV.2608, pág. 111)

En 1985 se comprobó un aumento notable en el nivel de la presión internacional sobre Sudáfrica, debido a la violencia de la reacción de las autoridades sudafricanas ante el desafío pacífico interno. Esperamos que la comunidad internacional, actuando de consuno y utilizando medidas eficaces, pueda ejercer presión sobre Sudáfrica para lograr un cambio pacífico y positivo. La gama de sanciones propuestas o adoptadas por la comunidad internacional - por ejemplo, la prohibición de las nuevas inversiones y préstamos - le parece propicia al Gobierno australiano, por dos razones. Una es que está demostrando ser eficaces. La otra es que cuenta con apoyo creciente, en especial en algunos países con firmes vinculaciones financieras con Sudáfrica. En ausencia de un embargo obligatorio sobre las nuevas inversiones en ese país, estamos procurando desarrollar una cooperación con otros Estados para que las medidas voluntarias existentes puedan ser más eficaces.

Se ha sostenido que las sanciones económicas nunca han logrado resolver un problema internacional. ¿Cómo se puede decir esto? Ciertamente, la delegación australiana objetaría ese supuesto, aunque más no fuera porque las sanciones económicas generales nunca fueron aplicadas en forma completa y consecuente en ninguna situación internacional anterior.

En Rhodesia del Sur, donde se aplicaron parcialmente las sanciones, fueron una parte importante de las presiones que llevaron a un Zimbabwe independiente. Si esas sanciones se hubiesen aplicado en forma más general y completa, puede sostenerse que la independencia de Zimbabwe se habría acelerado.

El argumento de que las sanciones afectarían en forma adversa a la población negra; que significarían un retroceso con respecto a algunas reformas limitadas que han tenido lugar en Sudáfrica recientemente; que dañarían económicamente a los Estados vecinos, y que no lograrían el objetivo de dismantelar el apartheid, tiene varios puntos débiles. En primer lugar, no lo sabemos. Nunca se probaron las sanciones económicas generales y Sudáfrica ya ha mostrado cierta respuesta a las de carácter limitado que han aplicado varios países, incluyendo a Australia. En segundo término, este argumento pasa por alto el hecho de que la mayoría de los africanos negros, e incluso los dirigentes eclesiásticos de Sudáfrica, reclaman la imposición de sanciones. Tercero, pasan por alto el hecho de que no estamos tratando de una cuestión puramente económica, que puede discutirse en términos de las ventajas o desventajas económicas de imponer sanciones a Sudáfrica. Las sanciones económicas deben contemplarse como parte de una respuesta a lo que no es sólo una cuestión económica, sino un problema masivo, social y humanitario, a saber, el apartheid. Hay ocasiones en que los miembros responsables de la comunidad internacional pueden tener necesidad de adoptar medidas que, sobre la base de una interpretación estrecha y a corto plazo de sus propios intereses económicos, preferirían evitar.

Durante el año 1985 el Gobierno australiano tomó una serie de medidas en relación con las inversiones. Prohibió las nuevas inversiones gubernamentales y de autoridades públicas en Sudáfrica, excepto las necesarias para mantener nuestra representación diplomática y consular en ese país. Prohibió toda nueva inversión directa en Australia, ya sea del Gobierno sudafricano o de sus autoridades. Ha solicitado a todas las instituciones financieras australianas que suspendan los nuevos préstamos a solicitantes de Sudáfrica, ya sea directa o indirectamente. Retiró al Comisionado de Comercio Australiano de Johannesburgo. Retiró diversas



formas de ayuda gubernamental oficial para los australianos que comercian con Sudáfrica. Prohibió la exportación a Sudáfrica de petróleo y productos derivados, material de computadoras y cualquier otro conocido por su uso en las fuerzas de seguridad sudafricanas. Prohibió la importación de Sudáfrica de krugerrands y todas las demás monedas acuñadas allí, así como armas, municiones y vehículos militares. Decretó un embargo sobre todos los tratos gubernamentales con compañías de propiedad mayoritariamente sudafricana, para los contratos de un valor superior a los 20.000 dólares. Decidió evitar la adquisición gubernamental de suministros de fuentes sudafricanas, excepto cuando sean necesarios para mantener la representación diplomática y consular en el Africa meridional, y limitar las ventas de bienes y servicios gubernamentales a Sudáfrica. Está introduciendo un código de conducta para las empresas australianas que operan en Sudáfrica, cuyo objeto es asegurar que no intenten explotar las circunstancias particulares inherentes al apartheid. Por ejemplo, el código propone que no debe haber segregación racial en el lugar de trabajo y que, como ocurre en Australia, debe existir igualdad racial en áreas tales como la contratación, el empleo, los salarios, la formación y la promoción.

Durante el examen de la situación en Sudáfrica y Namibia, realizado con anterioridad, este año, en el Consejo de Seguridad, el Gobierno australiano ha puesto de manifiesto su disposición a apoyar la imposición de sanciones económicas generales para lograr el fin del apartheid.

Australia acoge con satisfacción el hecho de que los Primeros Ministros del Commonwealth adoptaran por unanimidad el Acuerdo del Commonwealth sobre el Africa Meridional, en su reunión reciente de Nassau, Bahamas. Ese Acuerdo pide a las autoridades de Pretoria que declaren que el sistema del apartheid será desmantelado y que se adoptarán medidas concretas y significativas en cumplimiento de ese propósito; que pondrán fin al estado de emergencia vigente; que liberarán inmediata e incondicionalmente a Nelson Mandela y a todas las demás personas encarceladas o detenidas por su oposición al apartheid; que establecerán la libertad política y, concretamente, levantarán la proscripción que rige para el African National Congress (ANC) y otros partidos políticos; y que iniciarán, en el contexto de la suspensión de la violencia por todas las partes, un proceso de diálogo que supere las barreras del color, la política y la religión, con miras a establecer un Gobierno no racial y representativo.

Australia también acogió con satisfacción la decisión de los Jefes de Gobierno del Commonwealth de establecer un pequeño grupo de personas eminentes del Commonwealth para alentar por todos los medios viables la evolución de ese proceso necesario de diálogo y cambio político en Sudáfrica.

El Commonwealth también acordó en Nassau a principios de este mes un programa de acción común que refrenda la aplicación de varias medidas contra Sudáfrica, la mayoría de las cuales Australia ya ha puesto en práctica.

Hay que adoptar inmediatamente varias medidas que incluyen las siguientes: una prohibición de todos los nuevos préstamos gubernamentales al Gobierno de Sudáfrica y sus organismos; la disposición a tomar unilateralmente las medidas que sean posibles para impedir la importación de krugerrands; suspender la financiación de misiones comerciales a Sudáfrica o para la participación en exposiciones y ferias comerciales en Sudáfrica; prohibición de la venta y exportación de equipos de computación que puedan ser utilizados por las fuerzas militares, la policía o las fuerzas de seguridad de Sudáfrica; prohibición de nuevos contratos para la venta y exportación de bienes, materiales y tecnología nucleares a Sudáfrica; prohibición de la venta y exportación de petróleo a Sudáfrica; un embargo estricto y rigurosamente controlado de las importaciones de armas, municiones, vehículos militares y equipo paramilitar desde Sudáfrica; un embargo a toda cooperación militar con Sudáfrica y el desaliento de todos los encuentros culturales y científicos salvo aquellos que contribuyan a poner fin al apartheid o que no desempeñen un papel para promoverlo.

Recomendamos estas medidas recientemente adoptadas por unanimidad en la reunión del Commonwealth, a los Estados Miembros que todavía no las hayan aplicado.

Se acordó, además, que un grupo de Jefes de Gobierno se reuniera para examinar la situación dentro de seis meses y, si a su juicio no se hubiera hecho un progreso suficiente, acordarían estudiar la posibilidad de adoptar nuevas medidas contra Sudáfrica. Nuestra delegación celebró el apoyo dado a este enfoque por el Obispo Desmond Tutu en su declaración de 28 de octubre de 1985 y por otros oradores en este debate.

Para concluir, quiero reiterar que el Gobierno australiano continúa decidido a desempeñar su papel en la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en otros organismos internacionales como el Commonwealth, para contribuir a medidas eficaces que, confiamos, conduzcan a un cambio rápido y pacífico que ponga fin al apartheid.

Sr. ORAMAS OLIVA (Cuba): En el curso del debate del cuadragésimo período de sesiones, de 137 oradores que intervinieron 125 se refirieron de manera inequívoca a la situación existente actualmente en Sudáfrica, lo que testimonia la gran preocupación de la comunidad internacional por el cruel calvario a que ha sido sometido el pueblo sudafricano por un grupo de verdugos racistas.

El día 29 de octubre The New York Times informaba de cuatro nuevos muertos y apuntaba que desde diciembre del pasado año a esta fecha 800 personas han sido asesinadas por las balas racistas, por el solo crimen de luchar para ser considerados seres humanos, como apuntara hace sólo unas pocas horas, justamente desde esta tribuna el Obispo Desmond Tutu.

El apartheid es más que una pesadilla y se han escrito ya tantas páginas sobre la violación de los derechos humanos por parte de los racistas, que se pudiera hacer una inmensa enciclopedia. El Obispo Tutu indicaba que entre las personas asesinadas ha habido muchos niños, pero para ellos no hay publicidad. La represión aumenta ante las protestas pacíficas, contra la educación bantú, contra las exclusiones, y la respuesta de los nuevos fascistas son los perros y las balas. El estado de emergencia, que en realidad jamás ha dejado de existir para los negros sudafricanos, provoca repugnancia en los hombres de buena voluntad; pero no en aquellos que se autotitulan campeones de la democracia y de los derechos humanos como los Estados Unidos y que desde esta tribuna pronuncian grandilocuentes discursos, sin decir una sola palabra de la barbarie instaurada por sus asociados de Pretoria, que se benefician del llamado compromiso constructivo.

Las masas negras sudafricanas no necesitan de nuestra compasión, sino de nuestra más firme e irrestricta ayuda, para liquidar un cáncer social que constituye una peligrosa amenaza para la paz y la seguridad en el Africa austral, y especialmente ahora, cuando esas masas negras sudafricanas han demostrado que se le han cerrado todos los caminos, como acaba de declarar el Frente Unido Democrático, organización a la que se le ha prohibido recientemente celebrar reuniones en Ciudad de El Cabo.

No olviden los racistas de Pretoria y sus aliados que, como dijera Tito Livio, "La necesidad es la última y la más terrible de las armas", y en esa alternativa los racistas han situado al sufrido y oprimido pueblo negro sudafricano.

Desde esta tribuna exigimos que el Gobierno racista ponga fin a las masacres, al estado de emergencia, y que ponga en vigor inmediatamente aquellas medidas que la voz de la razón reclama con urgencia, para evitar la catástrofe en Sudáfrica, es

decir, el regreso de los exiliados, negociar con los legítimos representantes del pueblo sudafricano, el African National Congress (ANC), la liberación de Nelson Mandela y de todos los presos políticos y que sea abolida toda la legislación apartheid.

Si en su miopía y tozudez los racistas no se atienen a la razón, no pueden haber más subterfugios ni maniobras dilatorias. Sería preciso que cada miembro de la comunidad internacional, en especial los miembros del Consejo de Seguridad, cumplan con sus conciencias y sus deberes y se apliquen las sanciones totales y obligatorias establecidas en el Capítulo VII de la Carta. O tendríamos que concluir que no importa que fueran 800 negros, como parece ser para algunos, quienes en realidad comparten las ideas de las diferencias raciales y no consideran a esos mártires sudafricanos seres humanos.

No hay más alternativa y es la hora de las diáfanas definiciones, o se está con los racistas o se apoya a los que sufren los efectos de la política del apartheid. En línea con ello, mi país confiere enorme importancia a la convención sobre el apartheid en los deportes, y considera que este instrumento debe ser aprobado tal y como nos lo ha sido presentado en este período de sesiones de la Asamblea General. Igualmente apoyamos la propuesta formulada por el Presidente en ejercicio de la Organización de la Unidad Africana, de celebrar el próximo año una conferencia internacional de sanciones contra la Sudáfrica racista.

Hoy puede haber tiempo de parar el holocausto, mañana será demasiado tarde y todos debemos tener presente que cuando se cierran los caminos los pueblos siempre, como demuestra la historia, han impuesto por muchas vías sus más caros sentimientos libertarios y esos derechos nos asisten a todos.

Para concluir, quisiera expresar lo siguiente: para los negros sudafricanos habrá mañana, de la sangre con que abonan hoy el camino de la libertad germinará un mundo en el que puedan trabajar conjuntamente negros y blancos, y habrá mañana.

Sr. MANSFIELD (Nueva Zelanda) (interpretación del inglés): La semana pasada el Primer Ministro de mi país, el Muy Honorable David Lange, hizo una declaración amplia sobre la posición de Nueva Zelanda respecto de este tema en una reunión extraordinaria del Comité Especial contra el Apartheid. No es necesario que reitere lo mismo aquí. Por lo tanto, me limitaré a subrayar los puntos básicos de nuestra política.

Nueva Zelanda rechaza la política de apartheid de Sudáfrica. La continuación de ese sistema de racismo institucionalizado constituye un abuso flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios sobre los cuales se funda esta Organización.

Por espacio de muchos años el pueblo de Nueva Zelanda ha expresado su oposición al apartheid y a todo lo que él representa. En Nueva Zelanda estamos dedicados a edificar una sociedad basada en la armonía racial y la igualdad; en el establecimiento de una sociedad multirracial fundada en la asociación, en el respeto mutuo y en el libre consentimiento. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Tampoco se alcanza sin esfuerzos y recursos. Pero el pueblo de Nueva Zelanda ha demostrado que no puede ni ha de transigir respecto de estos principios.

El apartheid es la antítesis de este esfuerzo. La continuación de esa política de Sudáfrica señala el repudio del régimen racista por los principios fundamentales que el pueblo de Nueva Zelanda está decidido a sostener en nuestra propia sociedad.

Hace tan sólo dos días escuchamos en este salón el testimonio conmovedor del Obispo Desmond Tutu sobre los sufrimientos que el pueblo de Sudáfrica se ve forzado a soportar para lograr los derechos que la Carta de esta Organización trata de garantizar a todos los hombres y mujeres. Hemos escuchado con respeto a un hombre que a través de su propia vida y de su clero ha dado expresión a los ideales merced a los cuales todos los aquí presentes confiamos en ver crecer a una Sudáfrica libre. Hemos escuchado su llamamiento en pro de una sociedad sin las injusticias, la represión y la brutalidad bajo las cuales su pueblo debe vivir actualmente. Y aún la estatura de ese hombre es tan grande que le hemos escuchado, aun frente a las provocaciones actuales, formular un llamamiento para la erradicación pacífica del apartheid y para que surja pacíficamente una sociedad en la cual tanto los negros como los blancos puedan, según sus palabras, ser "verdaderamente libres".

Esta visión no podrá llevarse a cabo en tanto no se haya abolido el apartheid. Al hablar ante el Comité Especial contra el Apartheid el Primer Ministro de mi país puso de relieve una vez más el apoyo de Nueva Zelanda a ese objetivo. Dejó en claro que Nueva Zelanda no ve cómo las pretendidas reformas del Gobierno sudafricano pueden contribuir a la eliminación del apartheid. Como él dijo:

"El Gobierno sudafricano hasta ahora se ha negado a celebrar un diálogo auténtico con representantes de los grupos negros sobre un futuro arreglo político; en su lugar, ha detenido a muchos de ellos y se ha negado a reunirse con otros. Hay pocas señales de que esté dispuesto a contemplar la extensión a los negros del derecho a participar en un plano de igualdad en el proceso político. Sus reformas limitadas no representan cambio alguno en la filosofía racista básica del Estado. Ella continúa incorporada en la ley y está respaldada por la fuerza, que se ha utilizado incansablemente en el orden interno para suprimir las demandas de los negros que aspiran tan sólo al derecho de poder decidir en el gobierno de su país, así como en contra de sus vecinos para debilitarlos y establecer su predominio militar en la región, todo ello con vistas a fortalecer la dominación blanca y la capacidad del Gobierno para oponerse al cambio. Por todas estas razones, el mundo se ha

unido en su decisión de poner fin al apartheid como posiblemente no se haya visto unido desde la campaña destinada a poner fin a la esclavitud. Quiero que sepan que Nueva Zelanda permanece permanentemente firme tras ese esfuerzo y que continuará colaborando con otros que piensen de la misma manera en las Naciones Unidas, en el Commonwealth y en todas partes para poner fin a lo que todos nosotros procuramos y que ahora resulta tan claramente factible."

Se requiere la acción internacional contra el apartheid para poder alcanzar esa finalidad. Por ello, Nueva Zelanda copatrocinó el año pasado la resolución relativa a la acción internacional concertada contra el apartheid, y esperamos patrocinar una resolución análoga cuando se la presente ante la Asamblea General más adelante en el curso de este período de sesiones.

Hace menos de dos semanas mi país participó en la elaboración del Acuerdo del Commonwealth sobre Sudáfrica en la reunión de los Jefes de Gobierno del Commonwealth celebrada en Nassau. El Primer Ministro de mi país afirmó el compromiso de Nueva Zelanda con la aplicación del programa de acción que los Jefes de Gobierno acordaron en esa oportunidad. Comprometió el apoyo en pro de sanciones económicas significativas, inmediatas y cuidadosamente establecidas. Observando que Nueva Zelanda cumpliría estrictamente cada una de las sanciones económicas que el Commonwealth ha decidido aplicar de inmediato, el Primer Ministro dijo que Nueva Zelanda puede ir más allá:

"Siempre y cuando el Commonwealth lo estime necesario estaremos dispuestos a cumplir nuestra parte hacia las próximas medidas señaladas en el Acuerdo ... Nueva Zelanda estará dispuesta a satisfacerlas. Y si el Gobierno sudafricano permanece obstinado, Nueva Zelanda estará dispuesta a unirse a otros en un esfuerzo colectivo más amplio, que incluya aun sanciones obligatorias de carácter general si eso es lo que se requiere para lograr el cambio pacífico en Sudáfrica."

El cambio pacífico en Sudáfrica es nuestro objetivo. El tiempo se está acabando, pero todavía no es demasiado tarde. Sudáfrica puede encontrarse realmente, como expresara el Obispo Tutu, al borde de una catástrofe. Empero, en tanto los dirigentes de aquellos que están siendo oprimidos muestren disposición de acudir a esta Asamblea y comprometerse a trabajar por un cambio pacífico, la comunidad internacional debe hacer todo lo que esté a su alcance para apoyarlos.

Español  
LHR/mba

A/40/PV.55  
-159-160-

Sr. Mansfield, Nueva Zelandia

El Gobierno de Nueva Zelandia está comprometido con la eliminación del apartheid. Pedimos la liberación de los presos políticos y que se ponga fin al estado de emergencia con la violencia que ello engendra. Aspiramos a una Sudáfrica que ya no amenace la seguridad de su región mediante ataques injustificados y sangrientos a sus vecinos. Aspiramos a que se restaure la dignidad política y humana en Sudáfrica. Aspiramos a que se concrete la visión del Obispo Tutu de una Sudáfrica que sea verdaderamente libre.



Sr. BEAUGE (Argentina): La continuación del apartheid representa quizás el problema más grave y urgente que enfrentan las Naciones Unidas en este cuadragésimo aniversario. Ninguna otra cuestión ofende tan uniformemente la conciencia de la humanidad en su conjunto. En esta postrer etapa de un siglo que ha visto progresos sociales, políticos y tecnológicos sin precedentes, la supervivencia de ese anacrónico resabio de intolerancia es simplemente inaceptable. Hoy más que nunca es necesario que la comunidad internacional adopte medidas urgentes y efectivas contra Sudáfrica que contribuyan a acelerar la erradicación total y definitiva del apartheid.

Ese sentido de urgencia nace no sólo del interés en restablecer la decencia y la justicia en Sudáfrica, sino también de nuestra obligación de responder decididamente a un desafío concreto y grave al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La continuación del apartheid es una fuente grave de conflicto y una seria amenaza al normal desarrollo de las relaciones internacionales. Sus efectos alcanzan no sólo a la región sino también a toda la comunidad internacional, que en conciencia no puede permanecer indiferente ante la creciente crisis del Africa meridional.

Parece evidente que el Gobierno sudafricano no tiene intención de eliminar las manifestaciones más violentas y ofensivas del régimen de apartheid. La represión interna es mucho más intensa que hace un año. El proceso de bantustanización no ha sido abandonado. Sudáfrica continúa ocupando ilegalmente a Namibia y lanzando agresiones contra países limítrofes. La creciente resistencia activa del pueblo oprimido de Sudáfrica al apartheid merece la simpatía y el apoyo de todos los Estados aquí representados. Esa resistencia es tanto más justificada cuando Pretoria, en lugar de tomar pasos concretos en la dirección apropiada, ha optado por refugiarse en nuevas y más severas medidas destinadas a preservar el apartheid. Todos somos testigos de la ola de violencia a la que diariamente son sometidos millones de sudafricanos como consecuencia de la ciega intransigencia de Pretoria.

La Argentina reitera su condena más enérgica a la política de apartheid y su solidaridad con sus víctimas. La discriminación por cualquier causa es incompatible con los principios sobre los que fue fundada la República Argentina. No ha de extrañar, pues, que mi Gobierno haya adoptado pasos importantes concretos contra Pretoria. El nivel de las relaciones ha sido reducido al mínimo. Las vinculaciones aerocomerciales están suspendidas. La Argentina cumple

escrupulosamente el embargo obligatorio de armas contra Sudáfrica. En fecha muy reciente, mi país ha ratificado la Convención Internacional sobre la Supresión y el Castigo del Crimen de Apartheid.

Todas estas acciones son reflejo de la firmeza del respaldo argentino a la lucha de Africa contra la discriminación racial, y las mismas no deberían dejar a Pretoria con duda alguna sobre nuestra firme condena al sistema de apartheid.

La acción individual de los Estados, aunque útil, no es suficiente. Muchas veces hemos señalado, e insistimos hoy en ello, que sólo una acción concertada de todos los Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a aquellos con relaciones más significativas con Pretoria, podrá representar un instrumento efectivo en la lucha contra el apartheid. Corresponde, pues, reiterar nuestro llamamiento al Consejo de Seguridad para que, actuando según el Capítulo VII de la Carta, imponga sanciones obligatorias concretas y amplias contra Pretoria. Ninguna duda puede quedar ya sobre el peligro que representa el apartheid para la paz y la seguridad internacionales. La falta de una respuesta adecuada por parte de las Naciones Unidas no sólo serviría para prolongar la tragedia de un pueblo ilegítimamente privado de sus derechos fundamentales, sino también conspiraría peligrosamente contra la credibilidad y la autoridad política y moral de nuestra Organización.

Sr. LEGWAILA (Botswana) (interpretación del inglés): Como hemos predicho y advertido reiteradamente, el apartheid ha terminado por incendiar a Sudáfrica. El incendio que comenzó hace más de un año con la furia de una conflagración incipiente ya ha consumido a más de 800 vidas y va a consumir a miles más si los autores de la política incendiaria del régimen blanco de apartheid en Sudáfrica no entran en razones sobre la inutilidad y locura de sus métodos racistas con la rapidez necesaria. La situación nunca ha sido tan desesperada en Sudáfrica. Jamás las pasiones de la mayoría oprimida en ese país han estado tan enardecidas. Jamás el compromiso de los jóvenes sudafricanos con la liberación de su tierra atormentada ha sido tan fatalista y ha estado imbuido de tal sentido de decisión.

Para saber lo que sucede en Sudáfrica hay que contemplar los rostros de muchachos de 15 años de edad mientras se dirigen a los cementerios de Soweto y otras poblaciones llevando los ataúdes de sus camaradas caídos a sus lugares de descanso. No hay señal de pesar en sus rostros cuando cantan lemas y canciones de liberación con la pasión y la jovialidad de una generación que ha tomado el control

de su propio destino. Para ellos la vida bajo el apartheid no es peor que la muerte, porque, ¿qué es la vida humana privada de su esencia, su dignidad y santidad, su propio valor humano? Así, pues, los jóvenes sudafricanos han decidido sacrificar sus vidas de corta edad para que aquellos que permanezcan puedan vivir en libertad, en una Sudáfrica libre de apartheid y de racismo.

Y no obstante, el régimen de la minoría blanca de Sudáfrica está tan sordo como siempre. Como si los corazones y los sentimientos de los dirigentes blancos de ese país fueran de piedra, cada día en que se suceden los derramamientos de sangre y los muertos, cada fin de semana cargado de enormes funerales y torrentes de lágrimas, parecen endurecer su intransigencia con las amenazas rutinarias de ser más asesinos en su enfrentamiento fuertemente armado con los manifestantes juveniles pacíficos e indefensos. Y preguntamos qué clase de seres humanos son esos que no se conmueven ante tanto derramamiento de sangre innecesario, tanta muerte y tanto sufrimiento. Preguntamos qué clase de seres humanos reaccionarían a una tragedia con la amenaza de aumentarla. Cada manifestación pacífica contra el apartheid ha chocado con la amenaza oficial de emplear una fuerza mayor contra los manifestantes y, de hecho, se ha utilizado más fuerza, independientemente de las vidas inocentes que se pierden.

Se nos dice que los manifestantes pacíficos hacen difícil la reforma del apartheid y el comienzo de la evolución que promueva una nueva sociedad en Sudáfrica y que, por lo tanto, hay que matarlos. Pero lo que hemos visto hasta ahora en Sudáfrica - como lo que a menudo celebra el mundo occidental como el comienzo de la evolución de una sociedad no racial en reacción a los trastornos actuales - no ha sido más que la consolidación del statu quo que se disfraza de reforma. Lo que se llama un "manifiesto para una nueva Sudáfrica", articulado recientemente por el Sr. Botha, se ha convertido en un plan para la modernización del desmembramiento étnico racista de la sociedad sudafricana. Si el plan de Botha viera la luz del día, Sudáfrica continuaría siendo un país dividido racialmente, porque los bantustanes se convertirían sencillamente en unidades que mantendrían su carácter etnocéntrico en todos los sentidos. Las denominadas unidades, en otras palabras, seguirían siendo criaturas de la ideología racista del apartheid. No surgirá así una Sudáfrica unida caracterizada por una ciudadanía común auténtica con derechos iguales. Se le seguiría diciendo a un zulú que él no tiene nada que ver con el resto de sus compatriotas negros sudafricanos y viceversa.

Cada unidad, según el plan de Botha, de la misma forma en que se desempeña el actual Parlamento trirracial de Ciudad de El Cabo, se ocupará de sus propios asuntos, segregado como siempre, y solamente tendrá una voz hasta ahora indefinida respecto a las cuestiones que se denominan de "alto nivel". Pero lo que es más

insultante para los africanos negros es que el plan de Botha no tiene en cuenta que sus frustradas aspiraciones durante tanto tiempo merezcan siquiera la tregua humillante de una cuarta cámara en Ciudad de El Cabo. El plan todavía considera que los africanos negros no son merecedores de la adaptación e integración en la vida política de su propio país. Hay que seguir manteniéndolos al nivel servil de la libre determinación étnica y la "independencia" sometida a la dominación blanca. Pero no, el plan del Sr. Botha no es más que una receta para un desenlace catastrófico de la tragedia del apartheid.

El plan es tan racista - por no decir algo más - como el orden del apartheid que pretende sustituir. En realidad, su misma existencia nos revela lo mucho que se ha hundido el régimen de Pretoria en la cloaca del racismo. Tenemos que preguntarnos qué tipo de solución al problema del racismo en Sudáfrica puede surgir de un plan producido unilateralmente por un régimen racista blanco, cuya visión del futuro es la de que únicamente los blancos deben continuar dominando a los demás grupos en Sudáfrica de una forma o de otra. ¿Qué plan puede pretender hallarse libre del racismo si su misma esencia y razón de ser es la de frustrar las aspiraciones de la mayoría - que resulta ser negra - y consolidar la supremacía blanca negando a la mayoría el derecho a gobernarse?

Un plan para conseguir la democratización y la eliminación del racismo en Sudáfrica es una necesidad manifiesta, pero tiene que ser uno cuya legitimidad se desprenda de la voluntad colectiva del pueblo de Sudáfrica en su totalidad. Todas las mutaciones racistas de las realidades políticas sudafricanas y el empeñamiento igualmente racista de ignorar el imperativo de cambio en ese país son una pérdida de tiempo porque no pueden producir la solución que buscamos. Todas las comunidades de Sudáfrica tienen dirigentes auténticos propios, quienes son capaces de participar en la forja del destino de su país, Sudáfrica. Están dispuestos a hacerlo así en una mesa de conferencias sin que existan condiciones previas impertinentes. Lo que no están dispuestos a hacer y nunca harán es aceptar un plan preparado unilateralmente por la Sudáfrica blanca y tendiente a preservar la condición privilegiada de los sudafricanos blancos.

Luego declaramos, aquí y ahora, que nuestra visión de la Sudáfrica de mañana carece de complicaciones. En nuestra condición de vecinos, deseamos a ese país trágico y a su pueblo cansado de luchar, tanto a los blancos como a los negros, lo que creemos que reñunda en nuestro interés común. Queremos que termine el derramamiento de sangre y la, al parecer, interminable danza de la muerte en Sudáfrica. Queremos que su pueblo dirima sus vastas diferencias causadas por la polarización racial y comience el proceso de reconciliación en una nueva Sudáfrica, cuya realización, en caso de demorarse, lo haría con gran peligro para la paz y la estabilidad de la región del Africa meridional en su totalidad. Queremos paz en Sudáfrica y esta paz sólo puede prevalecer allí si imperan ciertas condiciones esenciales en ese país:

Primero, que se levante el estado de emergencia y se supriman las restricciones arbitrarias contra la libertad de reunión, de movimiento y de palabra.

Segundo, que se ponga fin al derramamiento de sangre, a la matanza de niños negros que manifiestan pacíficamente su deseo de libertad para ellos y para su pueblo.

Tercero, que se ponga término a la represión brutal que se practica contra los dirigentes políticos blancos y negros, cuyo único delito consiste en tratar de liberar a su país - a su patria - del flagelo de la persecución racial.

Cuarto, que termine la persecución de dirigentes negros, cuyo único delito es pedir el cambio significativo en su propio país.

Quinto, que se ponga fin a los destierros de líderes políticos negros, sobre cuyos hombros descansa la responsabilidad de negociar el futuro de Sudáfrica.

Sexto, que se ponga en libertad a Nelson Mandela y a sus camaradas, encarcelados desde hace tanto tiempo y que representan a todos los partidos políticos de Sudáfrica, cuya presencia fuera de la prisión solamente redundará en beneficio de Sudáfrica.

Y, séptimo, que se declare una amnistía general para que todos los sudafricanos que languidecen en el exilio puedan regresar a su patria y vivir en paz en una Sudáfrica libre.

En otras palabras, pedimos un nuevo comienzo en Sudáfrica y esto es una auténtica necesidad, para que el país se detenga en su carrera hacia el precipicio. No hay fuerza ni brutalidad oficial que salve a Sudáfrica. Sí, pueden perderse miles de vidas de negros sudafricanos en forma cruel y rutinaria, pero las tumbas, las muertes, los clavos en los ataúdes de los muertos no representarán jamás la victoria del régimen racista de Pretoria. Por el contrario, cuanto más inhumana y cínica sea la brutalidad, más se inflamarán las pasiones y la ira de los millones de oprimidos, como la historia lo demuestra. Al final, no habrá lugar en que se pueda esconder el opresor, como el Sr. Ian Smith de la antigua Rhodesia comprobó demasiado tarde, hace más de seis años.

Pedimos negociaciones ahora y no al cabo de un largo proceso de cambio evolutivo diseñado por el régimen de Pretoria y sus amigos para retrasar lo inevitable lo más que puedan. Es mucho lo que está en juego en ese país. Las llamas de la furia amenazan con destruir a Sudáfrica y a todo lo que la rodea. Los negros sudafricanos están dispuestos a sentarse a la mesa de conferencias para negociar un cambio auténtico. La pelota no está en su cancha; está en la cancha de la minoría blanca, que pasa de una maniobra constitucional condenada al fracaso a otra, en un intento desesperado de ganar tiempo para el apartheid y el racismo. Debemos confesar que ello es sostenido por poderosos intereses económicos del mundo occidental que con frecuencia ven con suspicacia la creciente agitación en favor del cambio en Sudáfrica, creando la clara impresión de que la seguridad de los intereses económicos occidentales en Sudáfrica es inseparable de la supervivencia de la tiranía racial en ese país.

Para nosotros ocurre exactamente lo contrario, pues no podemos ver cómo los intereses económicos occidentales pueden sentirse seguros en una Sudáfrica que arde en llamas. Nada está seguro en Sudáfrica en las condiciones actuales, y menos aún intereses económicos extranjeros que son justificadamente considerados como el respaldo de la intransigencia del régimen de la minoría blanca. Tarde o temprano, esos intereses se transformarán necesariamente en blancos legítimos de la ira de los oprimidos.

Por eso, es razonable que un mundo occidental que valora sus inversiones en Sudáfrica tenga que formar parte de la lucha a favor del cambio en Sudáfrica, en lugar de obstaculizarla. Ese mundo occidental no debería dejar duda alguna ante los ojos de Sudáfrica de cuál es su posición en torno a una cuestión tan vital para la paz y la estabilidad de la región, y no sólo de Sudáfrica. En otras palabras, colocamos, lisa y llanamente, sobre los hombros de Occidente la responsabilidad de forzar o persuadir al régimen de la minoría blanca de Pretoria para que reconozca que esta es la hora de la verdad o sufra las consecuencias, para que negocie con la abrumadora mayoría de los habitantes de Sudáfrica un futuro mejor para ese país o enfrente las consecuencias de la soledad, y no el mero aislamiento, en un mundo peligroso. Occidente tiene una posición ventajosa para apoyar este ultimátum y Sudáfrica no está con ánimos como para refugiarse en un círculo de carretas en el siglo XX simplemente para evitar ser rehabilitada en una comunidad de naciones libres y civilizadas.

Acogemos con beneplácito el Acuerdo sobre Sudáfrica adoptado por la Reunión Cumbre del Commonwealth, recientemente, en Bahamas. Creemos que es necesario que se intente aplicar toda medida pacífica para persuadir al régimen de la minoría blanca de Sudáfrica de que abandone su actitud suicida. No desconocemos el hecho de que inclusive algunas de las medidas pacíficas que se contemplan en la lucha contra el apartheid y el racismo han de provocar ciertas penurias al pueblo directamente interesado. En efecto, algunas de esas medidas serán dolorosas tanto para las víctimas como para quienes perpetrán la injusticia del apartheid y el racismo, pero esas penurias serán insignificantes en comparación con el altísimo precio que el apartheid y el racismo han cobrado en vidas de negros sudafricanos a lo largo de los años.

El apartheid y el racismo de Sudáfrica deben llegar a su fin por otra razón igualmente importante. Sudáfrica no existe aislada en nuestra región; se trata de una Potencia poderosa económica y militarmente en el Africa meridional cuya capacidad para el mal es casi ilimitada dados los recursos de que dispone y la aparente insensibilidad de los dirigentes blancos en su trato con sus compatriotas negros dentro de Sudáfrica y en la región en su conjunto.



Toda la región del Africa meridional se encuentra hoy perturbada ya sea a causa de actos de agresión perpetrados directamente por Sudáfrica contra sus vecinos o como consecuencia de actividades de desestabilización que llevan a cabo los movimientos disidentes respaldados por Pretoria. Estos movimientos han sembrado el caos en Angola, Mozambique y Zimbabwe, distorsionando la frágil y preciosa infraestructura económica y la tradicional tranquilidad de la vida rural africana. En especial Angola y Mozambique no han conocido la paz que tanto se merecen y que tanto ansían tras sus prolongadas y duras luchas de liberación. Estos países se encuentran embarcados en luchas costosas e interminables con los movimientos disidentes cuyas fuentes de material bélico parecen con frecuencia contar con un apoyo inextinguible, respaldados como están por poderosas fuerzas del mundo occidental, aparte de la asistencia que reciben del régimen racista de Sudáfrica que los apadrinan. En efecto, los bandoleros de la UNITA en Angola quizá reciban pronto la generosa concesión de 27 millones de dólares si quienes los apoyan en Washington lograran su propósito, ahora que se ha eliminado la enmienda Clark. En Mozambique, Pretoria ha hecho la más vergonzosa demostración de mala fe al admitir que nunca honró la firma del Acuerdo de Nkomati.

De manera que el fuego que amenaza con consumir a Sudáfrica también amenaza con transformar a nuestro subcontinente entero en una tierra yerma. La oposición al apartheid y al racismo se ha transformado en una empresa costosa para los vecinos de Sudáfrica. Inclusive conceder asilo político ya no es considerado como una acción humanitaria por un régimen cuyo sentido de la moral está tan viciado por el racismo que se ha vuelto inclusive incapaz del menor viso de contrición por la brutalidad que desata y con la cual persigue y asesina a las víctimas de su propia inhumanidad en los países que les han dado refugio, como ha ocurrido en la capital de mi propio país, en junio de este año. La inmisericordia, la mera depravación de ese acto bárbaro de inhumanidad medioeval perpetrado contra un grupo de hombres, mujeres y niños, con los cuales el destino ya había sido tampoco clemente, escapa a toda comprensión.

Sin embargo, la lucha por la liberación en Sudáfrica se ha transformado en algo tan inexorable que no hay acto de agresión que se cometa contra víctimas inocentes en el exilio que pueda salvar al apartheid. Este debe ser destruido, en aras de la libertad, la justicia y la paz en Sudáfrica y en la región en su conjunto.

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Varios representantes han pedido hacer uso de la palabra para ejercer su derecho a contestar. Recuerdo a los Miembros que, de acuerdo con la decisión de la Asamblea General 34/401, las declaraciones en ejercicio del derecho de respuesta están limitadas a 10 minutos para la primera intervención y cinco minutos para la segunda y las delegaciones deben hablar desde sus asientos.

Doy ahora la palabra a los representantes que quieran ejercer el derecho de respuesta.

Sr. RAJAIE-KHORASSANI (República Islámica del Irán) (interpretación del inglés): Agradezco que se me dé la oportunidad de hablar a esta hora tan tardía. No tomaré los 10 minutos que me han sido asignados. Seré muy breve.

El representante de la base sionista de terror que ocupa Palestina ha dado ciertas estadísticas acerca de los tanques petroleros que han llevado el petróleo del Golfo Pérsico a Sudáfrica. En sus manifestaciones nombró a la República Islámica del Irán. Nosotros también hemos recibido informes de la Shipping Research Bureau de los Países Bajos pidiendo la misma información.

Como deben saber los Miembros, todos los tanques petroleros que llevan ese elemento de la República Islámica del Irán han prometido no entregar sus cargas a Sudáfrica. Por lo tanto, todos los reclamos han sido investigados cuidadosamente por mi Gobierno y hemos llegado a la conclusión de que todos los casos sospechosos han evidenciado la descarga del petróleo en un puerto europeo u otro. Pero, también sabemos que de esos puertos de tránsito la carga de petróleo puede, y realmente así ocurre, a través de una cadena de transacciones, ir a Sudáfrica, transacciones que están fuera de nuestro control. Hemos investigado las reclamaciones contra quienes nos compran petróleo crudo directamente, pero no las reclamaciones contra el intermediario que transfiere la carga a Sudáfrica.

En realidad, este esquema del suministro de petróleo a Sudáfrica ha sido formulado por la red internacional del sionismo y sus bien conocidas corporaciones transnacionales, que están detrás de tantos crímenes en la misma Sudáfrica.

Todos sabemos que la base sionista que ocupa Palestina adquiere su propio suministro de petróleo de la misma forma, porque carece de recursos petrolíferos en los territorios ocupados. De modo que, la base sionista en realidad debe ser acusada aun por estos métodos de suministro de petróleo a Sudáfrica.

Es de advertir que las estadísticas que la base sionista de terror que ocupa Palestina presentó en su declaración fueron suministradas a ella directamente por esas compañías que son colaboradoras complacientes de Sudáfrica. Tales estadísticas, por consiguiente, son válidas; pero son simplemente incompletas. Dicen la verdad, pero no toda la verdad.

Esto en cuanto al fondo de las reclamaciones en relación con el suministro de petróleo a Sudáfrica. Pero, ¿por qué tanta tontería sale de la boca del representante de la base sionista de terror que ocupa Palestina? Los colaboradores de Sudáfrica han tratado de desviar la opinión general de esta Organización internacional de la cuestión principal, que es la del régimen de apartheid y sus aliados. En este mismo momento, mientras estamos tratando de obtener algún alivio, apoyando, por lo menos verbalmente, a la mayoría del pueblo oprimido de Sudáfrica, el pueblo sudafricano está siendo sometido a la política más cruel y odiosa. Hemos sido informados de que hoy algunos jóvenes han sido martirizados. Su único crimen - y el único crimen de otros mártires - fue el de desear la independencia y la igualdad, que se hallan entre los principios básicos aceptados, por lo menos verbalmente, en todo el mundo.

Ellos están sacrificando sus jóvenes vidas por la causa de la libertad y la igualdad, en la esperanza de obtener éxito en el futuro. En este mismo momento, el régimen racista continúa matando y destruyendo brutalmente.

Así, pues, estamos prestando atención al problema principal. El problema principal aquí es actuar; actuar decisiva y firmemente no sólo contra el odioso régimen de Pretoria, sino también contra las Potencias occidentales cuyos intereses económicos han estado alimentando a ese régimen brutal. Confío en que la comunidad internacional no se dejará engañar con cuestiones irrelevantes tendientes a desviar la atención de la cuestión fundamental; cuestiones que utilizó la base sionista de terror para profesar injurias contra el sentido común internacional.

Sr. AL-SOGAIRY (Omán) (interpretación del árabe): Mi delegación no hubiera querido responder al representante de Israel, pero sus fallidos intentos de falsificar la verdad no tienen nada que ver con la cuestión humanitaria que estamos discutiendo de acuerdo con este tema del programa y al que se han referido tantas delegaciones: la política de apartheid practicada por el Gobierno de Sudáfrica y por Israel, que es una realidad.

Por ello, debemos darnos cuenta de que esta mañana el representante de Israel decidió no mencionar el sufrimiento del pueblo de Sudáfrica bajo el vergonzoso sistema de discriminación racial practicado en ese país. Eso demuestra la verdad de los estrechos vínculos y de la colaboración entre Israel y Sudáfrica.

Además, la declaración israelí no tiene nada que ver con el tema en discusión. El representante de Israel acusó a las organizaciones internacionales de ocultar las verdaderas estadísticas acerca de su país y de las actividades de los países árabes. Su declaración de esta mañana ha estado llena de mentiras. Debemos aclarar perfectamente que nuestro país no mantiene ninguna relación con el régimen racista de Sudáfrica y continuaremos actuando de esa manera mientras persista en políticas basadas en la discriminación racial.

Además, Omán, que, más que cualquier otro país, tiene lazos espirituales y culturales con los pueblos fraternos de África, afirma que lo que dijo esta mañana el representante de Israel está muy lejos de la verdad.

Ha tratado de pasar por alto el hecho de que lo que se aplica a Omán en este caso podría aplicarse a todos los países árabes hermanos que fueron mencionados por ese representante de Israel. En cuanto a su intento por vanagloriarse al decir que su país se opone a la discriminación racial, sabemos que el Gobierno de su país se basa en el racismo, y este fue proscrito por las Naciones Unidas cuando éstas declararon que el sionismo era un crimen de lesa humanidad como lo es la discriminación racial.

Sr. GOSHU (Etiopía) (interpretación del inglés): En su declaración de esta mañana ante la Asamblea General el Representante Permanente de Israel intentó desviar la atención sobre el hecho bien conocido de la colaboración de su país con el régimen racista de Sudáfrica. Dicho representante habría hecho bien en no participar en el debate general sobre la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica dados los antecedentes sobre la connivencia entre Tel Aviv y Pretoria.

Sea como sea, la delegación etíope quedó muy sorprendida al escuchar al representante de Israel tratando de presentar como prueba de la naturaleza no racista del sionismo el secuestro de los falashas etíopes por Israel. Si ese acto de piratería probara algo, ello sería la ilegalidad del Gobierno de Israel y su desprecio para con las normas y principios del derecho internacional.

La aseveración de la delegación israelí de que la vida de los etíopes falashas en Israel ha sido un lecho de rosas es, por no decir otra cosa, una falsedad tendiente a engañar a la comunidad internacional - que no conoce la difícil situación actual de nuestros compatriotas en Israel - y, lo más grave, una deshonestidad manifiesta.

Pido a la Asamblea que me disculpe si cito unos pocos casos concretos para demostrar que las cosas no son tan brillantes para los falashas como ha tratado de presentarlas el representante de Israel. En realidad, los falashas han sido rechazados por la sociedad israelí y son objeto de discriminación. Un documento interno del Ministerio de Inmigración israelí reveló el 12 de julio de 1985 que los activistas de la comunidad etíope habían iniciado violentas actividades de protesta contra la decisión de los rabinos de que debían tener que pasar por una ceremonia ritual de conversión. En julio pasado el Jerusalem Post escribía extensamente sobre la suerte de los etíopes en Israel. En uno de sus números el Post cita a un portavoz de los falashas, que dijo:

"Hemos perdido nuestra voluntad; estamos frustrados. Algunos jóvenes ya se han suicidado."

Estos etíopes, llevados a la fuerza a Israel, se enfrentan a un extraño ambiente físico y social, a una cultura con la que no tienen nada en común y en condiciones de vida difíciles de aceptar; se hallan asentados en las zonas más inestables para servir como carne de cañón en caso de hostilidades; se les discrimina en cuanto a vivienda y se les destina a realizar los trabajos más bajos; se ven obligados a someterse a rituales extraños que constituyen un acto de renunciamiento y de abrogación de su cultura y de sus costumbres históricas negras. En efecto, toda esa acción equivale a la judaización forzosa de una población con antecedentes totalmente distintos en lo cultural, social y económico.

La experiencia ha sido sumamente humillante para esos orgullosos etíopes que fueron embaucados llevándoselos a esa situación mediante la coacción, la intimidación y el engaño declarado. Su desilusión y su repudio ante la nueva situación que viven en lo social y político en Israel halla expresión en el incremento de los casos de suicidio.

Ante la realidad que he tratado de exponer, me asombra que el representante israelí trate de justificar el delito de secuestro cometido por su Gobierno invocando una cuestión que no tiene nada que ver con la que estamos considerando. Quizás sea un sentido de culpa lo que la inquieta.

Por último, el intento de la delegación israelí de presentar esta cuestión que tiene la máxima importancia para mi país, utilizando una maniobra diversionista para escapar a la condena internacional por su política de colaboración en el apartheid, no solamente es engañosa sino también de mal gusto.

Sr. AL-NAJJAR (Emiratos Arabes Unidos) (interpretación del árabe):

El representante de la entidad sionista racista proclamó hoy que mi país es uno de los que exportan petróleo a los racistas de Sudáfrica. Por ello quiero afirmar aquí que los Emiratos Arabes Unidos adhieren total y plenamente a las resoluciones de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad así como a las resoluciones y decisiones de los países no alineados y de la Liga de los Estados Arabes, respecto al embargo impuesto al Gobierno racista de Sudáfrica.

Quiero declarar aquí lo siguiente. Ante todo, el representante sionista ha inventado cifras que él mismo llega a creer como ciertas. Sin embargo, mi delegación se ocupaba del tema del programa. Durante el debate de este tema del programa podremos demostrar la falsedad de esas cifras. El propósito del representante sionista es distraer la atención del tema principal que examinamos con el fin de encubrir la colaboración existente entre el sionismo y la racista Sudáfrica.

Sr. RAZZOQI (Kuwait) (interpretación del inglés): Mi delegación tiene el deber de explicar lo siguiente. El representante de la entidad sionista alega que Kuwait y otros países árabes hermanos proporcionan petróleo a Sudáfrica. Hizo estas afirmaciones basándose en sus propias lecturas e interpretaciones personales sobre la información publicada por la Shipping Research Bureau. Simplemente éstas son afirmaciones infundadas. En ninguna parte del informe de la Shipping Research Bureau existen tales informaciones. En realidad, en su último informe la oficina expresa lo siguiente:

"La Asamblea General de las Naciones Unidas, con el voto favorable de la abrumadora mayoría de las naciones del mundo, ha instado reiteradamente a todos los países que impongan un embargo de petróleo contra Sudáfrica. Muchos gobiernos han respondido. Aproximadamente - y subrayo la palabra "aproximadamente" - todos los países que exportan cantidades importantes de petróleo crudo, incluyendo todos los miembros de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la Organización de los Países Arabes Exportadores de Petróleo (OPAEP) siguen ahora la política de no vender petróleo crudo a Sudáfrica. Sin embargo, a pesar de este embargo Sudáfrica logra obtener petróleo crudo."

"Muchas compañías petroleras y navieras han puesto en claro que no están dispuestas a asumir los riesgos implícitos en la violación de las políticas de embargo de los países exportadores de petróleo."

Además, la Oficina ha confirmado en una comunicación oficial que ninguna compañía conocida como vinculada con cualesquiera de los 57 buques-tanque que entregaron crudo al Sudáfrica tiene base en Kuwait y que ninguno de esos 57 buques-tanque zarpó de Kuwait hacia Sudáfrica.

El representante de la entidad sionista no sólo ha informado falsamente, sino que persiste en su campaña de desinformación. Kuwait no tiene relaciones con el régimen racista de Sudáfrica. Kuwait ha trabajado activamente con otros Estados Miembros interesados para continuar la aplicación y el fortalecimiento de sanciones amplias contra el régimen racista de Sudáfrica. Kuwait presidió el Grupo de Expertos para estudiar medios y maneras de aplicar efectivamente el embargo petrolero contra el régimen racista de Sudáfrica, en cumplimiento del mandato de la Asamblea General en su resolución 69/37 J. Permítaseme añadir que ese Grupo de Expertos observó que la oposición de importantes Potencias occidentales impidió el embargo petrolero obligatorio impuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El régimen racista de Sudáfrica ha podido obtener abastecimiento petrolero por medios secretos e ilícitos. El Grupo ha observado que Sudáfrica continúa obteniendo petróleo por distintos medios y más a través de una red internacional de empresas petroleras transnacionales, especialmente aquellas con intereses creados en Sudáfrica que han realizado grandes inversiones en su industria energética y petrolera.

Finalmente, una cosa está clara: los alegatos de los sionistas israelíes están dirigidos a desviar la atención de esta Asamblea de las relaciones especiales entre la entidad sionista y el régimen racista y su creciente colaboración. Esa alianza impía se halla bien documentada en el informe especial del Comité Especial contra el Apartheid, documento A/40/22/Add.2.

Se levanta la sesión a las 21.35 horas.